

LA COYUNTURA ECONOMICA: CONCILIACION Y LUCHA DE CLASES felipe portocarrero

NUEVA DEPENDENCIA Y CRISIS POLITICA EN ARGENTINA juan carlos portantiero

LA OTRA CARA DE LA MONEDA paul singer

LAS NUEVAS PERPECTIVAS DE LA CLASE OBRERA anibal quijano

LOS TRABAJADORES CALLADOS francisco c. weffort

EL FASCISMO HOY rui mauro marini

SOCIEDAD Y POLITICA 3



SOCIEDAD Y POLITICA

AÑO 1 - REVISTA TRIMESTRAL
DIRECCION:

No. 3-Mayo 1973 - LIMA - PERU
Anibal Quijano

COMITE DE REDACCION:

Heraclio Bonilla
Julio Cotler
César Germaná
Felipe Portocarrero
Ernesto Yépez

COMITE ASESOR INTERNACIONAL:

Sergio Bagú (Argentina)
Fernando Henrique Cardoso (Brasil)
Agustín Cueva (Ecuador)
Samuel Lichtztejn (Uruguay)
Edilberto Torres Rivas (Guatemala)
Rodolfo Stavenhagen (México)

INDICE

EDITORIAL		Pág. 1
PERU		
La Coyuntura Económica:	Conciliación y lucha de clases, Felipe Portocarrero	Pág. 4
AMERICA LATINA		
Nueva dependencia y crisis política en Argentina,	Juan Carlos Portantiero	Pág. 20
INTERNACIONAL		
La Otra cara de la moneda,	Paul Singer	Pág. 30
LA POLITICA Y EL COMENTARIO		Pág. 34
COYUNTURA		
Las Nuevas perspectivas de la clase obrera	Anibal Quijano	Pág. 36
CRITICA		
Brasil: Los trabajadores callados	Francisco C. Weffort	Pág. 52
Chile: El Fascismo Hoy,	Ruy Mauro Marini	Pág. 54

La responsabilidad por el contenido de los artículos corresponde a sus autores. La Revista sólo es responsable por las notas Editoriales. Toda colaboración que se envíe a la Revista será bienvenida, pero no se mantendrá correspondencia sobre colaboraciones no solicitadas debido a la limitación de nuestros recursos.

Publicación y Distribución: Empresa Editora Sociedad y Política. Suscripción anual: En el Perú S/. 200,00, en el extranjero US\$ Dls. 10,00 Para suscripción y correspondencia dirigirse a Sociedad y Política, Apartado Postal 11154, Sta. Beatriz, Lima - Perú.

Juan Barco - Taller de imprenta y Editorial - Jirón Ica 820



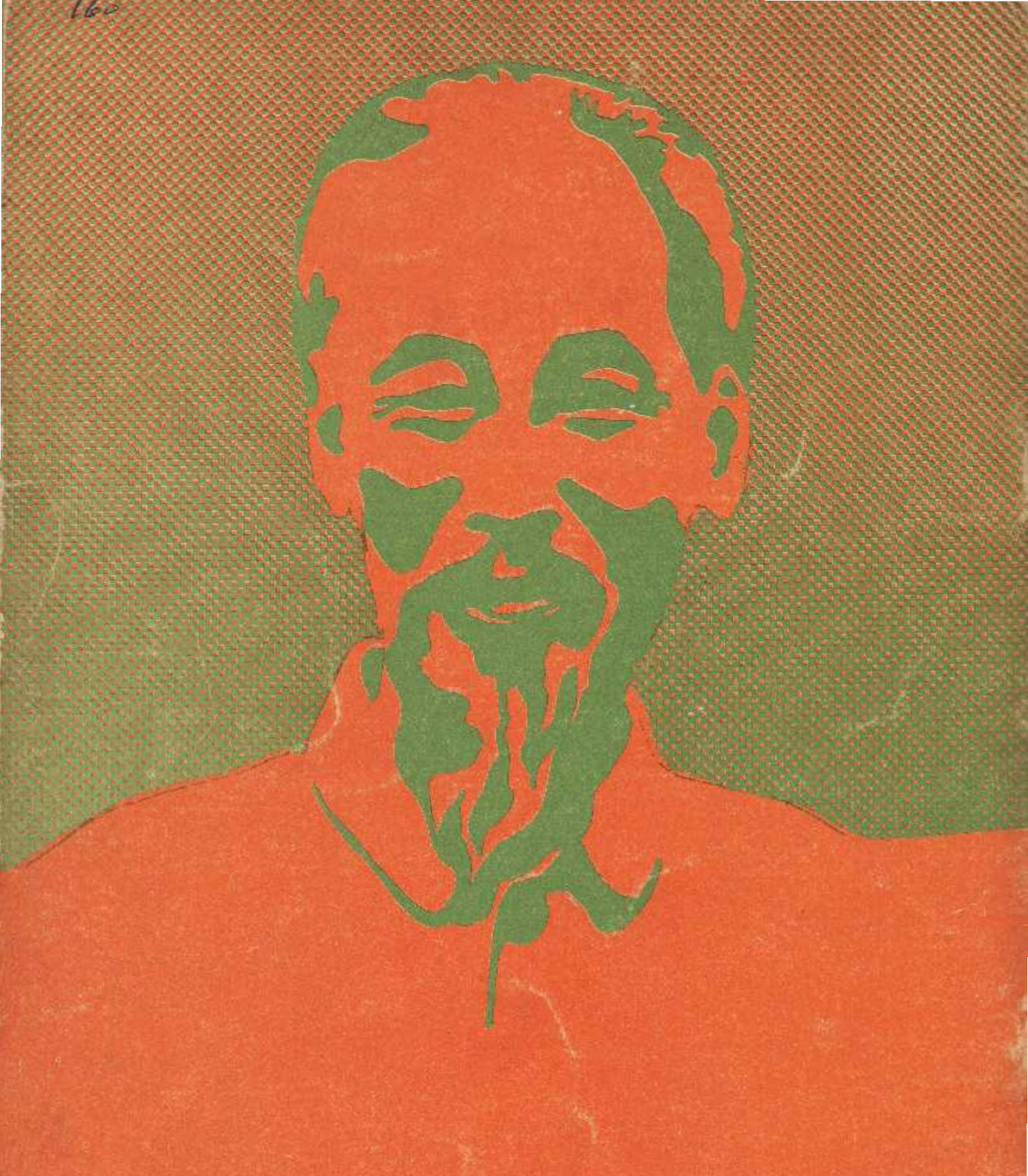
AMILCAR CABRAL

“Una de las distinciones importantes entre la situación colonial y neocolonial reside en las perspectivas de la lucha. En el caso colonial (en el que la “NACION-CLASE” combate contra las fuerzas de represión de la burguesía del país colonizador) puede conducir, al menos en apariencia, a una solución nacionalista (revolución nacional): La nación conquista su independencia y adopta, en hipótesis, la estructura económica que más le conviene. El caso neocolonial (en que las clases trabajadoras y sus aliados, luchan simultáneamente contra la burguesía imperialista y la clase dirigente nativa) no se resuelve por una solución nacionalista; exige la destrucción de la estructura capitalista implantada por el imperialismo en el territorio nacional, y postula justamente una solución socialista.

Esta distinción resulta principalmente de la diferencia de nivel de las fuerzas productivas en los dos casos, y de la consiguiente agravación de la lucha de clases”.

Amílcar Cabral
'El Arma de la Teoría'

160



Ahora, ni el camino es tan largo,
ni estoy solo.

EDITORIAL

Desde que apareció el segundo número de Sociedad y Política, nuestras previsiones sobre la aceleración de los aprestos corporativistas y de una escalada represiva contra las demandas de los trabajadores y sus organizaciones han tenido una creciente confirmación.

La ilegalización en la práctica, de la totalidad de las recientes huelgas de diversos sectores de trabajadores, el desconocimiento administrativo de la representatividad de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, constituyen una abierta amenaza al derecho democrático de los trabajadores de respaldar por medio de huelgas sus reivindicaciones salariales, y de organizarse sindicalmente fuera del control administrativo del Estado burgués.

La creación de la Confederación de los Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), por iniciativa de organismos político-militares del régimen, como una entidad que proclama abiertamente el abandono de las reivindicaciones de los trabajadores, para presentarse como un "sindicalismo participacionista y no reivindicacionista", esto es, como un sustento político del régimen, demuestra sobradamente el carácter corporativista de la política sindical oficial, que busca el control estatal de las organizaciones de los trabajadores.

La CTRP viene, así a sumarse al SINAMOS, a las Ligas Agrarias, a las Asociaciones Gremiales Industriales, como parte del sistema de control político corporativista que el régimen trata de implantar aceleradamente, para encuadrar las movilizaciones de las masas en las rejas de la política oficial, contener las demandas reivindicativas de los trabajadores, y lanzar sobre los hombros de éstos los efectos de las dificultades económicas actuales, para mantener las bases de la acumulación capitalista.

La disminución relativa de la producción de los bienes industriales de consumo popular, como la respuesta de la burguesía al agotamiento de la capacidad de compra de las masas por la baja de sus salarios reales y la disminución de la masa general de salarios por la paralización de la pesca y de las actividades conexas, así como por la disminución de las actividades de construcción, son factores objetivos que dentro de la política capitalista del régimen militar significan la necesidad de profundizar los acuerdos con la inversión y el financiamiento imperialista, de contener las demandas populares, y de controlar las organizaciones populares y todo el aparato de información y de comunicación pública en el país.

Los trabajadores peruanos ingresan de este modo en una etapa preñada de riesgos para la independencia clasista de sus organizaciones, para la defensa de su nivel de vida en franca disminución, para la defensa de sus conquistas democráticas de huelga, de organización, de información y de participación explícita en el debate nacional sobre el destino del país.

Esta esquina de la historia nacional se hace aún más peligrosa para los trabajadores, debido al debilitamiento de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), hasta ahora el más importante producto de las luchas del proletariado por su emancipación del dominio ideológico y sindical aprista y oficialista.

El debilitamiento de la única Central clasista del proletariado peruano, se debe al pronunciado y creciente distanciamiento de las bases frente a la actual dirección de esta Central, y eso, a su vez, se debe a la política conciliadora, ambivalente, burocrática, que la actual dirección, por su tendencia de reformismo obrero, ha venido practicando en el actual proceso frente al régimen militar. La desafiliación de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, la más importante base de la CGTP, lleva a un punto de crisis la situación de esta Central.

El ahondamiento de la desarticulación sindical y política de los trabajadores peruanos que esta situación de la CGTP implica, agudiza los riesgos de que la embestida corporativista y represiva pueda ingresar en su fase más agresiva, en el preciso momento en que los trabajadores requieren poner en primer plano toda su capacidad de cohesión, de firmeza y de movilización organizada.

El creciente control que el Estado burgués ejerce sobre los medios de información y de comunicación pública, la norma impuesta de considerar como secretos oficiales las informaciones básicas sobre la marcha económica del país, la cada vez más abierta arbitrariedad en el trato a los opositores y críticos de la política militar corporativista, son otros tantos elementos que prefiguraran un curso represivo que pone en peligro el mantenimiento de las libertades democráticas, tan costosamente conquistadas por las masas populares, en decenios de lucha contra la represión oligárquica y el oscurantismo que impide el debate público y abierto sobre la marcha de esta sociedad.

Nadie que no sea la clase trabajadora, tiene derecho a decidir por sí y ante sí el curso de la historia peruana. Esa potestad de los trabajadores proviene de su condición de productores de todos los bienes, servicios y riquezas que la sociedad tiene en cada momento; del hecho inocultable de que sobre las espaldas de los trabajadores se funda la existencia misma de una sociedad organizada. Quienes los explotan o ayudan a su explotación carecen de toda legitimidad histórica para erigirse en censores y controladores del debate político público en el país, y de decisores acerca de la representatividad de las organizaciones que los propios trabajadores se dan, desde sus propias bases, con autonomía clasista frente a la burguesía y frente al Estado burgués.

Las libertades públicas en el Perú, precariamente establecidas, son el fruto de las luchas de los trabajadores. Nadie tiene el derecho de conculcarlas, de intentar acallar la voz de los más abnegados militantes de la causa del proletariado y todavía al margen de las mismas leyes dictadas por el poder vigente.

Los trabajadores y el pueblo entero, organizadamente, tienen que salir al frente de toda arbitrariedad, de todo intento de control burocrático de sus organizaciones y de represión sobre sus cuadros de vanguardia. Ninguna conciliación, ninguna ambivalencia caben en esta lucha de todo el pueblo por su propia liberación, pues la conciliación sólo sirve para fortalecer la arbitrariedad y pavimentar la vía de la represión. Toda conciliación es una complicidad, como el silencio.

A los nombres de Hugo Blanco y de Rolando Breña, se suma ahora el de Ricardo Napuri, militante revolucionario recientemente exilado de modo tan arbitrario como los anteriores, bajo el más perfecto silencio de toda la prensa, que no vaciló, sin embargo, en denunciar la misma práctica hecha en la persona del Sr. Rey de Castro, periodista de la extrema derecha peruana, en cuya defensa sí salieron incluso muchos de los propios simpatizantes del régimen militar.

La reciente enfermedad del Jefe del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada ha dado ocasión para que todos los recursos del poder fueran empleados en producir un importante acto de masas, en apoyo al General Velasco. En esta manifestación, fueron los habitantes de las barriadas, Pueblos Jóvenes en la nomenclatura sociológica oficial, además de los grupos burocráticos de las organizaciones sindicales conducidas por el reformismo obrero del Partido Comunista Peruano, y las representaciones de la CTRP y de la CNT (Social Cristiana), quienes proporcionaron el contingente principal.

Este acto de masas que confiere una base de "legitimidad" al reformismo corporativista, tendrá sin duda consecuencias importantes para el rumbo futuro de las tendencias actuales del régimen, y para sus relaciones con las masas.

Nunca como ahora, por todos estos factores del escenario político actual del Perú, fue tan imperativo en nuestra historia, fortalecer y mantener enhiestas toda nuestra capacidad de contribuir a la clarificación de la conciencia de clase de los trabajadores, y todo nuestro compromiso con la causa irrenunciable de su liberación de la explotación capitalista, bajo cualquiera de sus formas, y bajo cualquiera de sus máscaras ideológicas.

Nunca como ahora fue tan urgente y decisiva, la cohesión organizada y consciente de los trabajadores de la ciudad y del campo, de todos los sectores populares, de todos los sectores socialistas revolucionarios del país, para resistir y destruir la agresión corporativista, las ilusiones del reformismo pequeño burgués y obrero entre las masas, la abusiva cháchara "socialista libertaria" de los "izquierdistas" del corporativismo. Para, en fin, organizar la lucha de las masas por la destrucción de la explotación capitalista imperialista y la construcción del poder de los trabajadores para la reorganización socialista revolucionaria de nuestra sociedad.

La fabricación de rumores, de consignas, panfletos, volantes, destinados a destruir la imagen de los militantes revolucionarios y reducir su audiencia, a introducir torpes insidias entre los núcleos socialistas revolucionarios adjudicando a unos y a otros la paternidad de esos engendros, recuerdan mucho el arsenal de técnicas de "guerra psicológica" desarrolladas en la lucha contrarrevolucionaria por los aparatos de represión de la burguesía.

Es necesario agudizar la vigilancia revolucionaria contra los efectos de esas perversas técnicas, y pasar a la defensa abierta de todos los militantes revolucionarios, impedir la arbitrariedad de todos los actos represivos contra ellos, defenderlos de la calumniosa ofensiva de los escritores oficialistas.

Los trabajadores clasistas y todos los revolucionarios socialistas del país, deberemos sostener bajo todas las presiones y represiones, nuestra filiación y nuestra fe, cerrar filas en torno de las

organizaciones clasistas de los trabajadores, resistir la agresión del corporativismo y atravesar un período acaso prolongado, con la capacidad de lucha y la honestidad revolucionarias sin mácula ni mella.

Este número de Sociedad y Política sale a la calle con bastante retraso. La explicación principal de ello la encontrarán los lectores en el contenido de la revista: Un esfuerzo de organizar la información y reflexión en función de la coyuntura concreta que estamos denunciando y de acumular elementos que ayuden al desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores. Esa tarea no es corta ni fácil, debido, precisamente a todas las argucias de ocultamiento de las informaciones básicas, de una parte; de la otra, a la debilidad de los previos conocimientos sobre los problemas esenciales del país, producto del oscurantismo a que la continuidad de la represión imperialista sometió a la vida intelectual del Perú y que hoy amenaza regresar.

Los responsables de esta edición, creemos que es todavía necesario mantener el esfuerzo de explicación de las condiciones actuales. Eso no justifica, pero ojalá disculpe la longitud y la densidad de los materiales principales. Tenemos, sin embargo, la convicción de que esas contribuciones son importantes para la clarificación de los problemas. En los números siguientes, seguramente estos materiales serán más cortos y también más concretos. Nuestra tarea es también un aprendizaje, y en ese sentido valorizamos con lealtad y con limpieza las críticas provenientes desde dentro de la militancia socialista revolucionaria.

No tenemos la inútil pretensión de que la tarea hasta aquí cumplida es plenamente satisfactoria. Es bueno señalar, no obstante, que nada puede resaltar mejor la importancia de este esfuerzo que el práctico homenaje rendido a esta revista, por los melancólicos intentos de refutación oficialista, la grosería de sus insultos y de sus calumnias, y hasta por el hecho de publicitar *Participación* la revista de los ideólogos oficiales, con avisos periodísticos que buscaban persuadir a los lectores de que había que leer esa revista porque era una respuesta a *Sociedad y Política*.

A pesar de lo cual, los ideólogos oficialistas no se han cansado de repetir que no tenemos importancia y que no representamos a nadie. ¿Para qué tanto salto, entonces, si está tan parejo el suelo?

Para el movimiento socialista revolucionario peruano, que los crecientes núcleos de trabajadores conscientes representan y construyen, ésta es una etapa de clarificación y la crítica es indispensable entre todas sus corrientes. Pero también es y sobre todo, una hora de construcción y de resistencia. La solidaridad y la cohesión en el trabajo diario de organizar la lucha de los trabajadores, es una condición que debe ser cultivada y desarrollada. Por eso, con orgullosa alegría, reconocemos el estímulo y el respaldo que los trabajadores clasistas y la juventud revolucionaria nos entregan de manera cada día más amplia y más firme, junto con el valor de su crítica. En eso se funda nuestra más clara esperanza revolucionaria y nuestra convicción de pertenecer a la propia ruta del destino revolucionario del proletariado peruano.

**SOCIEDAD
Y POLÍTICA**

la coyuntura económica: Conciliación y lucha de clases

I.— ACUMULACION Y LUCHA DE CLASES EN 1960-1968:
LA ECONOMIA SEMICOLONIAL Y SUS TRANSFORMACIONES.

a

partir de los años cincuenta la sociedad peruana ingresa en un período de importantes transformaciones, que se manifiestan por el creciente predominio que adquiere el polo urbano-industrial de la economía y por la aparición de nuevas modalidades de penetración del imperialismo en las actividades industriales, comerciales y financieras. En efecto, en el período anterior a 1950 la estructura productiva se caracterizaba predominantemente por la articulación de los monopolios imperialistas de los enclaves agro-mineros, productores de materias primas para la exportación, con importantes sectores precapitalistas, rasgos que configuraban la profunda heterogeneidad estructural de la sociedad peruana, otorgándole un carácter semicolonial. Dentro de esta estructura el proceso de acumulación y reproducción del capital era controlado por los enclaves imperialistas y, en forma secundaria, por la burguesía nativa.

Tanto la ampliación de la base exportadora y la diversificación de los productos exportados, como la crisis de las estructuras precapitalistas en el agro estimulaban el desarrollo del incipiente mercado urbano en los años cincuenta, permitiendo que el mayor volumen de acumulación de capital fuese dirigido por la burguesía nativa e imperialista al desarrollo de las actividades industriales y de la construcción, utilizando la abundante oferta de fuerza de trabajo a bajo costo para satisfacer la creciente demanda de los sectores medios y populares urbanos, que experimentaron una significativa ampliación a consecuencia de la migración determinada por la ya mencionada crisis del agro. Es así como en el interior de esta estructura semicolonial se fue desarrollando progresivamente una nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital, acelerando la desagregación de las estructuras precapitalistas. La crisis oligárquica de los años sesenta es consecuencia de estas transformaciones, que si bien desarticulaban el sistema de dominación tradicional, no provocaron el establecimiento de la hegemonía política de la burguesía urbano-industrial.

Dentro de este contexto la intervención del Estado

en la economía era sumamente restringida, limitándose a la construcción de una infraestructura y a la concesión de facilidades crediticias, tributarias y arancelarias, con el fin de estimular la inversión privada, principalmente la de los monopolios imperialistas. Asimismo, a través de la política cambiaria y del gasto público el Estado transmitía al resto de la economía las fluctuaciones del sector externo, optando por una política expansionista en los períodos de auge exportador y aplicando políticas de estabilización y restricción de la demanda interna en las fases de crisis del sector externo, manteniendo de esta forma la capacidad de acumulación de la burguesía nativa e imperialista a costa de las clases dominadas. Aunque a partir de 1963 se amplía el ámbito de las intervenciones del Estado, pero sin transformarlas cualitativamente, la dinámica de la economía es determinada fundamentalmente por el "libre juego de las fuerzas del mercado", es decir por el desarrollo del proceso de acumulación de la burguesía nativa e imperialista.

En los años sesenta, este tipo de desarrollo capitalista había creado una estructura económica caracterizada por tres rasgos fundamentales:

1.— El mantenimiento de una gran heterogeneidad estructural, consecuencia del carácter desigual y combinado del desarrollo del capitalismo en el Perú, que se articulaba con importantes sectores pre-capitalistas. Esta situación se expresa en las grandes diferencias en el desarrollo de las fuerzas productivas y de la productividad del trabajo entre las diferentes ramas de la actividad económica, así como en la existencia de abismales diferencias de productividad dentro de cada rama. Igualmente, este tipo de desarrollo capitalista conllevó la aparición de una importante superpoblación relativa, manifestada por la generalización del desempleo y el subempleo en la ciudad y el campo, creando un ejército industrial de reserva que limitaba el alza de los salarios.

2.— El alto grado de concentración de la producción dentro de las ramas más productivas, como la agricultura de exportación, la gran minería y la industria, que estaban dominadas por un reducido número de empresas imperialistas que gozaban de una posición de monopolio, permitiéndoles obtener ganancias extraordinarias. Es así que el 88.7 o/o del valor de la producción minera en 1969 era controlado, directa o



indirectamente, por tres grandes empresas extranjeras: la Cerro de Pasco, la Southern Perú y la Marcona Mining. (1).

Asimismo, en 1968, 41 grandes empresas extranjeras controlaban el 33,15 o/o del valor bruto de la producción industrial (2).

3.- La fuerte concentración del ingreso como consecuencia de la concentración de los medios de producción. Una importante fracción del ingreso nacional es monopolizada por la burguesía, y por los sectores medios asociados a ella, determinando que la es-

tructura productiva se dirija fundamentalmente hacia actividades destinadas a satisfacer la demanda de estos sectores sociales, marginando y excluyendo a las clases dominadas.

Como ya se ha indicado, la economía peruana en el período 1960-1968 experimentó un rápido crecimiento determinado por la ampliación de la base exportadora y por el inicio de un tardío proceso de sustitución de importaciones, logrando la burguesía nativa e imperialista desarrollar la acumulación de capital y la expansión del aparato productivo, como puede apreciarse en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 1 : Indicadores macroeconómicos del crecimiento 1960 - 1968

	Var. Anual PBI (%)	Var. Anual PBI per cápita (%)	Coefficiente de Inversión	Var. Anual Consumo	(%) Inver.
1960			0,20		
1961	8,2	5,3	0,21	6,2	13,9
1962	8,8	5,8	0,22	10,0	10,9
1963	3,9	0,8	0,20	9,0	-5,2
1964	6,8	3,7	0,19	7,0	4,5
1965	4,9	1,8	0,21	9,7	13,4
1966	5,7	2,6	0,24	7,6	22,3
1967	4,6	1,5	0,25	0,7	7,0
1968	1,4	-1,7	0,19	-0,8	-21,0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) "Plan Económico Anual 1970" Vol. II, págs. 139, 140 y 144.

Este desarrollo del proceso de acumulación atravesó por dos fases. La primera, que se extiende de 1960 a 1963, se caracterizó por el mantenimiento de las tendencias que se presentaban desde 1950: un crecimiento estimulado por la expansión de las exportaciones, con el consiguiente dinamismo del mercado interno, y por una política económica de naturaleza oligárquica, destinada a favorecer la acumulación de los enclaves imperialistas y de la burguesía nativa a través de la contención de las presiones populares. Sin

embargo, las transformaciones mencionadas, manifestadas por el progresivo dominio del polo urbano-industrial de la economía, así como por el aumento

(1) cf. C. Brundenius "The anatomy of Imperialism: The case of Multi-national Mining Corporations in Perú". *Journal of Peace Research*, No. 3, 1972, pág. 192.

(2) cf. H. Espinoza y J. Osorio "El poder Económico en la industria" Ediciones UNFV, Lima 1972, p. 91.

de las presiones populares, generaron la crisis del modelo oligárquico y la implantación de un intento reformista, que pretendía resolver las contradicciones que se presentaban entre el desarrollo de la nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital y las bases semicolonias y precapitalistas de la sociedad peruana. Es así que se abre una segunda fase en el desarrollo del proceso de acumulación entre 1963 y 1968.

EL DESARROLLO DE LAS TRANSFORMACIONES Y LAS CONTRADICCIONES RESULTANTES: EL ÚLTIMO PERIODO DEL MODELO OLIGARQUICO

El desarrollo del proceso de acumulación en esta fase se explica por el aumento y diversificación de las exportaciones, y por el inicio de un proceso de sustitución de importaciones, estimulado por la Ley de Promoción Industrial de 1959, que concedía exoneraciones tributarias y liberaba las importaciones de maquinaria y equipo para la industria, al mismo tiempo que le garantizaba una fuerte protección arancelaria. La política económica, marcada por la naturaleza aún oligárquica del Estado, se dirigía dentro de una orientación liberal a transmitir al resto de la economía la dinámica del sector externo vía el incremento de la liquidez y del gasto público, manteniendo a niveles relativamente moderados los gastos corrientes y logrando un importante ahorro en cuenta corriente, permaneciendo así el déficit presupuestal dentro de límites manejables. Se intentaba a través de esta política económica estimular la inversión de la burguesía imperialista y nativa, gracias al mantenimiento de bajos niveles salariales y de tributación, asegurando la obtención de altas tasas de ganancia.

La expansión se orientaba a la satisfacción de las exigencias de consumo de la burguesía y de los sectores medios, dada la concentración del ingreso resultante del tipo de desarrollo capitalista del Perú; asimismo, se buscaba incorporar segmentariamente a los beneficios de la expansión a algunos sectores populares, que gracias a su mayor articulación sindical y política tenían una mayor capacidad reivindicativa.

En este período las exportaciones experimentaron un fuerte aumento, pasando de US\$ 315.0 millones en 1959 a US\$ 541.2 en 1963 (3), debido al desarrollo de las exportaciones de harina de pescado, que aumentaron entre ambas fechas de US\$ 42.5 millones a US\$ 120.2 millones, y a la puesta en explotación de las minas de Toquepala, en 1960, que permitieron triplicar la exportación de cobre, de US\$ 24.9 millones en 1959 a US\$ 87.3 millones en 1963 (4). Es importante destacar que el crecimiento de la industria pesquera estimuló fuertemente la producción industrial, mediante la compra de insumos fabricados en el país, como redes, embarcaciones pesqueras, etc. integrándose en mayor medida que las demás actividades exportadoras a la economía nacional. El desarrollo de esta industria permitió a la burguesía nativa ampliar su acumulación de capital, ya que ésta controlaba en sus inicios la producción pesquera.

La ampliación del polo urbano-industrial de la economía se manifestó por la expansión del sector industrial que fue estimulada por el comportamiento dinámico de las exportaciones y por la política económica del Estado, destinada a favorecer la sustitución de las importaciones. La tasa de crecimiento del sector fue de 8.9 o/o entre 1960 y 1965, aumentando su participación en el PBI del 16.6 o/o en 1960 al 17.6 o/o en 1963 (5). Dado el uso de una tecnología intensiva en capital la expansión industrial no generó un aumento correlativo del empleo en el sector fabril. Por otro lado, el esfuerzo de sustitución de importaciones se dirigió esencialmente hacia la producción de bienes de consumo destinados principalmente a la demanda de la burguesía y de los sectores medios, dado el alto grado de concentración del ingreso. La consiguiente estrechez del mercado y el incipiente desarrollo de la industria de bienes de capital determinó el desarrollo de una industria de "ensamblaje", con un alto índice de insumos y bienes de capital importados, incapaz de dar origen a un aparato industrial integrado, con un débil desarrollo tecnológico y una reducida capacidad de generación de empleo.

El crecimiento económico provocó una dinamización de la construcción, tanto por efecto de los programas de inversión pública en obras de infraestructura como a consecuencia de la mayor actividad del sector privado, que se dirigió a satisfacer la demanda de la burguesía y de los sectores medios. Este crecimiento contribuyó a la ampliación del empleo urbano y por ende del consumo de los sectores populares. La construcción se expandió a una tasa del 7.7 o/o anual entre 1960 y 1965 (6).

La expansión económica condicionó un fuerte incremento de las importaciones, que aumentaron de US\$ 340.9 millones en 1960 (7) a US\$ 517.8 millones en 1963, debido fundamentalmente a las mayores compras de alimentos para satisfacer la creciente demanda urbana, así como de insumos industriales y de bienes de capital necesarios para mantener la expansión de la actividad industrial.

Esta política económica de carácter oligárquico logró que el crecimiento económico no fuese acompañado de mayores presiones inflacionarias gracias a la contención de las reivindicaciones salariales y de las demandas redistributivas de las clases dominadas, posibilitándose así el mantenimiento de una relativa estabilidad monetaria dentro de una economía abierta.

EL INTENTO REFORMISTA DE BELAUNDE: 1963-1968

Las transformaciones estructurales de la sociedad peruana, determinadas por el progresivo predominio del polo urbano industrial de la economía y por la aparición de una nueva modalidad de acumulación y

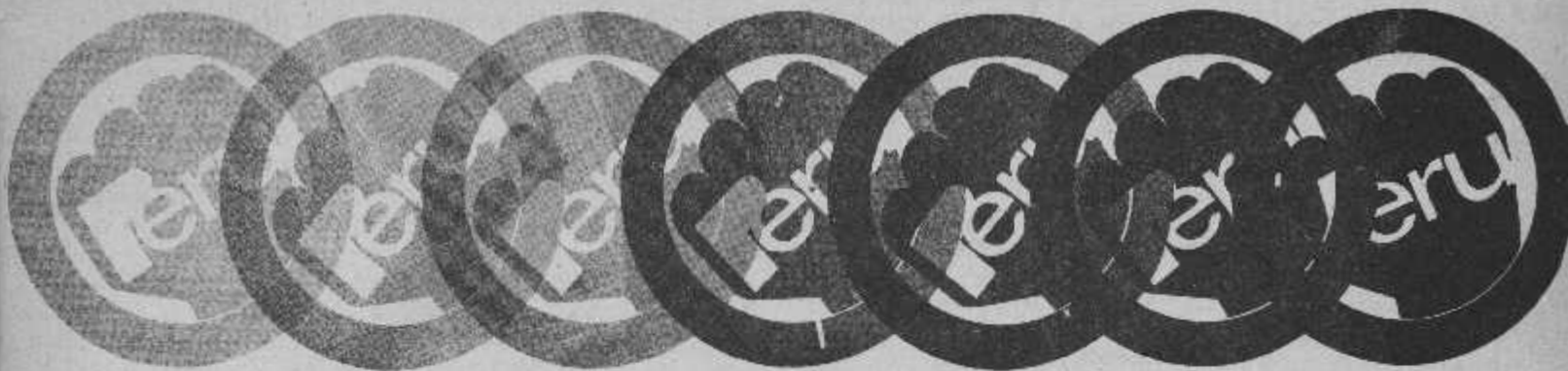
(3) cf. CIAP: "El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para el desarrollo del Perú" Washington, 26 de Mayo de 1972, vol. II, p. AE-26

(4) cf. CIAP, oop. cit., vol. II, p. AE-26

(5) cf. CIAP, op. cit., vol. II, p. AE-10

(6) cf. CIAP, op. cit., vol. II, p. AE-10.

(7) cf. MEF, op. cit., vol. II, p. 230 - A.



de reproducción del capital dentro de esta estructura semicolonial, tuvieron como consecuencia la profundización de la desagregación de las estructuras de producción precapitalistas y la movilización política de importantes sectores populares, manifestada por el auge del movimiento campesino y la radicalización del movimiento obrero y estudiantil, engendrando las crisis del modelo de dominación oligárquico.

El aumento y radicalización política de las movilizaciones de los sectores medios y populares posibilitaron el triunfo del intento reformista de Belaúnde, que pretendía resolver las contradicciones que se presentaban entre la nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital y la base semicolonial y precapitalista de la sociedad peruana. Se trataba de realizar las más urgentes reformas estructurales, como la reforma agraria, modernizando las estructuras económico-sociales y satisfaciendo las más visibles reivindicaciones populares. Sin embargo, la debilidad de la burguesía industrial-urbana, la ambivalencia de los sectores medios y la heterogeneidad de su base social, así como el temor a las movilizaciones populares que amenazaban con desbordar los cauces del sistema, determinaron que el régimen de Belaúnde no fuese capaz de vencer la resistencia de la oligarquía a la realización de estas reformas y a la redistribución del ingreso.

El régimen reemplazó la implementación de estas medidas mediante la realización de un ambicioso programa de obras públicas destinadas a contener las demandas populares sin introducir una redistribución del ingreso y un cambio en la estructura de la producción, que hubiera implicado la realización de una efectiva reforma agraria y la reestructuración de las relaciones con los enclaves imperialistas. Se intentaba reforzar la base social del régimen a través del crecimiento económico y del aumento del consumo popular sin introducir reformas estructurales.

Esta situación conllevó el abandono de la política económica de carácter oligárquico, extendiendo el ámbito de la intervención del Estado en la economía, aunque sin transformarla cualitativamente. En efecto, la contención de la demanda de los sectores medios y populares implicaba un aumento del gasto público, especialmente en los campos de la educación, la salud y la creación de empleo en el sector público, dando origen a un sustantivo incremento de los gastos corrientes. Por otro lado, el ambicioso programa de obras públicas originó un fuerte incremento de los gastos de capital del Estado.

Este aumento del gasto público no pudo ser compensado por el incremento de los ingresos tributarios a causa de la oposición de los sectores conservadores y de la debilidad de las fuerzas reformistas, que impidieron la realización de las reformas redistributivas. Este hecho determinó que aumentase la importancia relativa de los impuestos indirectos frente a los directos, representando los primeros el 61.0 o/o del total en 1960-1961 y el 65.4 o/o en 1966-1967 (8). Es decir, se agravó la presión fiscal que pesaba directamente sobre las clases dominadas. El bloqueo de las medidas redistributivas determinó que aumentase rápidamente el déficit presupuestal, obligando al Estado a recurrir al financiamiento externo e interno, como puede apreciarse en el cuadro No. 2.

El intento reformista fue facilitado por una coyuntura internacional especialmente favorable, que se reflejó en una subida de los precios de los productos exportables del orden del 4.6 o/o anual entre 1965 y 1969 (9), posibilitando el alza de las exportaciones de US\$ 541.2 millones en 1963 a US\$ 866.1 millones en 1968. (10).

El dinamismo de las exportaciones y el aumento del gasto público estimularon el crecimiento del polo urbano-industrial de la economía, manifestado por la expansión de la actividad industrial y de la construcción, que experimentaron un aumento del 8.2 o/o y del 9.4 o/o, respectivamente, entre 1963 y 1967 (11).

Es importante destacar que durante este período la producción agrícola permaneció virtualmente estancada, presentando un crecimiento del 1.0 o/o anual entre 1963 y 1969 (12). Este hecho significó el deterioro de la producción per cápita de alimentos, forzando a incrementar fuertemente las importaciones. El estancamiento fue el resultado de la rigidez de la oferta agrícola, condicionada por el predominio de

(8) cf. CEPAL, "Tendencias y Estructuras de la Economía del Perú en el último Decenio". Mimeo., 11 de Encfo de 1972, p. 14.

(9) cf. CEPAL, op. cit., p. 28.

(10) cf. CIAP, op. cit., vol. II, en p. AE-26

(11) cf. MEF., op. cit., vol. II, p. 157.

(12) cf. MEF, op. cit., vol. II, p. 157.

los latifundios improductivos en la sierra y por las limitadas disponibilidades de tierra, así como por la inadecuada infraestructura de transporte y almacenamiento. Fue también de especial importancia la polí-

tica de bajos precios agrícolas que desalentaron la producción interna, favoreciendo el consumo urbano y transfiriendo excedentes del campo a la ciudad. Esta situación determinó el deterioro de los niveles de

Cuadro No. 2: Cuenta del Gobierno Central (en millones de soles de 1970)

	1965	1966	1967	1968
1. Ingresos corrientes.	33,795	35,576	36,157	36,929
2. Gastos corrientes	34,527	36,461	38,671	38,018
3. Ahorro en Cta. Cte.	-732	-885	-2,514	-1,039
4. Gastos de capital	8,580	8,788	8,579	7,053
5. Déficit	-9,302	-9,673	-11,093	-8,142
6. Financiamiento externo neto	885	4,159	4,347	2,085
7. Financiamiento interno neto	8,417	5,514	6,746	6,058

Fuente: CIAP. Op. cit., Vol. II, p. AE-32

productividad de la agricultura, el aumento del desempleo y el subempleo en el campo y el empeoramiento de las condiciones de vida de la masa campesina.

El intento de contener las demandas de los sectores medios y populares sin introducir una redistribución del ingreso y un cambio en la estructura de la producción implicó el aumento del gasto público y del déficit presupuestario, obligando al régimen a recurrir al financiamiento externo "duro" y a corto plazo, así como al uso creciente del financiamiento interno para realizar los grandes proyectos de infraestructura y aumentar el consumo popular a fin de mantener la paz social. El largo período de maduración de inversiones estatales determinó que se estimulase la demanda en el corto plazo sin ocasionar una correlativa ampliación de la oferta en el corto o mediano plazo.

Por efecto del explosivo aumento del déficit presupuestario y del tipo de inversión realizada por el Estado se creó una fuerte presión de demanda, que agravó las tensiones inflacionarias, originando a su vez la agudización de las reivindicaciones salariales. Esta situación tuvo como consecuencia el fuerte aumento de las importaciones, que pasaron de US\$ 517.8 millones en 1963 a US\$ 813.4 millones en 1967 (13), incremento al que también concurrió el mantenimiento de una paridad sobrevaluada del sol desde 1965. Se originó así un creciente déficit en la balanza comercial, que alcanzó US\$ 175.4 millones en 1967, el que unido a los crecientes pagos por servicios y por las remesas de utilidades de las inversiones extranjeras, cuyo monto en 1967 fue de US\$ 118.3 millones (14), produjo una crisis en la balanza de pagos y una baja en las reservas internacionales.

Es así como el régimen de Belaúnde ingresó en un período de crisis a fines de 1967; resultaba imposible

contener la presión de los sectores medios y populares y mantener la base social del régimen sin proceder a una redistribución del ingreso y sin realizar reformas estructurales.

Esta situación forzó al Estado a una devaluación de más del 40 o/o en setiembre de 1967, debiéndose adoptar una política de estabilización económica que incluía la congelación de salarios, la compresión del consumo popular, el aumento del desempleo y subempleo, y la introducción de restricciones monetarias, crediticias y fiscales. Esta política suponía el descargar el precio de la superación de la crisis sobre los sectores populares, abandonándose el intento de contener las presiones populares y deteriorándose gravemente la base social del régimen.

La crisis del régimen determinó la reformulación de las principales alianzas políticas, posibilitando un acuerdo del APRA con el ala "carlista" de Acción Popular, que permite, el 20 de julio de 1968, que el Parlamento conceda poderes especiales al Ejecutivo para resolver la situación económica y fiscal. Es así que el gabinete de Ulloa representaba un intento populista, pero tardío, de resolver la crisis, en la medida en que significaba el acuerdo de la burguesía urbano-industrial, representante de los nuevos intereses imperialistas, con el APRA, que articulaba a una fracción de los sectores medios y populares urbanos. Ulloa adoptó un conjunto de medidas destinadas a restablecer el equilibrio económico y la capacidad de acumulación. Estas últimas incluían la Reforma Tributaria, el aumento de impuestos, la refinanciación de

(13) cf. MEF, op. cit., vol II, p. 230 - A.

(14) cf. CIAP, op. cit., vol. II, p. AE-23.

la deuda externa, la restricción de las importaciones, la congelación de los salarios y el retorno a una ortodoxia fiscal, crediticia y monetaria.

Al mismo tiempo se inician negociaciones con las empresas imperialistas para la realización de nuevas inversiones en la minería y el petróleo, otorgándoseles condiciones especialmente favorables. Se intentaba así ampliar la base exportadora para reducir el estrangulamiento externo y posibilitar la expansión industrial. Estas medidas serían complementadas por la modernización del Estado y de la economía, y por la realización de las más urgentes reformas, así como por el establecimiento de un acuerdo con la IPC.

En síntesis, la superación de la crisis se obtendría gracias a la compresión del consumo popular, restableciendo la capacidad de acumulación de la burguesía nativa e imperialista. Se buscaba la consolidación del polo urbano-industrial de la economía y de una nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital, lo que implicaba la penetración creciente de las empresas imperialistas en todos los sectores productivos, acentuando su control del proceso de acumulación. Este tipo de crecimiento tendería a concentrar aún más la distribución del ingreso en beneficio de la burguesía y de los sectores medios asociados a ella.

II.- LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO MILITAR EN EL PERIODO 1968-1969.

a

Al tomar el poder el 3 de octubre de 1968 el Gobierno Militar tuvo que enfrentar una situación de crisis económica y fiscal, consecuencia de las contradicciones económicas y políticas que caracterizaron al régimen de Belaúnde.

El Gobierno Militar a partir de la nacionalización de la IPC y de la realización de la reforma agraria irá definiendo progresivamente un proyecto de transformaciones estructurales de carácter antioligárquico y nacionalista, que persigue la eliminación de los rasgos semicoloniales y precapitalistas de la sociedad peruana, homogeneizando su estructura y abriendo el paso a una nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital. Se inicia de esta manera la eliminación de la fracción oligárquica de la burguesía, al mismo tiempo que comienzan a redefinirse las relaciones del Estado con los enclaves imperialistas. Estas reformas se realizan dentro de un contexto de desmovilización política, sin buscar la organización y articulación de las clases dominadas que amenazarán con desbordar los cauces del proyecto reformista del régimen.

Inmediatamente después de la toma del poder el Gobierno Militar reordena y sistematiza las medidas de estabilización económicas adoptadas en la última fase del régimen de Belaúnde, emprendiendo una decidida intervención que va a permitir el restablecimiento del equilibrio económico en 1969.

Es así que para muchos observadores comienza a desarrollarse un creciente divorcio entre la política económica ortodoxa de corto plazo y la dinámica reformista del régimen, es decir, entre medidas coyunturales que hacen recaer sobre las clases populares el precio de la superación de la crisis y las reformas de carácter nacionalista y antioligárquico.

Sin embargo, este divorcio es solamente aparente. En efecto, gracias a la conjugación de ambos tipos de medidas el Estado puede preparar el terreno para una unificación posterior entre las políticas a corto y largo plazo, dentro de un plan de desarrollo basado en la realización de reformas estructurales y en la renegociación de las relaciones con la burguesía imperialista,

dentro de un proyecto de acumulación de capital bajo la égida del sector estatal. La realización de este proyecto exigía el restablecimiento del equilibrio económico y de la capacidad de acumulación del sistema, a fin de poder generar los excedentes necesarios para la materialización de los grandes proyectos de inversión en asociación con las empresas imperialistas.

Dado el contexto de desmovilización política de las clases dominadas y el deseo de no enfrentar frontalmente al imperialismo se opera el restablecimiento económico en base a la compresión del consumo popular, afectando favorablemente los márgenes de ganancia de la burguesía nativa e imperialista con el fin de crear "un clima de confianza" y facilitar su participación dentro de un nuevo proyecto de acumulación.

La política económica en el corto plazo en 1968-1969 se dirigió al restablecimiento del equilibrio económico y financiero, implementándose una estrategia ortodoxa, inspirada en las recomendaciones del FMI, que implicaba la restricción de la demanda de las clases populares, el congelamiento salarial, el aumento del desempleo y del subempleo, la compresión del gasto público, la limitación de las importaciones y la aplicación de restricciones monetarias y crediticias.

En efecto, el gobierno logró gracias a las medidas de racionalización y fiscalización del gasto corriente obtener un superávit presupuestal en 1969 de S/429 millones, no obstante haberse programado un déficit de apertura de más de S/5.500 millones, lo que significó que en términos reales los gastos de consumo del gobierno experimentasen una baja del 2.0 o/o (15), pudiéndose incrementar el ahorro en cuenta corriente del gobierno, que pasó de 2.988 millones en 1968 a 6.003 millones en 1969, reduciéndose en consecuencia fuertemente el recurso al financiamiento interno para la realización de los gastos de capital (16). Estas medidas implicaron congelar las remuneraciones de los empleados públicos, con la consiguiente erosión

(15) cf. BCR, "El Desarrollo Económico y Financiero del Perú de 1969 a 1972", Lima, set. de 1972, p. 14.

(16) cf. BCR, op. cit. p. 155

de su poder de compra. Por otro lado, el gasto público experimentó un aumento muy leve, pasando de 33,305 millones a 34,305 millones entre 1968 y 1969, contrastando con el dinamismo que lo había caracterizado el periodo anterior.

La política monetaria se orientó hacia una expansión moderada del crédito interno al sector privado, registrando el crédito interno un aumento del 10.6 o/o, menor que el crecimiento promedio de la década 1960-1970, que alcanzó la tasa del 15.8 o/o (17).

La congelación de las remuneraciones, así como el aumento del desempleo y el subempleo, implicaron una fuerte baja de los salarios en términos reales y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Es así que en términos reales los salarios promedio en Lima bajan de S/52.66 diarios en 1968 a S/45.63 en 1969, mientras que los sueldos promedio mensuales descendieron entre los mismos años de S/2,950 a S/2,596 (18).

La reducción de los gastos del Estado, el retorno al equilibrio presupuestal, la moderada expansión crediticia y la compresión del consumo popular permiten restablecer el equilibrio económico disminuyendo la tasa de inflación del 19.1 o/o en 1968 al 6.2 o/o en 1969 (19) y posibilitando el incremento del ahorro en cuenta corriente del Gobierno. Sin embargo, este restablecimiento se opera sacrificando el crecimiento de la economía lográndose un aumento del PBI de sólo 1.7 o/o en 1969 que es insuficiente para compensar el crecimiento demográfico, ocasionando por consiguiente un descenso del PBI per cápita del 1.4 o/o (20). Asimismo, aumenta el desempleo y el subempleo, y desciende la inversión en un 7.1 o/o, reduciéndose la expansión de la industria y de la construcción, al 1.9 o/o y -3.4 o/o, respectivamente.

En síntesis, la política económica en este período logra superar los efectos más negativos de la crisis coyuntural de 1967-1968, preparando a la economía para el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento y acumulación, gracias a la reducción de los salarios, del empleo y del consumo popular, haciendo recaer sobre las clases dominadas el peso de la superación de la crisis.

Por otro lado, el Estado introduce importantes modificaciones en el instrumental de la política económica, con el fin de aumentar su control sobre la coyuntura y reforzar la eficacia de sus intervenciones. Es así que se adopta un Plan Económico Anual, que sistematiza y coordina la política económica, produciéndose igualmente la peruanización de la banca comercial. Estas medidas son complementadas por la mayor fiscalización del gasto público, el perfeccionamiento del manejo presupuestal y la racionalización de la administración pública.

El éxito del programa de estabilización permite al Estado iniciar la preparación de un plan de desarrollo a mediano plazo y sienta las bases para una reactivación de la economía a partir de 1970, posibilitando asimismo la refinanciación de la deuda externa y la renegociación de préstamos e inversiones extranjeras, especialmente en el campo de la gran minería del cobre.

El proyecto reformista del régimen causa un retraimiento de las inversiones de las empresas imperialistas, que el Gobierno intenta superar obligando a las empresas mineras a presentar sus calendarios de inversión, so pena de perder sus concesiones. El principal resultado de esta política fue la firma del contrato de Cujane, que contempla la inversión de más de 350 millones de dólares, otorgando el Estado una serie de concesiones tributarias y arancelarias, garantizando a la empresa imperialista una alta tasa de ganancia.

III.— EL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO MILITAR

superados los efectos más negativos de la crisis de 1967 y restablecido el equilibrio económico, el Estado pasa a implementar una política de reactivación económica e inicia el diseño de una estrategia de desarrollo a mediano plazo, definiéndose así de manera progresiva el proyecto de acumulación que intenta realizar el régimen.

El primer paso en esta dirección fue la elaboración del Plan Económico Anual de 1970, que preparaba el terreno para la implementación del Plan de Desarrollo a mediano plazo de 1971-1975 aprobado a comienzos de 1971. El plan partía de un diagnóstico de la estructura productiva, dentro del cual la tarea del desarrollo consistía en el planteamiento y superación de tres problemas fundamentales:

1.— "Existencia de una rígida estructura social caracterizada por agudos contrastes en la distribución de la riqueza y en las posibilidades de acceso a los

bienes y servicios que la sociedad como un todo produce. Las grandes distancias sociales generadas en última instancia por esta apropiación diferencial de la producción social, hacen imposible la creación de una imagen nacional realmente unitaria.

2.— Desarticulación de un aparato económico cuya capacidad productiva es incipiente y cuyos efectos de propagación son casi nulos. La desarticulación del aparato económico tiende a reforzar una correspondiente desarticulación regional y ambas dificultan grandemente una efectiva integración del país y de su economía

(17) cf. CIAP, op. cit., vol. II, p. AE-30

(18) cf. MEF, op. cit., vol. II, p. 163

(19) cf. BCR, op. cit., p. 44

(20) cf. MEF, op. cit., vol. II, p. 139

3.- Subordinación de la economía peruana a centros foráneos de decisión en los cuales se originan acciones que afectan fundamentalmente la vida económica del país e impiden un proceso autónomo de desarrollo orientado al logro de objetivos nacionales". (21).

El plan define en base al diagnóstico anterior tres propósitos permanentes del desarrollo nacional:

A.- "Conformación de una sociedad más justa, sin privilegios, exenta de marginación y discriminación económica, social, política o cultural, que brinde crecientes posibilidades para conseguir el pleno e integral desarrollo de las capacidades humanas y el afianzamiento de una auténtica cultura nacional.

B.- Desarrollo acelerado y autosostenido, sustentado fundamentalmente en las potencialidades internas del país, a través de una estructura productiva articulada e integrada -tanto sectorial como regionalmente- y caracterizada por un aumento sustancial del producto interno, un mayor grado de eficiencia en el

uso de los recursos humanos y naturales y una mayor racionalidad en la ocupación del territorio nacional.

C.- Afianzamiento de la soberanía nacional, lo que implica reducir drásticamente las actuales condiciones de dependencia generalizada y de vulnerabilidad de la economía, garantizando el control nacional de los recursos internos, modificando el esquema tradicional de las relaciones económicas internacionales y dinamizando la contribución complementaria del sector externo en concordancia con la política nacional de desarrollo". (22)

El plan contemplaba la reducción del déficit de empleo productivo del 28,5 o/o de la PEA en 1970 al 16,8 o/o en 1975, lo que supone la creación de 1'164,000 nuevos puestos de trabajo (23). Asimismo, se preveía un crecimiento del PBI del orden del 7,5 o/o anual, sostenido en el dinamismo de la industria y la minería, tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 3

Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975: Estructura del PBI por sectores y tasas de crecimiento.

	Estructura 1970	Tasa promedio Acumulativa 1970-1975	Estructura 1975
Agropecuario	14.5	4.2	12.4
Pesca	2.1	4.8	1.9
Minería	6.8	5.7	6.3
Industria	20.9	12.4	26.0
Otros	55.7	6.6	53.3
Total, o/o	100.0	7.5	100.0

Fuente: (24)

La realización de estos objetivos supone una inversión cercana a los 270.000 millones de soles, a precios de 1970, y una elevación del coeficiente de inversión del 12.8 o/o en 1970 al 21.3 o/o en 1975, incrementándose en el quinquenio la inversión al ritmo del 18.9 o/o anual y el consumo al 6.0 anual (25). Para obtener este volumen de acumulación de capital se prevé un aumento de la inversión privada y pública del orden del 9.6 o/o y del 32.0 o/o anual, respectivamente. El crecimiento reposará sobre el incremento

de la inversión pública, que generará en los últimos años del plan una mayor expansión de la inversión privada "gracias al restablecimiento del clima de confianza derivado de la aceptación de las nuevas reglas de juego establecidas por el Gobierno Revolucionario" (26).

Es importante destacar que la inversión pública se dirigirá esencialmente hacia la industria y la minería en contraste con el período anterior donde se orientó principalmente a la construcción de obras de infraestructura.

Cuadro No. 4

Inversiones en la minería y en la industria según el Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975 (en millones de soles de 1970).

	Minería	Industria
Inversión total	59,242.0	99,477.1
Sector Público	20,889.3	29,677.1
Sector Privado	38,352.7	69,800.0

Fuente: (27)

(21) cf. "Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975", Vol. I: Plan Global, Lima 1971, p. 12.

(22) cf. Ibid., p. 14

(23) cf. Ibid., p. 15

(24) cf. Ibid., p. 17

(25) cf. Ibid., p. 19

(26) cf. Ibid., p. 20

(27) cf. Ibid., p. 125 y 139

En ambos sectores productivos las inversiones públicas se realizarán implementando nuevas formas de asociación con la burguesía nativa e imperialista, especialmente con las empresas imperialistas para los proyectos de mayor envergadura. La realización de los proyectos de inversión generará un aumento de las importaciones, el que unido al pago de la deuda externa y a las remesas de utilidades de la inversión extranjera, producirán una brecha financiera en la balanza de pagos del orden de los 796 millones de dólares, que se espera cubrir a través de nuevos préstamos al sector público por valor de US\$ 564 millones y de nuevas inversiones extranjeras por US\$ 265 millones, fundamentalmente en proyectos mineros.

El cumplimiento de las metas proyectadas permitirá incrementar la oferta, evitando las restricciones en el sector externo y limitando el incremento del nivel de precios al 7.2 o/o anual en promedio en el quinquenio (28).

El proyecto de desarrollo del Gobierno Militar se dirige esencialmente hacia la eliminación de los rasgos semi-coloniales y pre-capitalistas que caracterizaban a la sociedad peruana a fin de establecer como dominante una nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital, que corresponde a las más avanzadas tendencias del capitalismo contemporáneo.

La eliminación de estos rasgos supone, en primera instancia, la transformación de la agricultura mediante la reforma agraria que modifica las estructuras de producción pre-capitalistas dominantes en un vasto sector de la actividad agrícola, haciendo posible un aumento de la producción de alimentos y una ampliación del mercado interno, así como la transferencia de capitales del agro a la industria y la minería vía el pago de la deuda agraria y la mayor recaudación de impuestos. En segundo lugar, este proceso implica desensclavar y descolonizar el sector exportador, integrándolo a la estructura económica nacional mediante la creación de industrias de transformación de materias primas y de producción de insumos y de bienes de capital para dicho sector. Por último, esta modificación hace necesario que el Estado controle el aparato bancario y financiero con el fin de implementar los planes de inversión, financiar las empresas estatales, mixtas y privadas, así como de controlar el comercio exterior.

Este proyecto de desarrollo conlleva una redefinición de las relaciones entre la burguesía nativa e imperialista y el Estado. En efecto, el sector estatal desempeña el rol principal en el proyecto, realizando las inversiones más importantes y reservándose los sectores básicos de la actividad económica, al mismo tiempo que canaliza y define las condiciones bajo las cuales se desarrollará la inversión privada nacional y extranjera.

La burguesía imperialista participará en esta nueva modalidad de acumulación en asociación con el Estado, y en forma secundaria con el capital nativo, debiendo transferir sus empresas a manos nacionales luego de un período en el cual haya podido recuperar su inversión y haya logrado obtener una tasa "razonable" de ganancia. Sin embargo, la burguesía imperialista mantendrá sus inversiones mineras, tanto en los yacimientos actualmente en explotación como en los nuevos proyectos en desarrollo.

La burguesía nativa verá ampliarse sus oportu-

nidades de inversión, gracias al desarrollo industrial, al apoyo estatal y a la reserva de ciertas áreas, anteriormente monopolizadas por las empresas imperialistas.

El proyecto de desarrollo asocia la redefinición de las relaciones entre el Estado y la burguesía nativa e imperialista con la realización de reformas estructurales, de carácter nacionalista y antioligárquico, como la reforma agraria y la creación de las comunidades industriales, mineras y pesqueras. Se introducen así nuevos elementos en la estructura de la empresa, con el fin de conciliar los intereses de los trabajadores y de los capitalistas.

A nivel económico, este proyecto se traduce por una reestructuración del aparato productivo mediante la ampliación de la base exportadora y la creación de una industria básica controlada por el Estado que sirva de sustento a un proceso de industrialización capaz de articular la economía del país y de permitir una expansión dotada de mayor autonomía interna. El crecimiento de las exportaciones se lograría a través del desarrollo de las nuevas inversiones mineras, especialmente en las inversiones imperialistas en los yacimientos cupríferos de Cuajone y en los nuevos campos petrolíferos de la selva. El dinamismo de las exportaciones posibilitará efectuar las mayores importaciones derivadas del esfuerzo de industrialización, realizar el pago de las remesas de utilidades de inversión imperialista y amortizar la deuda externa.

El cumplimiento de las metas propuestas por el plan presenta algunos problemas:

a) La dependencia frente a la inversión imperialista para lograr la ampliación de la base exportadora, que es absolutamente indispensable para la realización de los objetivos propuestos, así como frente al financiamiento imperialista para cubrir la brecha financiera, derivada de las mayores importaciones y de las necesidades de capitalización del sector estatal. Asimismo, el plan presenta una alta vulnerabilidad externa, en la medida en que depende de un desarrollo favorable de la coyuntura del capitalismo internacional, que haga posible las nuevas inversiones. Esta dependencia crea múltiples oportunidades de presión y de negociación al imperialismo para conducir al Estado a garantizar condiciones más favorables de implantación y asegurarse mayores tasas de ganancia, modificando la estrategia prevista por el plan.

b) Las grandes necesidades de capitalización, determinadas por el plan y por la necesidad de mantener altas tasas de ganancia para impulsar la acumulación de la burguesía nativa e imperialista, tornan imprescindible controlar las reivindicaciones salariales, chocando con las metas de redistribución del ingreso propuestas.

c) El tipo de desarrollo contemplado, basado en la expansión del sector exportador y de la industria básica, implica el empleo de tecnologías con una alta densidad de capital, que absorben poca mano de obra, y por ende hace problemática la meta de absorción del desempleo y del subempleo.

La necesidad de controlar las reivindicaciones salariales, y las restricciones a la redistribución del ingreso

(28) cf. *Ibid.*, p. 24

determinan que el régimen busque encuadrar a las clases dominadas dentro de un aparato de movilización social de corte corporativista, destinado a conte-

ner las presiones populares, reemplazando la redistribución con el asistencialismo.

IV.- LA COYUNTURA ACTUAL Y EL PROYECTO DE ACUMULACION DEL REGIMEN (1970-1972)

El éxito relativo de las medidas de estabilización permite un cambio de giro de la política económica, adoptándose una serie de medidas tendentes a reactivar la economía en el corto plazo, que implican tanto la recuperación del empleo y del consumo popular, deprimidos fuertemente por la crisis de 1967-1969, como la elevación de la tasa de ganancia de la burguesía nativa e imperialista, dado el uso más intenso de la capacidad instalada. Mediante esta reactivación, de corte keynesiano, y la realización de las reformas estructurales se pretende comenzar la implementación del proyecto de acumulación del régimen, que constituye una tentativa de conciliación de clases, en la medida en que se pretenden integrar intereses de clases antagónicas construyendo una "democracia social de participación plena", en la que por efecto de las reformas del régimen y de la implantación de nue-

vos mecanismos institucionales se habría suprimido la explotación y la contradicción entre el capital y el trabajo.

a

LA POLITICA DE REACTIVACION EN EL CORTO PLAZO.

partir de 1970 la política económica se dirige hacia la reactivación de la economía, adoptándose una serie de medidas de carácter expansionista, que inician un nuevo ciclo en la economía del país.

En primer lugar, se aumenta el gasto público, incrementándose fuertemente los gastos de consumo e inversión del Estado, en base a un mayor uso del financiamiento interno.

Cuadro No. 5 Resumen de las operaciones del Gobierno Central en 1969-1971 (en millones de soles) (29)

	1969	1970	1971
1.- Ingresos corrientes	33,952	38,844	40,128
2.- Gastos corrientes	27,949	32,071	36,343
3.- Ahorro en cuenta corriente.	6,003	6,773	3,785
4.- Gastos de capital	6,385	10,005	12,103
5.- Total gastos sin amortizaciones	34,334	42,076	48,446
6.- Déficit económico	-382	-3,232	-8,318
7.- Financiamiento	382	3,232	8,318
a. Externo (neto)	1,623	1,064	-1,204
b. Interno	-1,241	2,168	9,522

Como se puede apreciar en el cuadro No. 5, a partir de 1970 adquieren gran dinamismo los gastos corrientes del Estado, debido fundamentalmente a la expansión de la administración pública necesaria para implementar las nuevas funciones del Estado, ya que en gran parte de este período permanecieron congeladas las remuneraciones de los empleados públicos. Por otro lado, los gastos de capital experimentaron un incremento aún mayor, dinamizando la inversión pública, como resultado de una racionalización del gasto corriente que permitió liberar excedentes para la acumulación del sector público y para dar inicio a los grandes proyectos de inversión estatales.

El incremento del gasto público fue cubierto en 1970 gracias a la mayor recaudación tributaria y al uso moderado del financiamiento interno y externo. Por el contrario, en 1971 los ingresos corrientes experimentaron un aumento muy leve debido al descenso de la recaudación determinado por los menores precios de los productos de exportación y a las exoneraciones tributarias concedidas para estimular la inversión de la burguesía nativa e imperialista. Esta situa-

(29) cf. BCR, op. cit., p. 155

ción condicionó el deterioro del ahorro en cuenta corriente y la ampliación del déficit presupuestal que pasa de 3,232 millones en 1970 a 8,318 millones en 1971. Este déficit fue financiado exclusivamente en base al financiamiento interno, ya que el aumento de las amortizaciones de la deuda externa determinó que el financiamiento externo neto fuese negativo.

En segunda instancia, el dinamismo de la inversión pública contribuyó a la expansión de la construcción, que fue igualmente estimulada por el aumento del crédito al sector privado. Desde 1970 se produce la reactivación de la construcción, cuyos niveles de actividad habían sido fuertemente deprimidos por la crisis de 1967-1969, lográndose una expansión del orden del 16.7 o/o anual en 1970 y 1971 (30), que contribuye a ampliar el empleo urbano y dinamiza la demanda interna.

En tercer lugar, esta política económica es complementada por una expansión monetaria y crediticia destinada al consumo y la inversión, elevándose la liquidez de la economía de 41,906 millones en 1969 a

68,231 millones al final del primer semestre de 1972 (31), gracias al aumento del crédito al sector público y privado, y al incremento de las reservas internacionales, condicionado por la repatriación de capitales derivada de la aplicación de la ley de control de cambios y por la mejoría de la balanza de pagos.

Esta política expansionista es favorecida en 1970 por las altas cotizaciones internacionales del cobre y de la harina de pescado, que dan origen a un nivel récord de exportaciones del orden de 1,034 millones de dólares, y por la expansión de la producción agrícola debido a las mejores condiciones climáticas.

La reactivación económica determina un fuerte crecimiento del PBI, que aumenta en un 7.7 o/o en 1970 en un 5.9 o/o en 1971, y en un 6.0 o/o en 1972, según estimaciones preliminares. Asimismo, se expande la demanda interna de bienes y servicios a un ritmo anual promedio de 8.7 o/o en 1970 y 1971 (32). El alto nivel de la demanda interna condiciona una expansión de la producción industrial del 10.1 o/o anual en el mismo período, especialmente dentro de las industrias productoras de bienes de consumo.

Cuadro No. 6: Producción física de la industria fabril (33)
(Base 1967 = 100)

	1969	1970	1971	1969	Var. Media Anual (o/o)	
					1970-1971	1972
1. Ind. de bienes de consumo (sin harina de pescado)	101.5	113.8	129.8	1.6	13.1	6.5
2. Ind. de bienes de capital	101.0	112.1	124.7	24.7	11.1	28.0
3. Ind. de bienes intermedios	109.6	118.8	129.6	1.1	8.7	2.0
4. Total Manufactura	102.9	116.3	126.9	0.2	11.0	6.7

La dependencia externa y la desarticulación interna del aparato industrial determinaron que la expansión de la producción provocase un fuerte aumento de la importación de insumos industriales, que pasa de US\$ 277.3 millones de dólares en 1969 a US\$ 385.9 millones en 1971, ejerciendo una fuerte presión sobre las importaciones (34).

El crecimiento económico se realiza sin ocasionar graves presiones inflacionarias en 1970 y 1971, aumentando los precios en un 5.1 o/o y un 6.8 o/o, respectivamente (35). La reactivación de la economía dentro de una relativa estabilidad monetaria fue posible gracias a tres factores principales. En primer lugar, a la existencia de un amplio margen de capacidad ociosa en la industria, consecuencia de las cuantiosas inversiones realizadas antes de 1967 y del estancamiento de la producción industrial en 1968-1969. En segunda instancia, a la disponibilidad de una abundante reserva de mano de obra, determinada por la amplitud de la desocupación y del subempleo agravados desde 1967, que contribuyeron a frenar el aumento de los salarios. Y por último, al incremento de la capacidad de importación derivada del restablecimiento de la balanza de pagos.

Sin embargo, las perspectivas del comercio exterior no son muy favorables en el mediano plazo. Las exportaciones no experimentarán aumentos significativos hasta 1975 por lo menos, dado el plazo de maduración de las nuevas inversiones mineras y petrole-

ras, que constituyen los principales sectores productivos susceptibles de ampliar sus exportaciones. Este plazo supone el estricto cumplimiento de los calendarios de inversión aprobados. Por otro lado, por efecto de la expansión económica las importaciones tenderán a aumentar a un ritmo acelerado, creando una creciente tensión en la balanza comercial. Esta tensión unida a las fuertes obligaciones derivadas del pago de la deuda externa, de la remesa de utilidades de la inversión extranjera, que alcanzó los 100.7 millones de dólares en 1970 (36), y del saldo negativo en la balanza de servicios, crearán una importante brecha financiera que deberá ser cubierta mediante la captación de un volumen significativo de préstamos e inversiones extranjeras, que en caso de no alcanzar la magnitud necesaria originaría un importante estrangulamiento externo, obligando al Estado a reducir o cancelar importantes proyectos de inversión y a frenar la expansión de la economía, poniendo en peligro el proyecto de acumulación y los niveles de consumo popular, además de generar graves tensiones inflacionarias.

(30) cf. BCR, op. cit., p. 26

(31) cf. BCR, op. cit., p. 51

(32) cf. BCR, op. cit., p. 14

(33) cf. BCR, op. cit. p. 31 hasta 1971. Las cifras de 1972 son estimaciones del autor.

(34) cf. BCR, op. cit., p. 147.

(35) cf. BCR, op. cit. p. 45

(36) cf. BCR, op. cit., p. 117.

En síntesis, la reactivación de la economía en el período 1970-1972 fue lograda en base a la política económica expansionista del gobierno, que determinó un aumento del gasto y la inversión pública, ocasionando el crecimiento del déficit presupuestal, la dinamización de la ocupación y de la demanda interna, factores que repercutieron favorablemente sobre la producción industrial.

Es importante destacar, sin embargo, que esta reactivación se ha producido sin alterar de manera significativa la estructura del aparato productivo y la distribución del ingreso, dado el largo período de maduración de las nuevas inversiones y de las principales reformas, cuyos efectos redistributivos son todavía limitados. Dentro de este contexto, la reactivación ha favorecido las ganancias de la burguesía nativa e imperialista, asegurándoles una utilización más completa de sus instalaciones productivas, así como el consumo de la burguesía y de los sectores medios asociados a ella, que ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años, resultando los principales beneficiarios de la expansión.

ACUMULACION Y LUCHA DE CLASES EN LA ACTUAL COYUNTURA : LAS CONTRADICCIONES DEL PROYECTO DE CONCILIACION DE CLASES

a

A pesar del éxito relativo de la política de reactivación del Gobierno el proceso de acumulación de capital no ha seguido el curso esperado, presentándose múltiples contradicciones cuyo análisis es de vital importancia para desentrañar las perspectivas de la lucha de clases, de la dinámica económica a mediano plazo y las restricciones que deberá enfrentar el Gobierno. El destino del proyecto reformista del régimen, y de su intento de conciliación de clases, va a estar determinado por la naturaleza de las relaciones que se establezcan entre el Estado, las clases dominadas y la burguesía nativa e imperialista, condicionando el éxito o el fracaso del proceso de acumulación.

Las relaciones del Estado con la burguesía nativa e imperialista han sido profundamente afectadas por el conjunto de reformas antioligárquicas y nacionalistas del régimen, enmarcadas dentro de un proyecto de conciliación de clases. En efecto, mientras que por un lado se intenta atraer a la inversión nativa e imperialista otorgándoseles concesiones económicas y tributarias, por el otro, las medidas reformistas implican recortar los márgenes de ganancia en beneficio de una mayor participación del Estado y, en menor medida, de algunas fracciones de las clases dominadas en los excedentes producidos, introduciéndose asimismo elementos contradictorios con la lógica de funcionamiento del capitalismo, reflejo del intento de conciliación de clases.

Es así que mientras por un lado se han otorgado importantes estímulos a la reinversión de utilidades y a la creación de nuevas empresas, por el otro se han creado las comunidades laborales, que conllevan a una redistribución de las ganancias y una participación progresiva: de los trabajadores en el capital de la empresa, permitiendo su intervención en la gestión, y abriendo así una posibilidad de cuestionamiento y fis-

calización de la dirección empresarial. Asimismo, la renegociación de las relaciones con el capital imperialista tiende a aumentar la participación del Estado en los excedentes producidos, reduciendo por consiguiente los márgenes de ganancia de las empresas extranjeras. De igual manera, se han limitado las inversiones extranjeras en la industria, determinando plazos para su peruanización, medida que dada la profunda penetración imperialista en la industria nacional afecta a las firmas más importantes y productivas, tornando muy problemático el reemplazo de las grandes empresas imperialistas por una burguesía nativa de secular debilidad. Además, el Estado se ha reservado la producción de la industria básica, determinando su estatización bajo modalidades y plazos que no han sido aún definidos, pero que en todo caso afectan al capital imperialista dado su control de esas actividades industriales. Por otro lado, se ha restringido el acceso al crédito interno de las empresas imperialistas, implementándose también una mayor fiscalización del Estado sobre las actividades del sector privado, mediante el control del comercio exterior y de las inversiones.

Dadas las perspectivas favorables de ganancia determinadas por la reactivación de la economía dentro de una relativa estabilidad monetaria, acompañada por los bajos costos salariales y las exoneraciones tributarias y facilidades crediticias, el retraimiento de la inversión privada y los bajos niveles de acumulación de la economía manifiestan la resistencia de la burguesía nativa e imperialista frente a la política del régimen y a su intento de conciliación de clases.

En efecto, la inversión privada se contrae hasta 1971, año en el cual experimenta una ligera expansión, que es insuficiente para permitir un aumento significativo de la capacidad productiva de la economía.

El retraimiento de la inversión de la burguesía nativa e imperialista no ha podido ser completamente compensado por el aumento de la inversión pública, que se ha dirigido esencialmente hacia la realización de obras de infraestructura física, como construcción de carreteras, irrigaciones, centrales hidroeléctricas, programas de vivienda y otras obras públicas, que si bien ejercen un efecto estimulante sobre los niveles de ocupación e ingreso tienen un período de maduración muy prolongado, no contribuyendo de manera sustancial en el mediano plazo a la elevación de la capacidad productiva de la economía. Este hecho se ha reflejado en el relativo estancamiento de las inversiones en maquinaria y equipo, cuya participación en la IBF baja del 56.6 o/o en 1968 al 46.5 o/o en 1971 frente al notable dinamismo de las inversiones en nuevas construcciones, que incrementan su participación en la IBF del 43.4 o/o al 53.5 o/o entre los mismos años (38).

Frente a la política del régimen, y a su intento de conciliación de clases, la burguesía nativa e imperialista ha resistido cancelando o postergando sus proyectos de inversión, tratando de esta manera de presionar al gobierno para asegurarse mayores tasas de ganancia y obtener la supresión o modificación de las disposiciones de mayor carácter nacionalista y reformista. Estas presiones se han acentuado desde 1971 median-

(38) cf. BCR, op. cit, p. 18

te la negativa a refinanciar la deuda externa, la demora en el desembolso de nuevos préstamos contratados, el insuficiente nivel de financiamiento de las agencias internacionales, el retraso de los proyectos de inversión minera, forzando al gobierno a recurrir a financiamientos más duros y a créditos de proveedores para la realización de sus planes de inversión.

El estancamiento de la inversión de la burguesía nativa e imperialista amenaza con poner en peligro los planes de desarrollo del gobierno, sobre todo en sus puntos neurálgicos: la industria y la minería, y con

comprometer la balanza de pagos, debido al insuficiente flujo de financiamiento internacional y de inversiones extranjeras. De esta manera, las grandes empresas imperialistas, esencialmente las norteamericanas, tratan de debilitar la posición de negociación del Gobierno para forzarlo a realizar mayores concesiones. Este último procura contrarrestar estas presiones haciendo uso de financiamiento y realizando inversiones en asociación con las burguesías europea y japonesa, que se disputan los mercados con la burguesía norteamericana.

Cuadro No. 7: Inversión Bruta Fija 1968-1971 (millones de soles de 1970) (37)

	1968	1969	1970	1971
Inversión bruta fija (IBF)	25,637	27,058	29,478	31,856
Pública	7,637	9,271	11,508	12,543
Privada	18,000	17,787	17,970	19,313
Var. Media Anual (o/o)				
Inversión bruta fija		5.5	8.9	8.1
Pública		21.4	24.1	9.0
Privada		-1.2	1.0	7.5
IBF/PBI (o/o)	12.9	13.0	12.5	12.6
Inv. Pública/PBI (o/o)	3.8	4.4	4.9	4.9
Inv. Privada/PBI (o/o)	9.1	8.6	7.6	7.7

Esta situación se manifiesta en las negociaciones del Estado con dos compañías norteamericanas de antigua implantación en los enclaves agromineros del país: la Cerro de Pasco y la Grace, que intentan vender al Gobierno sus instalaciones en el Perú, para transferir sus capitales a otros países donde puedan disfrutar de una mayor tasa de ganancia. Mientras prosiguen las negociaciones alrededor del valor de las propiedades a expropiarse, ambas compañías tratarían de elevar al máximo sus utilidades inmediatas, aun a riesgo de comprometer las bases de la producción futura, tal como lo realizaron las grandes compañías mineras en Chile antes de su nacionalización.

Por otro lado, los proyectos de inversión del Estado experimentan dificultades para ajustarse a los programas previstos, a causa de los problemas implicados en la concepción e implementación de los proyectos, así como de la insuficiencia de la capacidad empresarial del Estado. Esta situación es especialmente marcada en los sectores industrial y minero, que constituyen los pilares del plan, ya que el Estado carecía casi totalmente de experiencia y de capacidad tecnológica en estos campos, deficiencia cuya superación ha exigido un lapso mayor del previsto.

Tanto el estancamiento de la inversión de la burguesía nativa e imperialista como las dificultades de la inversión pública han determinado que no sea posible contar en un futuro cercano con una ampliación de la base productiva del país, originándose estrangulamientos debido al uso pleno de la capacidad instalada y a las presiones sobre las importaciones, apareciendo así de manera progresiva una rigidez de la oferta de productos industriales y artículos de consumo. Esta

rigidez, unida a la expansión de la liquidez de la economía determinada por el aumento del crédito privado y público, tenderían a acentuar las presiones inflacionarias.

Esta situación ha afectado, igualmente, las relaciones del Estado con las clases dominadas. En un primer momento, el régimen obtuvo su neutralidad, o en algunos casos el apoyo de ciertos sectores populares, gracias a las reformas de carácter nacionalista y antioligárquico que le otorgaban cierta legitimidad. De esta manera, el Estado pudo arbitrar algunos conflictos sindicales y contener las reivindicaciones salariales, que habían sido deprimidas por el aumento del desempleo y la subocupación entre 1967 y 1969. Sin embargo, desde finales de 1971, con las huelgas mineras y del magisterio, habrían comenzado a manifestarse con vigor las presiones salariales, por efecto de la radicalización de los sectores populares, la mejoría del mercado de trabajo y por la acumulación de reivindicaciones salariales, ya que las remuneraciones en términos reales habían descendido fuertemente entre 1967 y 1969, experimentando sólo aumentos moderados desde ese año. La aplicación misma de las medidas reformistas ha abierto nuevos frentes en la lucha de las clases dominadas, que han utilizado muchas veces estas medidas y los pronunciamientos del Gobierno para movilizaciones que plantean sus reales intereses de clase, desbordando así los marcos del intento de conciliación de clases.

(37) cf. BCR, op. cit., p. 21-22



Estas tendencias han comenzado a perfilarse con mayor claridad a fines de 1972. El crecimiento económico ha continuado, alcanzando el PBI una expansión del 6.0 o/o anual según estimaciones preliminares, gracias a la recuperación de las exportaciones, por efecto de los mejores precios y mayores volúmenes, y a la política económica expansionista, especialmente marcada en los terrenos del gasto público y del manejo monetario. Sin embargo, han comenzado a manifestarse los primeros síntomas de desaceleración del crecimiento.

En efecto, la construcción, uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y el que en mayor medida había contribuido a la generación de empleo, no podrá mantener sus niveles de crecimiento, ya que se ha llegado a una saturación relativa del mercado de la burguesía y de los sectores medios, que disponen del respaldo financiero necesario para acceder al crédito del sistema bancario. Esta situación repercute desfavorablemente sobre los niveles de empleo y de consumo de los sectores populares urbanos.

Asimismo, ha disminuido la expansión del sector industrial, cuya tasa de crecimiento ha descendido del 11.0 o/o en 1970 y 1971 al 6.7 o/o en 1972, por efecto de varios factores. En primer lugar, debido a la paralización de la industria de harina de pescado determinada por las condiciones climáticas. En segunda instancia, dada la menor demanda de bienes de consumo no duraderos condicionada por el estancamiento de los niveles de empleo en la pesca, la construcción y la industria, así como por el reducido efecto redistributivo de las reformas estructurales. Estos hechos determinaron que declinase el crecimiento de la industria de bienes de consumo no duraderos de un promedio del 13.1 o/o en 1970-1971 al 6.5 o/o en 1972.

Es así que el dinamismo de la producción industrial estaría dado fundamentalmente por la expansión de las industrias de bienes de capital y de consumo duradero, cuya tasa de crecimiento pasa del 11.1 o/o en 1970 y 1971 al 28.0 o/o en 1972. Debe destacarse que dentro de este sector, dado el incipiente desarrollo de la industria de bienes de capital, predomina en el país la producción de bienes de consumo duraderos, como automóviles, artefactos para el hogar, etc. que corresponden a la demanda de la burguesía y de los sectores medios. El mantener tan altas tasas de expansión en esta rama requiere un proceso de concentración cada vez mayor del ingreso en manos de estos sectores, que entra en conflicto tanto con las presiones salariales y redistributivas de las clases do-

minadas como con las necesidades de acumulación del sector estatal. De otra manera la estrechez del mercado determinaría que la demanda de los bienes de consumo duradero alcanzase un relativo nivel de saturación en un futuro próximo, declinando en consecuencia fuertemente las tasas de expansión de ese sector industrial.

La coyuntura económica ha sido también desfavorablemente afectada por las condiciones climatológicas, que han determinado elevadas pérdidas en la producción de artículos alimenticios, con la consiguiente escasez y subida de los precios e importaciones de alimentos. Asimismo, estas condiciones han ocasionado la paralización de la pesca, forzando a la desocupación a miles de trabajadores y disminuyendo las exportaciones de productos pesqueros.

En síntesis, la coyuntura económica a principios de 1973 presenta las siguientes perspectivas:

- 1.— Estancamiento de las exportaciones por efecto de la crisis pesquera y del período de maduración de las inversiones mineras, que entrarán en explotación en 1975-1976.

- 2.— Una desaceleración del crecimiento de la actividad industrial y de la construcción en razón de la pérdida de dinamismo de la demanda.

- 3.— Una disminución en la producción de alimentos determinada por la crisis agrícola.

- 4.— Un aumento de las importaciones de alimentos y de insumos y bienes intermedios para la industria.

- 5.— El estancamiento o deterioro de los niveles de empleo y de consumo popular, debido al menor dinamismo de la economía y a la falta de una significativa redistribución del ingreso.

- 6.— La agravación de las tensiones inflacionarias determinada por la rigidez de la oferta de productos agrícolas, el endurecimiento de las reivindicaciones salariales, la gran expansión monetaria y el rápido aumento del déficit fiscal, que es financiado mediante la colocación de bonos de inversión adquiridos predominantemente por el sistema financiero mediante el uso de fondos de encaje, financiación de carácter netamente inflacionario.

Esta situación económica torna cada vez más imprescindible para la realización del plan de desarrollo del Gobierno el establecimiento de acuerdos con la burguesía imperialista, a fin de dinamizar la inversión y ampliar la base productiva y exportadora, y la implementación acelerada de los proyectos de inversión pública. Se hace necesario, igualmente, el encuadramiento de las clases populares, y especialmente del

proletariado, dentro de estructuras organizativas de corte corporativista, para intentar mantener la paz social y comprimir las presiones salariales. El desarrollo de las actividades del SINAMOS y la reciente creación de la CTRP responden a esta necesidad. Asimismo, el Estado debe incrementar sus ingresos tributarios para financiar la expansión del sector público, a través de la creación de un nuevo sistema impositivo que entra en vigencia en enero de 1973, agravando las tensiones inflacionarias, que se intentan contener mediante el control de precios.

Los problemas económicos que enfrenta el Gobierno estarían indicando que su intento de conciliación de clases y la naturaleza de su proyecto de acumulación generan y agudizan un conjunto de contradicciones entre el Estado, la burguesía nativa e imperialista y las clases dominadas. En efecto las bases del intento de conciliación de clases, las medidas reformistas y la política de reactivación económica en el corto plazo, se han agotado en lo esencial, planteándose actualmente la lucha de clases con mayor claridad, por lo menos en el terreno económico. La naturaleza del proyecto de acumulación y del intento de conciliación de clases revelan el importante grado de autonomización del Estado frente a las clases sociales fundamentales que caracteriza la primera fase del régimen. Sin embargo, el desarrollo de la lucha de clases pone al descubierto sus contradicciones, relegando al terreno de la utopía su intento de conciliación y forzando su reformulación.

Es así que el desarrollo de la lucha de clases estaría reduciendo el margen de autonomía del Estado y decantando una alternativa para conjurar la difícil situación económica que se avecina.

Esta alternativa contemplaría el logro de acuerdos más globales y orgánicos con la burguesía imperialista, rediseñando las principales reformas y medidas de política económica a fin de favorecer el desarrollo de la acumulación dentro de las nuevas formas de asociación entre el Estado y las grandes empresas imperialistas, capaces de asegurarles altas tasas de ganancia. Al mismo tiempo se irían abandonando progresivamente las medidas conciliatorias frente a las clases dominadas.

Los primeros pasos en este sentido se habrían dado con la creación de las empresas estratégicas, que asocian al capital imperialista con el Estado en la proporción del 70 o/o y del 30 o/o respectivamente, suponiéndose que gracias a esta participación el Gobierno va a poder controlar la gestión empresarial. Este modelo no toma en consideración la dependencia tecnológica y de insumos industriales que generan estas actividades, factores que reducirían considerablemente el control del Estado. Asimismo, en este modelo la comunidad industrial queda excluida de la participación de capital en el seno de la empresa, reduciéndose las posibilidades de intervención de los trabajadores en la gestión. La comunidad industrial acumularía sus excedentes en bonos de COFIDE. La empresa imperialista Bayer es la primera que se ha acogido a los beneficios de este nuevo modelo. Los arreglos con la burguesía imperialista requerirían una utilización de mayor carácter represivo del aparato de movilización social corporativista para mantener la paz social y permitir la generación de los excedentes necesarios para la capitalización de las empresas imperialistas y del

sector estatal.

En la actual coyuntura, que constituye una etapa crucial para la realización del proyecto de acumulación del régimen, la lucha de clases y los enfrentamientos políticos tienden a plantearse objetivamente con mayor intensidad a nivel de la generación de excedentes y del control del proceso de acumulación. Dentro de este contexto cobra cada día mayor urgencia el fortalecimiento de las organizaciones políticas y sindicales de las clases dominadas, así como la defensa de su autonomía política, con el fin de desarrollar elementos de una estrategia alternativa de acumulación y de política económica que respondan a los intereses fundamentales de los trabajadores, elevando el nivel de conciencia, orientando los enfrentamientos, posibilitando el desarrollo de una política de clase y preparando el terreno para la lucha por el socialismo.

E

OBSERVACIONES FINALES

En las últimas dos décadas se ha iniciado en el Perú un proceso de transformaciones caracterizado por la progresiva transición de una estructura económico-social de carácter semicolonial y oligárquico, correspondiente al primer período de la penetración imperialista en el país, a una nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital, que implica la profundización y diversificación de la penetración capitalista, conducida por un nuevo tipo de inversiones imperialistas, dentro del contexto del desarrollo del capitalismo internacional posterior a la segunda guerra mundial.

Este proceso, que cobra vigor a mediados de la década de los cincuenta, atravesará por varias etapas definidas por el carácter y el progresivo desarrollo de dos contradicciones principales en esta transición. Por un lado, se plantea la contradicción entre las estructuras de producción precapitalistas y la nueva modalidad de acumulación y reproducción de capital. En efecto, la vigencia de estas estructuras, aunque debilitadas, en un contexto donde se había ya desarrollado un mercado de trabajo "libre", que solucionó la escasez de mano de obra prevaletante hasta 1930, así como una agricultura comercial, concentrada en la costa y algunas regiones de la sierra, significó una traba al desarrollo del capitalismo en la medida en que implicaba una creciente rigidez en la oferta agropecuaria destinada al mercado interno, el lento avance de la agricultura comercial, y por consiguiente, la estrechez del mercado interno de los productos industriales. Por otro lado, se planteaba la contradicción entre la estructura semicolonial que se había desarrollado en una íntima articulación con las estructuras precapitalistas, y la nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital. En efecto, esta estructura semicolonial se hallaba en gran parte desligada del aparato productivo del país, limitando el mercado de los productos industriales, y concentraba una elevada fracción del excedente producido, que era remitido a

los países imperialistas bajo la forma de ganancias de la inversión privada extranjera, descapitalizando al país, limitando y trabando de esta manera el desarrollo del capitalismo.

El desarrollo del proceso de transición, y de sus contradicciones, conllevará la crisis del modelo de dominación oligárquico, generando una importante movilización política de los movimientos obrero y campesino, así como una creciente radicalización de los sectores medios y de la pequeña burguesía, entre 1957 y 1964, abriendo de esta forma el paso al intento reformista de Belaúnde.

Este último trata de resolver la primera contradicción mediante la realización de la reforma agraria y de una modernización y homogeneización general de las estructuras socio-económicas. Sin embargo, la heterogeneidad de las bases sociales del intento reformista y la ambivalencia de las clases medias, unidas a la fuerza que aún mantiene la oligarquía y a la amenaza de desborde del sistema que plantean las movilizaciones espontáneas de las clases dominadas, determinan el bloqueo de estas reformas y de la redistribución del ingreso. Se intenta contener las presiones populares mediante la ampliación del consumo, sin modificar la estructura de la producción y la distribución del ingreso, originándose la crisis del intento reformista, presa de sus contradicciones internas, el deterioro de sus bases sociales y políticas, así como una dependencia cada vez mayor del imperialismo.

Dentro del contexto de la derrota de los movimientos populares y de la crisis oligárquica, el fracaso del intento reformista implica que la burguesía urbano-industrial, dependiente de la nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital imperialista, no pueda imponer su hegemonía política. Se gesta así una crisis social y política que va a permitir la autonomización de las Fuerzas Armadas, que toman el poder el 3 de octubre de 1968.

El Gobierno Militar va a intentar resolver estas dos contradicciones para favorecer el desarrollo de esta nue-

va modalidad de acumulación y reproducción del capital, adoptando un conjunto de reformas estructurales de carácter nacionalista y antioligárquico dentro de un proyecto de conciliación de clases. Es así que se iniciará la eliminación de la fracción oligárquica de la burguesía, acelerándose rápidamente a través de la reforma agraria la transformación de las estructuras pre-capitalistas de producción, al mismo tiempo que se desarrolla la renegociación de las relaciones del Estado con el capital imperialista, con el fin de desenclavar al sector exportador eliminando su carácter semicolonial y posibilitando la participación de la burguesía imperialista en el nuevo proyecto de acumulación. Sin embargo, en esta renegociación se presentan múltiples contradicciones, que restringen severamente los alcances de las medidas nacionalistas.

En efecto, esta renegociación tropieza con el hecho de que el capital imperialista es indispensable para impulsar la nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital, lo que implica lograr un arreglo global con la burguesía imperialista, cuyos intereses fundamentales en el país se ubican en los enclaves exportadores. En consecuencia, el Estado se ve forzado a conciliar con los intereses tradicionales del imperialismo, dejando sin resolver la contradicción existente entre esta base semicolonial y la nueva modalidad de acumulación y reproducción del capital.

Las limitaciones que derivan de esta situación determinan que el Gobierno Militar intente encuadrar a las clases dominadas dentro de estructuras organizativas de carácter corporativista a fin de mantener la paz social y resistir a las presiones redistributivas, posibilitando así la generación de los excedentes necesarios para la acumulación tanto de la burguesía imperialista, y de la nativa en forma subordinada, como del sector estatal.

La necesidad de lograr arreglos con la burguesía imperialista y de mantener la paz social indican la progresiva reducción del margen de autonomía del Gobierno Militar y el agotamiento de las bases de su intento de conciliación de clases.

EL PERU Y LA CRISIS DEL DOLAR

En febrero de 1973 se ha producido la segunda devaluación del dólar, que ha perdido en menos de un año y medio el 18 o/o de su valor, manifestándose así la grave crisis por la que atraviesa el imperialismo americano y la agudización de la competencia interimperialista. Según las declaraciones de los voceros del régimen esta devaluación no afectaría de manera significativa al Perú.

Sin embargo, la crisis monetaria no es sino una de las manifestaciones de una crisis más general del capitalismo a nivel mundial cuyos efectos incidirán en forma notable en el país. En términos más concretos, la devaluación del dólar significa, en primera instancia, una pérdida de poder adquisitivo de nuestras exportaciones que son cotizadas en dólares, es decir que para obtener la misma cantidad de manufacturas europeas y japonesas se necesitará una masa mayor de materias primas producidas en el país. En segundo lugar, una parte sustancial de la deuda externa del país ha sido contraída en monedas europeas y japonesa, cuyo pago absorbe por consiguiente una fracción mayor de las exportaciones, contribuyendo a descapitalizar al país. Por último, la mayor parte de las reservas de divisas, cuyo monto alcanza actualmente los \$400 millones de dólares, están integradas por moneda norteamericana, habiendo sufrido en consecuencia una pérdida notable en su poder adquisitivo.

Este conjunto de factores hacen necesaria una comprensión aún mayor del consumo de las clases dominadas, tanto para permitir las altas tasas de ganancia de la inversión de la burguesía imperialista y nativa como para enfrentar las consecuencias de la crisis monetaria. Asimismo, la devaluación del dólar conllevará una agudización de las tensiones inflacionarias, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y el campo. La necesidad de lograr arreglos más globales y orgánicos con la burguesía imperialista y nativa hacen que el Gobierno Militar intente descargar sobre las clases dominadas el peso de la superación de la actual crisis, conteniendo las reivindicaciones salariales mediante el empleo de su aparato de control de naturaleza corporativista y de la represión.

nueva dependencia y crisis política en Argentina

JUAN CARLOS PORTANTIERO

E

l punto de partida de este análisis, al que se toma como dato, es el proceso de monopolización operado en la estructura productiva argentina. En efecto, a partir de la década del 60 culmina un proceso de monopolización en los sectores fundamentales de la economía y de creciente control de las actividades productivas y financieras por parte del capital extranjero. Dicho proceso instala como fracción de clase predominante en el interior de los grupos propietarios a la gran burguesía industrial, financiera y comercial monopolista, extranjera o asociada al capital extranjero, desplazando de su predominio tradicional a la gran burguesía agraria. Nuestra intención no es develar los mecanismos que operan en el interior de la estructura económica, a los que damos por supuestos, sino examinar la forma de inflexión de esos datos de la estructura en los otros niveles de relaciones sociales, particularmente el político.

El predominio de la fracción monopolista en el terreno de la economía supone, a ese nivel, la apertura de una nueva etapa que fija las leyes generales de movimiento y constitución de las fuerzas sociales, en tanto redefine los campos de interés común de las clases. Una nueva etapa económica supone la definición primaria de nuevos actores sociales, a la vez que determina reajustes en los campos de interés.

En un primer momento los nuevos protagonistas aparecen definidos como clase, objetivamente; su representación política, sin embargo, se demorará. Du-

rante todo un período el espacio de la política estará ocupado por núcleos residuales, fuerzas sociales y grupos políticos demorados, cuyas respuestas apuntan a preguntas planteadas durante la etapa anterior y que sólo en ella podían ser satisfechas. Estos rezagos que desvían o amortiguan las nuevas líneas de conflicto social planteadas por los cambios en la economía pueden ser, en el corto plazo, factor principal de las decisiones políticas: desautorizados históricamente en el nivel estructural suelen manifestarse, sin embargo, como protagonistas principales en el plano político.

Nuestra hipótesis es que esa situación se da hoy en la sociedad argentina con un arrastre de casi dos décadas: desde mediados de los años cincuenta, cuando entra en crisis definitiva el ciclo de industrialización sustitutiva de manufacturas al ritmo del cual se habían desarrollado, durante veinte años, las fuerzas productivas del país.

Si desde el punto de vista de la estructura económico-social la Argentina sería en la actualidad un ejemplo típico de desarrollo capitalista neo dependiente, con un crecimiento industrial considerable virtualmente monopolizado por el capital extranjero desde un punto de vista político-social definiríamos al proceso que arranca en 1955 año del derrocamiento de Perón— como “fase de no correspondencia entre nueva dominación económica y nueva hegemonía política”. Esta asincronía —cuya existencia funda la legitimidad de los estudios del área política como un espacio relativamente autónomo— es a menudo dejada de lado por los analistas que prefieren extrapolar mecánicamente para el nivel de la política los datos obtenidos en la estructura económica. El problema del “retraso político” en relación a la economía es, sin embargo, central para todo análisis de coyuntura, que se funda no solamente sobre la determinación objetiva de la contradicción principal que recorre una sociedad, sino sobre el descubrimiento de los aspectos principal y subordinado de esa contradicción, esto es,

sobre el análisis de las relaciones de fuerzas políticas, en las que "objetividad" y "subjetividad" histórica se fusionan.

El camino propuesto por el marxismo, cuando opera como teoría de la historia y como principio de dirección política, implica relacionar el nivel económico-social con el nivel político-social, a fin de establecer, desde la perspectiva de las clases que lideran los principales bloques antagonicos, cual es el grado de correspondencia entre sus intereses y su actualización en el espacio de la política. Por ello, todo análisis de coyuntura supone integrar el examen del sistema de contradicciones — de la lucha de clases — tal cual se da en la estructura, con la especificación de los aspectos principal y subordinado de ese sistema de contradicciones.

Así, para el caso argentino, buscamos como clave para descifrar las líneas del proceso político, la asincronía entre nueva dominación económica y nueva hegemonía política.

En esta definición nos ubicamos en el plano en el que ya se articulan los niveles económico y político; el de la determinación del aspecto principal de la contradicción. El supuesto es que dicho aspecto está desempeñado en la coyuntura argentina actual por el conjunto de las clases dominantes, las cuales, aunque con dificultades para resolver dentro de su bloque el problema de la hegemonía, se hallan en una etapa de ofensiva, en la que por momentos aparecen, como resultado de las presiones de las clases dominadas y de esas contradicciones que operan en el interior del bloque dominante, situaciones de equilibrio de fuerzas. Todo este período, en el que la iniciativa política pueda encuadrarse dentro de los intentos de la fracción monopolista del capitalismo por transformar su predominio económico en hegemonía, se resume en los siguientes rasgos característicos:

1. Situación de ofensiva general de las clases dominantes;
2. Fragmentaciones en el interior de ese bloque, como resultado de la aparición de contradicciones de tipo secundario entre las clases y fracciones que lo integran;
3. Proyección de esas fragmentaciones en el plano político (lucha por la hegemonía) a través de la aparición de proyectos alternativos y de división y reparto del control sobre distintos aparatos del sistema (Fuerzas Armadas, Partidos Políticos, Burocracia Sindical, etc.).
4. Situación de "empate hegemónico" — que en momentos más críticos parece transformarse en vacancia hegemónica — en el interior del bloque, aunque a la larga el proceso opere en favor de la fracción económicamente dominante — el capital monopolista —, si bien a un costo mayor que el esperado.

Esta descripción de los rasgos más característicos de la etapa, está concebida a partir de las clases dominantes, porque su ofensiva marca el aspecto principal de la contradicción. Parecería, por lo tanto, que las clases dominadas no tienen ninguna presencia política y no ejercen, correlativamente, ninguna influencia en los desplazamientos que se operan en el poder, en la incapacidad que manifiesta el sector predominante para transformarse en hegemónico.

La situación, por supuesto, no es ésta ni teórica ni empíricamente. Todo análisis de coyuntura es análisis

de una relación entre fuerzas, en que el movimiento de unas supone el desplazamiento de otras.

Por ello, si una etapa puede ser leída analíticamente desde dos ópticas, en la perspectiva de las clases dominantes y en la de las clases dominadas, siempre en la realidad una aparece como reverso de la otra, como pares que se condicionan mutuamente y que sólo analíticamente pueden ser aislados.

Cuando caracterizamos, por ejemplo, a la situación argentina actual como una situación de asimetría entre predominio económico y hegemonía política, estamos haciendo referencia, en términos de las clases dominantes, a la existencia de una situación de "crisis orgánica". Pero una situación de crisis orgánica es siempre, potencialmente, para las clases dominadas, una "situación revolucionaria". En ese sentido, los rasgos de una y de otra se complementan.

Para Gramsci, una crisis orgánica es aquella en que "los partidos tradicionales con la forma de organización que presentan, con aquellos hombres que los constituyen, representan y dirigen ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ella". La emergencia de este proceso de "crisis de autoridad", en que "los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales" y que refuerza "la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública" se origina, según Gramsci, por dos tipos de factores básicos. El primero, la pérdida de confianza en el grupo hegemónico hasta ese momento, traducido en un retiro del apoyo que le concedía la fracción dominante. El segundo, el crecimiento de la movilización, es decir, el ingreso a la actividad política de sectores hasta entonces pasivos.

El punto de partida de una "situación revolucionaria", según Lenin, se define por características parecidas: "crisis en las alturas" y crecimiento de la movilización. Pero lo que Lenin enfatiza son las condiciones para que esa crisis de hegemonía, que desde la perspectiva de las clases dominadas conforma una situación revolucionaria, se transforme en crisis revolucionaria.

Nuestro esfuerzo, en este primer tramo del análisis, será enfocar la situación en términos de "crisis orgánica", es decir en un nivel en el que la presencia de las clases dominadas opera sólo en un segundo plano.

En estos términos, una caracterización particularizada de la coyuntura actual se resumiría en estos rasgos:

1. Mantenimiento crónico de una situación de crisis orgánica que no se resuelve como nueva hegemonía por parte de la fracción capitalista predominante ni como crisis revolucionaria para las clases dominadas;
2. Predominio de soluciones de compromiso, en las que "terceras fuerzas" que no representan históricamente los intereses de ninguna de las clases polarizadas de la contradicción principal ocupan el escenario de la política como alternativas principales, aún cuando su constitución sea residual, inexpresiva de las nuevas contradicciones generadas por el desarrollo del capitalismo monopolista dependiente en la Argentina.

Con estos alcances tendría sentido una definición de la situación de la Argentina de hoy en el plano

político-social como de "empate": "Cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para votar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para dirigir el país como le agradaría".

Nuestra hipótesis es que la raíz de esta situación se halla en que ninguna de las clases sociales que lideran los polos de la contradicción principal (capital monopolista/proletariado) y que son por ello objetivamente dominantes en su respectivo campo de alianzas, ha logrado transformarse en hegemonía de su bloque histórico.

LOS CONTENIDOS DE LA "REVOLUCION ARGENTINA"

E

l golpe de Estado del 28 de junio de 1966 significa en la historia política argentina algo más que un mero relevo de gobierno por vía de la típica insurrección cuartelera latinoamericana: se trata del intento más decidido realizado por la fracción dominante en el nivel económico-social para superar, a su favor, una situación de crisis orgánica y transformar ese predominio en hegemonía. Su punto de partida es, en ese sentido, similar al del alzamiento militar ocurrido en Brasil en 1964. Los resultados, sin embargo, han sido distintos: mientras en Brasil el capital monopolista logró, a través de la consolidación de una oligarquía militar-industrial, superar la "crisis de autoridad", en la Argentina la crisis hegemónica se mantiene en los términos iniciales, aun cuando en el nivel económico el predominio del capital monopolista se haya acentuado desde entonces.

Pero esa potencia económica no pudo transformarse en potencia política; los nuevos grupos dominantes en el terreno de la producción no fueron capaces de crear nuevas fuerzas sociales estables que los representaran o de utilizar a su favor las preexistentes. Su hegemonía sólo se expresó en la fase en que, dentro de la relación permanente violencia-consenso, predominó abiertamente la primera, es decir, hasta mediados de 1969. Pero cuando esa valencia engendró su contrarreplica, la fórmula de poder, a diferencia del caso brasileño, se desequilibró. El intento por buscar, a partir de ese fracaso, menos mecanismos consensuales, tampoco tuvo éxito: hoy, en la escena política, vuelven a dominar los desalojados en 1966, con lo que la situación de "crisis orgánica" que provocó el estallido de la "Revolución Argentina" sigue en pie. La política argentina actual es un escenario en el que juegan sus papales clases sociales y fuerzas sociales que no aciertan, desde el punto de vista de un proyecto coherente para el desarrollo del capitalismo en la Argentina, a asumirse con eficacia histórica. Los protagonistas centrales de este movimiento pendular sin triunfadores políticos netos son, en el primer nivel estructural el capital monopolista, extranjero o asociado con el imperialismo; el capital nacional y una rama particularmente importante de éste, la gran burguesía agraria. Políticamente, esto es, en ese nivel que hemos llamado de las fuerzas sociales, estos grupos se

han expresado predominantemente a través de cuatro actores: los Partidos Políticos, las Fuerzas Armadas, la Burocracia Sindical y una nueva conjunción que llamaremos el "Establishment", integrada por tecnócratas y por representantes directos del capital monopolista que, al margen de los partidos, asumen roles de élite política.

La coyuntura arranca con una ofensiva hegemónica del capital monopolista que se consolida, en el primer período de la "Revolución Argentina", durante el lapso que podríamos personalizar en la pareja Onganía-Krieger Vasena. En esa etapa, efectivamente, el predominio del capital monopolista se transformó en hegemonía dentro del bloque dominante y el capital medio nacional y la burguesía agraria debieron supeditarse políticamente a él. Ello se logró a través del establecimiento de una nueva fórmula de poder, que arrasó con el régimen de los partidos y lo suplantó con una coalición entre Fuerzas Armadas y el "Establishment", a la que se intentó agregar, con un éxito bastante significativo, a la Burocracia Sindical.

Esta fórmula aparecía como la respuesta más coherente, en el nivel de las fuerzas sociales, para las necesidades que la lógica del desarrollo capitalista venía planteando desde tiempos atrás. Con esto último queremos decir que los contenidos del movimiento de 1966 estaban ya larvadamente diseñados cuando encontró su techo, a mediados de la década del 50, el modelo de crecimiento capitalista vigente hasta entonces. A partir de ese momento la historia, de las clases dominantes argentinas es la historia, zigzagante, de la búsqueda de ajustes entre las nuevas condiciones económicas y las estructuras políticas.

Estas nuevas condiciones económicas suponen la necesidad de un proyecto de crecimiento a largo plazo caracterizado por cambios de orientación en la política frente al capital extranjero, frente a la promoción industrial y frente a la política laboral, tendientes a favorecer un modelo de acumulación adaptado al crecimiento de los sectores monopolistas. Una orientación de ese tipo en los grupos predominantes de la burguesía es posible comenzar a detectarlo a partir de la crisis de 1952, como un intento dirigido desde entonces a concluir con la política distribucionista y con la ineficacia productiva de las empresas surgidas al amparo del proteccionismo y del proceso inflacionario y a utilizar el poder del Estado para obtener el desarrollo de las economías externas requeridas por su propia dinámica de crecimiento, sólo posibles a través de una acción pública que incrementase las inversiones en obras de infraestructura y, por lo tanto, racionalizara el desempeño del Estado mediante la eliminación de gastos improductivos.

Ese proceso no encontró, durante años, sino ecos adormecidos en el poder político, siendo que, como en todo salto en el desarrollo capitalista, el papel a cumplir por el Estado resultaba una variable imprescindible. Finalmente, en 1966, como antes de 1930 y en 1943, fueron las Fuerzas Armadas quienes encaramándose en el proceso de desarrollo del capitalismo, disolvieron las estructuras políticas anteriores y se transformaron en dinamizadoras de la nueva etapa.

Las Fuerzas Armadas completan así en 1966, un ciclo político cuya primera versión había estallado en 1955 con el derrocamiento del nacionalismo popular peronista, operado cuando tenían lugar los primeros



síntomas de la crisis. Desde ese momento, es decir, desde el agotamiento del tramo industrializador sustitutivo de productos livianos, se planteaban para el futuro del capitalismo en la Argentina dos alternativas básicas: una, forzar la marcha llevada hasta entonces por el peronismo hacia un modelo de desarrollo de las fuerzas productivas basado en una sólida alianza entre el Estado y la burguesía media, nacional, en la que se estatizaron los centros fundamentales de la acumulación. Otra, crear las condiciones para una nueva etapa del desarrollo capitalista en la Argentina mediante la implementación de políticas que, acentuando la dependencia, fueran capaces de garantizarle a los sectores más concentrados el control de la economía. Quedaba, por supuesto, una tercera alternativa, dependiente mucho más de la necesidad que de la voluntad: la instrumentación de una política de compromisos constantes entre las clases y fracciones de clase dominantes, en la que el Estado se transforma en una suerte de campo neutro donde todas ellas compiten, obteniendo beneficios inmediatos según la fuerza de su presión.

El derrocamiento del nacionalismo popular descartó la posibilidad de un desarrollo vía capitalismo de Estado, pero tampoco condujo al establecimiento de una nueva hegemonía, mediante la cual el conjunto de las clases dominantes aceptara la dirección sobre ellas del capital monopolista. En primer lugar, porque en el nivel económico el proceso de predominio del capital monopolista no estaba aún consolidado y el poder de las otras fracciones de clase, en especial la burguesía agraria, era muy grande. En segundo lugar, porque la fórmula de poder se construyó alrededor del consenso que podían otorgar los partidos políticos, ligados en su mayoría con el capital nacional y la burguesía agraria.

Esta fórmula de poder, en la que los partidos políticos debían jugar un rol protagónico, fracasó: la llamada "Revolución Libertadora" fue, quizás, el último intento orgánico de la burguesía agraria por mantener un rol hegemónico en el bloque dominante.

Sobre ese fracaso aparece, en 1952 la alternativa de Frondizi. Básicamente el gobierno de Frondizi es un capítulo del proceso de maduración de los intentos hegemónicos del capital monopolista y de afianzamiento de su predominio en el terreno económico, por el aliento dado entonces a la radicación de inversiones imperialistas. En el plano político la etapa supone la

emergencia, en la fórmula de poder que se busca instaurar, de nuevas fuerzas sociales: el "Establishment", que comienza a asumir roles importantes en el aparato del Estado y la Burocracia Sindical. Entretanto, el sistema de Partidos Políticos es relegado a un segundo plano, hasta el punto que incluso se arrastra a una virtual disolución al propio aparato partidario oficialista: el "frondizismo" es mucho más "desarrollismo" que "radicalismo intransigente".

El intento de estabilizar una nueva fórmula de poder, sin embargo, fracasó. En un plano, porque, pese a permitir el avance del capital monopolista sobre las otras fracciones, buscó constituirse en factor unificador del conjunto de la burguesía. La hegemonía del capital monopolista supone el sacrificio de sectores de las clases dominantes; en la experiencia de 1952-62 se trató, en cambio, de articular una política que mantuviera, simultáneamente, los niveles de protección para el capital nacional, que siguiera transfiriendo ingresos a la burguesía agraria y que garantizara altos beneficios para el capital monopolista. Todo ello, en los hechos, se contrarrestaba y traía como consecuencia un acentuamiento de la ineficacia del sistema en términos de su funcionalidad para la fracción predominante. Como modelo, el propuesto por el "desarrollismo" quedó así como un interés pragmático de compromiso entre todos los grupos dominantes locales y el capital extranjero. A diferencia del ciclo de la "Revolución Libertadora", que sólo intentó resarcir a la burguesía agraria y al imperialismo de las pérdidas que le infligiera el nacionalismo popular, el frondizismo proyectó ir más allá y superar los límites, ya exhaustos, de la industrialización liviana, mediante el pasaje a una etapa de desarrollo de ramas industriales más estratégicas. Pero ese objetivo sólo puede lograrse, en el marco de las relaciones capitalistas, entregándole al Estado la responsabilidad mayor en la acumulación destinada a financiar las grandes inversiones que demanda la construcción de la industria pesada y la realización de obras de infraestructura es decir, nacionalizando las llaves de la economía o poniendo al Estado al servicio del capital monopolista.

Al fracasar en sus objetivos económicos por su incapacidad para consolidar un proyecto consistente, el frondizismo fracasó también en la construcción del esquema de poder: no pudo satisfacer las necesidades que planteaba la coalición con la Burocracia Sindical ni con las Fuerzas Armadas, no satisfizo totalmente al

“Establishment” y no logró construir una alternativa frente al sistema de Partidos Políticos que se le oponían desde la tribuna parlamentaria. Cuando fue desalojado, su legitimidad era nula y el vacío hegemónico se replanteaba. Quedaba como saldo, como soporte para la nueva etapa, el fortalecimiento de las posiciones económicas del capital monopolista. Pese a ello, los primeros pasos del régimen militar postfrondizista parecieron marcar una resurrección de la gran burguesía agraria. Duró poco: el ministerio de Federico Pinedo, en 1962, fue como el último estallido victorioso de una ofensiva de la vieja “oligarquía”. Tras ese episodio surge una suerte de “ensayo general”, en el que dos de los protagonistas principales del movimiento militar de 1966 aprontan sus efectivos; la constitución de una nueva élite político-militar, el ascenso a funciones de gobierno de una burocracia formada por tecnócratas y asesores del capital monopolista, estos, la coalición entre “Establishment” y Fuerzas Armadas que caracteriza el primer tramo de la “Revolución Argentina”, tiene su anticipo en el gobierno de José María Guido, entre 1962 y 1963.

Pero esta élite no estaba, sin embargo, lo suficientemente fortalecida en 1963 como para otorgarle salida hegemónica a un proceso que en lo económico ya estaba maduro. Es sobre la base de esta reiteración de una vacancia, que los Partidos Políticos resurgen de sus cenizas y forjan el gobierno de Arturo Illia; tras ellos, el capital medio y la burguesía agraria, sus tradicionales soportes históricos, recuperan posiciones perdidas y, entre 1963 y 1966, jaquean, a veces con éxito, al capital monopolista, que carecía de expresión política sólida.

Pero este triunfo de los Partidos Políticos y de las clases que son expresadas por ellos, debía ser efímero: iba a contramano de la lógica de desarrollo capitalista, suponía un desfase demasiado grande entre economía y política.

Los Partidos Políticos, como categoría, globalmente considerados, suponen la vigencia de un sistema particular de toma de decisiones. Ese sistema incluye, básicamente, un escenario y determinadas condiciones para su constitución: el escenario es el Parlamento y su condición de existencia la consulta electoral periódica. Ambos rasgos, sumados a las características de reclutamiento de la “clase política” en la Argentina, convierten a los partidos en la expresión política predominante del capital medio, urbano y rural. El Parlamento es así una tribuna en la que confluyen múltiples intereses “particularistas”, el único recinto en el que las clases y fracciones de clase económicamente subordinadas en la alianza dominante, consiguen predominar políticamente. En esta suma de intereses “particularistas” expresados en el Parlamento, se incluyen también los del capital monopolista, pero la condición para su coexistencia es el estado de compromiso permanente. Un compromiso que debe abarcar además, en alguna medida a las clases populares, porque las consultas electorales periódicas suponen la asunción, aunque fuere retórica, de intereses “universalistas”. En el Parlamento, el capital monopolista es llevado a la mesa a negociaciones y su presencia en ella es subordinada. La elaboración de un proyecto hegemónico no pasa por su presencia en ese escenario: se desplaza hacia otros centros de decisión política; las Fuerzas Armadas, la tecnocracia ubicada

en el aparato del Estado y la Burocracia Sindical, con la que está relacionada por el “toma y dáca” del conflicto económico.

El proceso lleva a los Partidos Políticos y a sus instituciones a girar en el vacío. Un resultado que en la Argentina no fue difícil de conseguir, dada, por añadidura, la situación de proscripción política de las grandes masas populares que no se sentían representadas a través del sistema de partidos. Este hecho, sumado a la carencia de representatividad de los intereses económicamente predominantes, llevó, en 1966, al completo desgaste institucional.

Cuando en junio de ese año los militares toman por asalto el poder y utilizan como una explicación de su alzamiento el deterioro de los partidos políticos, decían la verdad: su “crisis de representatividad” era total. La acumulación de capital, el incremento de la eficiencia del sistema económico, la racionalización de las actividades públicas, eran demandas que se asentaban sobre la lógica del desarrollo capitalista: ellas imponían nuevas políticas, contradictorias con las aspiraciones de las masas populares y con los intereses de las clases económicamente subordinadas del bloque dominante. No estaba en la capacidad del sistema de partidos asumir esas tareas: es a este cuello de botella político del desarrollo capitalista, que el golpe de junio viene a poner fin.



A LA BUSQUEDA DE UNA NUEVA HEGEMONIA

El plan monopolista en la economía tiene como correlato en la política a un modelo de Estado autoritario, que concentre el poder asociando los núcleos de decisión económica con los de decisión política. La nueva organización del capitalismo, en la que el Estado debe jugar un fuerte papel intervencionista como dinamizador de la economía, obliga a concentrar el poder fragmentado. El Parlamento —institución concurrential en la que los partidos son portadores de las presiones de todas las fracciones en que se divide la clase dominante— pierde así vigencia: en ese mercado político, desfasado con respecto al mercado económico, los desplazados suelen ser los vencedores. La lógica del desarrollo monopolista no tolera ese desencaje entre economía y política; el Parlamento y los partidos por ello, desaparecen o se subalternizan y en su lugar emerge la autoridad presidencial, y la presencia de los tecnócratas y aun de los funcionarios directos del capital en las cúspides de la burocracia.

Esta ley se expresa en cada sociedad según características particulares. En la Argentina de 1966 fueron las Fuerzas Armadas sus agentes desencadenantes, al tomar el poder para garantizar, de hecho, las condiciones políticas de la dominación monopolista. Al lado de las Fuerzas Armadas, la nueva hegemonía quiso fundarse con el agregado de otras dos fuerzas sociales: el “Establishment” y la Burocracia Sindical. En esa asociación debía encontrarse una fórmula de poder que fuera expresiva, en el plano político, de la etapa capitalista monopolista dependiente. Pero este alineamiento nunca pudo estructurarse como una verdade-



ra coalición, con lo que el proyecto hegemónico manifestó siempre extrema vulnerabilidad hasta estallar, por fin, en 1970: enfrentados a una fusión de contradicciones que abarcaba a fracciones desplazadas de las clases dominantes y al conjunto de las clases dominadas y que se expresaba en lo económico, en lo político y en lo ideológico, los soportes sociopolíticos del plan monopolista vacilaron, volviendo a crear un vacío de autoridad.

En su discurso de marzo de 1967 anunciando la nueva política económica, Krieger Vasena, cabeza del "Establishment" asentado en el poder, había fijado los rasgos del proyecto y anticipado sus consecuencias sociales: "Lo que buscan las autoridades del país —dijo— es evitar la transferencia de ingresos en gran escala de unos sectores a otros. Dentro de cada sector se desea premiar a los más eficientes y que este presea el resultado de su propio esfuerzo".

El reinado del capital monopolista, entendido como proyecto racionalizador del sistema, supone —y ése era el sentido de las palabras de Krieger Vasena— la eliminación de lo periférico, de lo "artificial". Si la primera etapa de industrialización, a través de la sustitución de importaciones, permitió la coexistencia de distintas fracciones de las clases dominantes gracias a que, en el marco de un rápido crecimiento de las fuerzas productivas, todas tuvieron asegurado el acceso a una porción del mismo, la etapa monopolista supone, en cambio, tensiones y rupturas graves en el interior de los sectores propietarios.

No repetiremos acá un análisis de la implementación del plan monopolista en cuanto hace a sus mecanismos económicos, aspecto sobre el que existe ya una importante bibliografía; nuestro objeto son sus consecuencias sociales y por lo tanto la forma en que se redefinen campos de interés y se desplazan los puntos de ruptura políticos.

Si desde la perspectiva de los asalariados el plan monopolista trae aparejada una política de "shock" que desde sus primeros tramos rebaja brutalmente sus ingresos reales, en el interior de las clases dominantes la hegemonía de la fracción monopolista en la Argentina de 1966 supuso una transferencia en la distribución de la plusvalía en detrimento de la burguesía pequeña y mediana y de la llamada "oligarquía agropecuaria", proceso al que se superpuso un flujo cons-

tante de ingresos a favor del Litoral en detrimento del Interior, que actualizó, a nivel económico una suerte de "redualización" de la sociedad.

Una política de tal modo agresiva, que busca quebrar una situación de "empate", no puede desatarse sino a través del respaldo de la violencia desnuda, montada sobre una estructura vertical, autoritaria, del Estado. El supuesto teórico —en la medida en que la pura violencia no puede sostenerse como situación "normal" en una sociedad compleja— es que los primeros "sacrificios", tras una etapa de disciplina forzosa, pueden superarse a no muy largo plazo y crearse así las bases para una ampliación del consenso.

En efecto, es condición para la realización política del modelo que los reajustes en el nivel económico lleven a una racionalización y "modernización" del sistema social, capaz de generar una rápida expansión de las fuerzas productivas, una acumulación de riqueza con la que se podrá "premiar" luego selectivamente a distintos estratos en términos de su comportamiento "eficiente". En los países imperialistas esa lógica de la hegemonía monopolista operó eficazmente permitiendo integrar, de manera diferencial, a sectores de la pequeña burguesía y a capas del proletariado en la aceptación consensual de las leyes del juego.

Este su puesto es el que le da sentido al esquema de los "tres tiempos" formulado en 1966 por los teóricos de la "revolución argentina". En realidad, el "tiempo económico", el "tiempo social" y el "tiempo político" pueden ser traducidos como una sucesión ideal de dos etapas: en el modelo monopolista operaría primero un momento de Acumulación (de riqueza y de poder) que supone el sostén del autoritarismo armado a la reestructuración económica en beneficio de los monopolios y un momento posterior de Distribución en el cual, diferencialmente se repartirían entre otros sectores porciones de lo acumulado y se regularían formas controladas de participación de ellos en las decisiones.

El plan monopolista organiza así una carrera contra el tiempo y su éxito o su fracaso dependen de la velocidad de movimiento de dos factores: el rechazo al proyecto por parte de los perjudicados y la recolección de los frutos del plan, para permitir los necesi-

rios reajustes consensuales.

En la Argentina el primer factor desbordó al segundo, obligando desde mediados de 1969 a un repliegue del proyecto hegemónico monopolista. Esto, por una convergencia de variables actuantes en los niveles económico, social y político, que determinaron la aceleración de "puntos de ruptura". En lo económico, lo fundamental es la escasa capacidad del sistema para generar efectivamente un crecimiento sostenido y veloz de las fuerzas productivas dados los límites estructurales que plantean las relaciones de dependencia: una cosa es la hegemonía de los monopolios en las naciones imperialistas y otra en las capitalistas dependientes como la Argentina. En lo social, la complejidad de la estructura de clases y el grado de participación organizada, a todo nivel, logrado históricamente por las mismas, que dificulta —en oposición al caso brasileño, por ejemplo— un manipuleo basado en el despotismo. En lo político, y en especial a través de su expresión en el mundo obrero, la presencia, desde 1957, de masas movilizadas que se perciben como desalojadas de un poder que alguna vez detentaron y que identifican al peronismo como el símbolo de su unidad de clase.

Los principales soportes político-sociales del plan de los monopolios, que podían acompañar al "Establishment" en la estructuración del nuevo proyecto hegemónico —las Fuerzas Armadas y la Burocracia Sindical— vacilaron frente a la marea de contradicciones concentradas: el "Cordobazo" hirió de muerte, a esta primera versión de la hegemonía monopolista.

LA CRISIS POLITICA DE 1970

Las consecuencias del "Cordobazo" fueron inmediatas: Krieger Vasena es obligado a renunciar y el régimen de Onganía, si bien durará aún un año, apresura su disolución. Se abre desde entonces un nuevo período de crisis política que las clases dominantes aspiran a cerrar ahora con la realización de elecciones generales, confesando de alguna manera el fracaso de la experiencia bautizada como "Revolución Argentina".

Al asumir el poder en 1966, las Fuerzas Armadas justificaron su intervención en base al planteo de objetivos trascendentes, en términos de "empresa nacional". No se evocaron entonces —al menos de manera principal— necesidades de defensa del "Orden" frente a la "Subversión", sino fines positivos: "modernizar" el país, encauzarlo hacia la "Grandeza" superando la parálisis a que lo habrían llevado las pujas facciosas, intersectoriales, encarnadas en los partidos políticos.

Claro está que esa retórica no podía disolver en figuras literarias los contenidos sociales que inevitablemente pugnan tras todo proyecto político. Manteniéndose dentro de los límites del sistema, esto es, sin cuestionar las relaciones de producción, la superación de la crisis orgánica argentina, la ruptura de la situación de empate entre fracciones de la clase dominante supone la vigencia de uno de los dos modelos alternativos ya señalados: poner al Estado al servicio de la burguesía media, haciendo que la inversión pública

reemplace a la inversión privada extranjera en las industrias dinámicas, lo que significa nacionalizar las llaves de la acumulación o ponerlo al servicio de la fracción de clase predominante en el nivel económico a fin de tornar congruentes los dos planos de la dominación. Acorraladas frente a esta alternativa de hierro, las Fuerzas Armadas entregaron en 1966 el sustento de la "modernización" y la "grandeza" al capital monopolista.

Pero este proceso no se desarrolló libre de tensiones, tensiones que sólo hubieran podido relegar la presencia visible y rápida de efectos económicos favorables. En el tercer año de vigencia del plan, las Fuerzas Armadas se encontraron con que la suma de obstáculos políticos y sociales que imponía la implantación de la "grandeza" por esa vía era tal, que determinaba costos demasiado elevados.

Los reclamos del capital mediano y pequeño y de la burguesía agraria; las explosiones regionales que abarcaban zonas de desigual desarrollo económico, político y social; la situación de exasperación de los asalariados que desbordaba, en los hechos, los intentos participacionistas de la Burocracia Sindical y el descontento generalizado de la pequeña burguesía, expropiada políticamente y sometida a una creciente pauperización, crearon una acumulación de fuerzas opositoras al proyecto monopolista tan poderosa, que precipitó la fractura del monolitismo militar: a través de esas grietas se filtró el reclamo de las clases dominantes subordinadas desde 1966 por el capital monopolista. Había fracasado la posibilidad de consolidar una oligarquía militar-industrial que hiciera compatibles los intereses de las Fuerzas Armadas con los de los grupos más concentrados de la industria y las finanzas, verdadera clave del proyecto hegemónico neodependiente, tal como lo certifica el caso brasileño.

Y es precisamente en el momento de la crisis política de 1970 —cuando Onganía es desplazado y culmina el "milenarismo" de sus planes— cuando parece más relevante para el observador el análisis comparativo de la experiencia argentina y de la experiencia brasileña.

Como hemos señalado, ambas tienen puntos de partida similares: el golpe de Estado de 1964 que lleva al poder a Castello Branco y el de 1966 en el que las Fuerzas Armadas le entregaron a Onganía la primera magistratura, se conjugan en la voluntad de establecer un sistema burocrático autoritario como forma de instrumentar la hegemonía del capital monopolista.

Sin embargo, a medida que el proceso se fue desarrollando, las dificultades para viabilizar el proyecto en la Argentina aumentaron su intensidad, hasta llegar a hacerlo fracasar. El modelo hegemónico neodependiente no pudo cristalizar por la resistencia que al mismo le opusieron por un lado las clases populares y por el otro los grupos subordinados de las clases dominantes. Nuestro interés, ahora, se centra en esta última variable, aun corriendo el riesgo de sesgar demasiado el análisis. En este sentido nos interesa marcar, como característica diferencial del caso argentino, en el nivel económico-social, la capacidad de resistencia que el viejo capitalismo urbano y rural mantiene frente a la vitalidad del proyecto hegemónico neodependiente. Esta capacidad de resistencia que —insistimos— sólo analíticamente puede ser aislada de las



luchas de las clases populares puesto que ellas, en la realidad, son un mecanismo realimentador incesante, se pone de manifiesto a partir de la crisis social que el "Cordobazo" sintetiza en 1969 y de la crisis política subsecuente que estallará en 1970.

Entre 1967 y 1968, al cumplirse el primer trienio del golpe de Estado dado por los militares brasileños, una crisis similar a la Argentina se instala en el sistema político de ese país. El año 1968 es, en Brasil un año de escalada en la ofensiva popular: grandes movilizaciones estudiantiles, crecimiento de las luchas obreras y consolidación de la oposición civil en el Frente Amplio, una coalición en la que confluye todo el sistema de partidos, desde los comunistas hasta Carlos Lacerda, para jaquear al poder militar. El resultado de ese proceso es, sin embargo, el fortalecimiento de la hegemonía del capital monopolista a través de una oligarquía militar-industrial que barre totalmente a la oposición.

La respuesta que las Fuerzas Armadas dieron a la ofensiva combinada de los políticos tradicionales y del movimiento obrero y estudiantil consistió en galvanizar aún más el aparato autoritario y forzar la marcha de los planes económicos neo dependientes. En marzo de 1969, el presidente del "tercer gobierno de la Revolución Brasileña", Garrastazu Medici, señalaba: "El Estado Revolucionario durará el tiempo indispensable para la implantación de las estructuras política, administrativa, jurídica social y económica capaces de promover la integración de todos los brasileños a los niveles mínimos de bienestar". La decisión de volcar todo el peso del Estado a favor del modelo de capitalismo monopólico dependiente, fue lo que permitió el llamado "milagro": a costa de cada vez más marginalidad y diferenciación social y económica, de concentración de la riqueza y aumento de la miseria relativa de las grandes masas populares, el sistema probó su dinamismo, mostrando que sus límites principales no se hallan en lo económico sino en lo político-social. Si el capital monopolista posee la capacidad de Poder necesaria como para desbaratar las primeras resistencias y acelerar su marcha, puede conseguir éxitos en sus metas de desarrollo.

Esta decisión es la que no pudo implementarse en Argentina: la crisis política de 1969/70 arrastrará a su caída al autoritarismo militar de Onganía y planteará, nuevamente, una situación de vacío de poder, colocando al problema de la legitimidad en el centro del

debate. Este vacío, a través de un proceso difícil, zigzagante, va a intentar ser cubierto finalmente por un Pacto que las Fuerzas Armadas le ofrecen a la Burocracia Sindical y a los Partidos Políticos con el objeto de poner en marcha un proceso de tipo "transformista" que se exprese en una estructura de poder "conciliacionista", intentando así dar una salida a la crisis política planteada, pero sin poder proponer un modelo ni económico ni político que le asegure dinamismo al sistema. Aunque la dirección causal pueda ser cuestionada, es un hecho que la crisis política de 1970 y el repliegue hegemónico del capital monopolista coincide con el inicio de un descenso en los indicadores de crecimiento económico, que habían manifestado una alza sostenida durante el bienio anterior. Retomando el ejemplo brasileño, este descenso no tiene por qué probar el agotamiento de las posibilidades económicas del modelo, sino marcar el problema de sus condiciones de posibilidad socio-política. Como ha sido señalado, "el plan de Krieger Vasena lleva a la economía argentina a un punto en el que, dadas las situaciones estructurales que condicionaron aquella coyuntura, la única alternativa al desorden económico es la continuidad del plan. Sin embargo, dicha continuidad implicaba acentuar aún más ferrozmente la explotación de la clase obrera y la pauperización de la pequeña burguesía e irritar más también la situación de parte de los sectores dominantes, especialmente la oligarquía terrateniente".

Es decir, que en 1970 la opción dinámica para el sistema hubiera sido, desde la lógica económica, la continuidad del plan, pero esa lógica chocaba contra techos políticos y sociales que no involucraban solamente a las clases populares sino que abarcaban a sectores de la burguesía, lo suficientemente poderosos como para frustrar la hegemonía monopolista. Pero antes de consolidarse la propuesta de retorno a las condiciones del empate, calificada por los propagandistas del gobierno militar como "Gran Acuerdo Nacional", hecho que recién se perfila nítidamente en el primer cuatrimestre de 1971, tiene lugar un paréntesis significativo.

Se trata del breve período presidencial del general Levingston, designado por la Junta Militar en junio de 1970 para reemplazar a Onganía y derrocado por la misma Junta en marzo de 1971. El interés de este lapso interno de la "Revolución Argentina" consiste en que, durante el mismo, y a través del ministerio de

Economía en manos de Aldo Ferrer, el capital nacional llega al punto más alto, desde la caída de Perón en 1955, en sus intentos por influir sobre las decisiones del Estado.

Aunque finalmente fracasaran, Levingston-Ferrer buscaron poner en marcha un proyecto reformista que, en lo económico-social, aspiraba a asociar al capital nacional con el Estado, sin estatizar el sistema productivo y financiero, pero, como señalara Ferrer, "argentinizándolo".

La estructura de ese Poder reformista debía basarse en una coalición entre Fuerzas Armadas, Burocracia Sindical, Organizaciones Corporativas que representan al capital nacional (como la Confederación General Económica, creada en tiempos de Perón) y técnicos y profesionales ligados a ellas, dejando fuera del proceso a los Partidos Políticos.

Las formas del modelo propuesto no diferían radicalmente de las asumidas bajo Onganía, en tanto marginaban al sistema de partidos y tendían a mantener desmovilizados a los sectores populares. Su contenido, en cambio, era diferente: mientras la burguesía agraria y el capital nacional ganaban posiciones, el capital monopolista debía dar un paso al costado y, en algunos aspectos, sufrir las consecuencias de medidas económicas oficiales que lo perjudicaban. Un mes antes de ser derrocado el gobierno adoptó decisiones que contrariaban concretos intereses de las grandes compañías petroleras extranjeras y de empresas como Bunge y Born y Deltec dedicadas a la exportación de productos primarios. En febrero, a través de un mensaje a la Nación, Levingston señalaba: "Cuando se recupera el manejo del crédito, se asume el control de los bancos, se opone a la distorsión de las operaciones de los principales productos de exportación, se nacionaliza la energía, es dable esperar una enconada resistencia y una creciente ofensiva de quienes ven reducidos sus privilegios. Y esto ocurre así porque los intereses afectados no han de sucumbir sin antes intentar revertir el proceso".

Pero el proyecto no tenía sostén en las fuerzas sociales, especialmente en aquella que podría dinamizarlo efectivamente: el poder militar, cuyas cúspides habían decidido instrumentar otro desemboque para la "Revolución Argentina", el de la reconciliación con los Partidos Políticos. El episodio Levingston tiene similitud con el que protagonizara, en Brasil, el general Alburquerque Lima, líder de la corriente llamada nacionalista del Ejército, finalmente desalojado de toda participación en el Poder. La diferencia está en el proceso posterior al desenlace infeliz para las corrientes nacionalistas: en Brasil del fracaso de ese intento resurgirá con más bríos el proyecto neo dependiente; en la Argentina se irá, trabajosamente, pactando un nuevo empate.

El derrocamiento de Levingston y la subsiguiente renuncia de Aldo Ferrer inaugura la "Tercera etapa de la Revolución Argentina", caracterizada por una inversión de la problemática inicial: ya no se planteará que la solución política habrá de surgir como consecuencia natural, a largo plazo, del éxito de un modelo económico, sea éste el del capital monopolista (Onganía-Krieger Vasena) o el de la asociación del Estado con el capital nacional (Levingston-Ferrer). El orden de la secuencia se alterará: sólo la obtención de un mínimo de legitimidad podrá, según la nueva estrate-



gia aplicada, garantizar una solución económica.

La consecución de ese mínimo consensual supone como elemento, indispensable, la articulación de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas, los Partidos Políticos (en especial el peronismo y la Unión Cívica Radical) y la Burocracia Sindical, ligada al peronismo pero con una alta cuota de poder relativo en el interior de ese movimiento, el contenido de ese acuerdo determina de hecho un repliegue del capital monopolista, que debe aceptar un Pacto con el capital nacional en el espacio que menos controla, dada su carencia de representación político-partidaria directa: el de la escena electoral y parlamentaria.

El Pacto, pues, si no significa la derrota del capital monopolista, en tanto el desenvolvimiento de la economía sigue un rumbo relativamente autónomo que le permite acentuar su predominio en ese nivel, importa **contrario sensu**, la mayor victoria que, dadas las relaciones de fuerza políticas y el carácter subordinado de sus posiciones en el sistema económico, pueden conseguir los sectores dominantes no monopolistas. Esto es, reubicarse en el Poder Político aun cuando su fuerza real sólo alcance para restablecer una situación de empate y no para instrumentar un proyecto hegemónico alternativo, dotado de legitimidad y capaz de potenciar un modelo económico dinámico.

El proyecto, pues, que se pone en marcha al asumir el gobierno el general Lanusse a principios de 1971 tiende a reconstruir las bases del poder, debilitadas por la crisis política que sucede a las conmociones sociales inauguradas por el "Cordobazo". El modelo político se desvincula del modelo económico: así como la gestión de Onganía se asocia directamente con la política económica de Krieger Vasena y la de Levingston con los planes de Aldo Ferrer, el período Lanusse no puede identificarse con una orientación precisa que vaya más allá de cierto pragmatismo básico, ocupado más por "administrar" que por "gobernar". La política ocupa "el puesto de mando"; el tema de la legitimidad aparece como central y la "reconciliación" al servicio de un proyecto "transformista" es planteada como objetivo supremo de la actividad oficial. En sucesivos discursos y declaraciones Lanusse planteó esta alternativa: "No habrá solución

para lo económico —dijo en julio de 1972— si no la hay antes en lo político. De ahí la decisión del gobierno y de las FFAA de ir a elecciones, de asegurar su realización. Mas, para no frustrar nuevamente las esperanzas populares es necesario concertar previamente lo que se ha de hacer para que mayorías y minorías, libres y respetadas entre sí, constituyan la gran fuerza integral que sustente la nueva política de cambio capaz de llevar a la Nación al cumplimiento de sus grandes destinos”.

El acuerdo propuesto por las Fuerzas Armadas a los Partidos Políticos y a la Burocracia Sindical, intentó inicialmente girar alrededor de la candidatura presidencial de Lanusse, en la idea de que éste podría concentrar en sus manos el Poder Militar y el Poder Civil, dos dimensiones disociadas en la historia de los últimos años argentinos. Este objetivo óptimo fracasó pero, pese a las dificultades y tensiones generadas por el proceso, la esencia del Acuerdo se ha mantenido en pie, aun cuando su forma de expresión no sea la homogeneidad absoluta, sino la integración conflictiva entre “oficialismo” y “oposición” en el interior de un sistema político unificado.

Desautorizado en el corto plazo el “modelo brasileño” de hegemonía neocapitalista a través del autoritarismo militar, el abanico ahora abierto de posibilidades políticas descoloca a la burguesía monopolista, que debe sacrificar su presencia protagónica a favor de conseguir una mínima consolidación del sistema de poder, que había sido virtualmente vaciado desde 1969 en adelante por las embestidas de las clases populares y del viejo capitalismo urbano y rural. Incapacitado de imponer su modelo, el sistema de conciliación propuesto aparece como un mal menor que, de todos modos, no llega a cuestionarle su predominio en el sistema económico, aunque deba admitir la competencia con los otros sectores de la burguesía, en el mercado político del sistema de partidos.

El espectro de posibilidades que abre la salida electoral y la nueva institucionalización del país se extiende a través de un continuum en uno de cuyos extremos, el de la “derecha”, ubicamos el proyecto “transformista” de las Fuerzas Armadas, cuya cúspide actual seguirá actuando como “control” del futuro gobierno y en el otro, el de la “izquierda”, a una propuesta “reformista” cuyas cabezas son los Partidos Políticos (en especial el peronismo y el radicalismo), la Burocracia Sindical y las organizaciones profesionales del capital medio como la Confederación General Económica.

Definimos al “transformismo” —en la dirección planteada inicialmente por Gramsci— como una for-

ma particular de salida a una situación de crisis orgánica en la que una de las fracciones dirigentes propone un programa de mantenimiento del Orden que incluye como condición la absorción de fracciones de las clases dominadas. Esta absorción modifica las formas de la dominación, pero no su sustancia: un camino de cambios que deja, en el fondo, las cosas como estaban. Un sistema de tipo “transformista” intenta la superación de la crisis a través del rechazo de toda reforma orgánica, aunque utilice a cuadros reformistas para sus fines.

El “reformismo” se propone ir más allá. En la Argentina actual, su contenido es la maximización de los intereses del capital nacional enfrentados al modelo de neodependencia: esas metas unifican —más allá de diferenciaciones debidas a lo peculiar de su composición interna— al peronismo, el radicalismo, la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica.

Es altamente probable que esta puja entre reformismo y transformismo se resuelva en el corto plazo a favor de la primera alternativa. Pero la posibilidad de que este reformismo, transformado en régimen político, pueda aparecer como alternativa hegemónica es menos cierta. La debilidad económica, frente al capital monopolista, de los sectores sociales que le dan su contenido, sólo podría ser compensada por una efectiva asociación con las Fuerzas Armadas que otorgue el poder suficiente para impulsar un proyecto de capitalismo de Estado, algo que en las actuales condiciones de monopolización de la estructura económica argentina se acercaría peligrosamente a una vía no capitalista de desarrollo.

Cierto es que la ratio última del peronismo, su postrera intención como movimiento nacional-popular, es volver a recrear las condiciones de una alianza entre Ejército y Sindicatos que favorezca ese plan de reformas orgánicas nacionalistas y estatizantes, algo, sin embargo, que ni los más optimistas pueden prever como realizable, con alguna base de certidumbre.

El retorno al empate y la recurrencia de nuevas crisis sociales y políticas parece ser el diagnóstico más verosímil. Tras la experiencia frustrada de hegemonía neodependiente, tras el triunfo político del viejo capitalismo urbano y rural, que sin embargo no tiene la fuerza en sus manos como para revertir el proceso en el nivel de la economía, el futuro indica la irremediable vuelta de la Argentina a la crisis orgánica que en 1966 motivó la intervención militar, en un marco de comportamiento mediocre del capitalismo, con estancamiento relativo y desarrollo distorsionado, con bajas tasas de crecimiento y altas tasas de inflación.

Buenos Aires, diciembre de 1972.

**SOCIEDAD
Y POLÍTICA**

la otra cara de la moneda



Paúl Singer

Mientras que el dólar se debilita en los mercados de cambio, los Estados Unidos se benefician a costa de sus competidores comerciales. ¿Qué es lo que hay detrás de este misterio?

Las monedas se transforman, pareciendo que tienen voluntad propia. Por detrás están las transformaciones de la economía internacional.

Por más de una vez el dólar aparece como personaje principal en la dramática (¿o dramatizada?) crisis del sistema financiero internacional. La idea del dólar como personaje no es sólo metafórica: la gente, tanto como los órganos de divulgación, tratan del asunto, el dólar y las otras monedas parecen dotadas de voluntad propia, sufren y reaccionan de manera semejante que los seres humanos, en una explosión de fetichismo que encubre la crisis real en una densa atmósfera de misterio.

La opinión más común es que el dólar representa el poder y el prestigio de los Estados Unidos. Su quiebra sería por lo tanto, la señal de que los EE.UU. están perdiendo fuerza en el escenario mundial. Pero sin embargo, son los mayores competidores de los Estados Unidos —el Japón y Alemania Occidental— los que más se empeñan en la “defensa” del dólar. Los gobiernos de estos países han adquirido (más de una vez) billones de dólares, en un esfuerzo, infructuoso, por “salvar” la moneda norteamericana. ¿Qué extraña manifestación de solidaridad (¿o de masoquismo?) estaría llevando a los ministros de finanzas del Japón, de Alemania Occidental y de otras potencias europeas, a empeñarse a fondo en la “defensa” del dólar, al mismo tiempo que hacen declaraciones quejasas sobre la pasividad de los Estados Unidos, que poco o nada hacen en “defensa” de su moneda?

Para llegar a las raíces reales de la crisis monetaria internacional, es preciso inicialmente, dejar de lado los aspectos monetarios y examinar las transformaciones que ha venido sufriendo la economía internacional en los últimos decenios. Estas transformaciones tienen por origen: a) la desigualdad entre las tasas de crecimiento económico, muy elevadas en algunos países, como en Japón, Alemania Occidental, Francia e Italia, y mucho menores en otros, como los Estados Unidos e Inglaterra; b) el surgimiento de un grupo de

países no capitalistas, cuyo peso en la economía mundial y, específicamente, en el comercio internacional, ya es bastante expresivo. Como resultado, el peso de los Estados Unidos y de Inglaterra en el mercado mundial ha disminuido cada vez más. Sería bueno recordar que, aun en el último período de postguerra estas dos potencias detentaban la hegemonía absoluta en el comercio internacional. Cuando las reglas que regulan las transacciones entre los países fueron establecidas, en 1944, en la ciudad americana de Bretton Woods, los Estados Unidos y la Gran Bretaña tenían todas las condiciones para dictarlas al resto del mundo capitalista de acuerdo con sus propios intereses. Ahora el hecho se vuelve contra los hacedores: estas reglas refuerzan la posición de las nuevas potencias hegemónicas, básicamente el Japón y las naciones pertenecientes al Mercado Común Europeo (MCE), en detrimento de las antiguas. La Gran Bretaña ya lo reconoció y se adhirió al MCE. Los EE.UU. intentan salir del aislamiento, aproximándose a la China y procurar penetrar, como inversionistas y exportadores en el promisor mercado soviético.

Las reglas del juego económico internacional son básicamente liberales. El Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT) prevé la paulatina eliminación de los obstáculos tarifarios (y eventualmente también los no tarifarios) al comercio internacional, conducido en cada país por compañías privadas, y teniendo por objetivo sus intereses particulares. El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene por base la convertibilidad de las monedas nacionales. El gobierno de cada país debería, en principio, asegurar en el mercado cambiario de su país, que las tasas de conversión de su moneda fueran mantenidas dentro de una franja de variación bastante estrecha. Así por ejemplo, si Brasil “declara” al FMI que el cruzeiro vale 1/6 de dólar, al gobierno le corresponde, sin ejercer ningún control

Después de sufrir dos devaluaciones en un período de 14 meses —la primera de 7,8 o/o y la más reciente de 10 o/o— el dólar continúa sufriendo, las consecuencias de la crisis monetaria internacional. Inseguros en cuanto al futuro de la moneda norteamericana, los especuladores europeos cambiaban el dólar por la moneda de cualquier otro país. En Londres y en París, los precios del oro llegaron a un nivel previsto solamente para 1980 alza ocasionada por la compra excesiva del metal.

¿Qué es lo que hay detrás de esta crisis monetaria, donde las monedas parecen estar dotadas de voluntad propia, sin que aparezcan los verdaderos motivos de su revalorización o de su devaluación?

Paul Singer analiza las contradicciones que rovaron la nueva crisis monetaria, y muestra cómo los Estados Unidos parecen ser víctimas de reglas que ellos mismos, durante décadas, impusieron al resto del mundo.

“artificial”, asegurar que efectivamente en el Brasil, cualquier cantidad de dólares pueda ser cambiada por cruzeiros a esa tasa. Debe hacerlo sin establecer una tasa de cambio oficial y obligatoria, sino únicamente, interviniendo en el mercado como comprador de cruzeiros si la oferta de dólares fuera insuficiente, y como vendedor si la oferta de dólares fuera excesiva. El antagonismo del FMI a las tasas de cambio oficiales deriva de la misma filosofía liberal que produjo el GATT: es preciso impedir que los gobiernos desvíen el funcionamiento “natural” del mercado, en el cual sólo deben prevalecer los intereses particulares (en la práctica, los de las grandes compañías).

LIBERTAD DE ACCION

Es claro que estas reglas sólo favorecen a las naciones económicamente más poderosas, o mejor, a las compañías de estas naciones. Se les asegura la máxima libertad de acción, no sólo en lo que se refiere a las transacciones comerciales sino también financieras. La estabilidad cambiaria permite a estas compañías invertir con tranquilidad en otros países y repatriar sus ganancias sin que el flujo de recursos sea perturbado por alteraciones inesperadas en el valor de cada moneda nacional.

Gracias a la aplicación de estas reglas, no siempre perfecta por cierto —ya que está sujeta a contingencias políticas—, pero efectiva en la mayoría de los casos, las grandes compañías norteamericanas pudieron penetrar en casi todos los mercados de los países capitalistas (con la notable excepción del Japón). La balanza comercial de los EE.UU. tenía entonces enorme superávit, es decir que exportaban mucho más de lo que importaban. Los EE.UU. recibían también un

gran flujo de recursos financieros del resto del mundo capitalista, constituidos por firmas de préstamos y beneficios de inversiones. Además de esto, muchos países mantenían sus reservas de divisas en dólares, considerado la moneda más convertible del mundo, de modo que la mayor parte del oro, que es la reserva REAL para las transacciones internacionales, era mantenido en los cofres del Tesoro americano.

Pero, como lo que es un boom no siempre dura, esta situación cambió. El Japón y los países del MCE, a medida que reconstruían sus economías (muchas veces con el auxilio de capitales americanos), pasaron a competir con los EE.UU. en los principales mercados, aprovechando de una cierta superioridad tecnológica (que proviene del hecho de que sus plantas industriales son más recientes) y, sobre todo, del menor costo de su fuerza de trabajo. La competencia se agudizó principalmente en el mayor mercado de todos, en el mercado americano, que pasó a ser “invadido” por cantidades crecientes de automóviles europeos, máquinas fotográficas japonesas, tejidos y ropas de Hong Kong, etc., etc., sin que los Estados Unidos, enredados por las reglas que ellos mismos habían impuesto, pudieran defenderse. Surgió entonces una contradicción muy curiosa; las compañías norteamericanas al “exportar” productos de sus subsidiarias en el exterior para los EE.UU., desequilibraron la balanza comercial de su propio país. Los automóviles de la Ford inglesa exportados a los EE.UU. tenían el mismo efecto negativo sobre su balanza comercial, que los vehículos de Volkswagen o de Fiat.

Así, mientras el superávit de la balanza comercial americana se reducía hasta transformarse en lo contrario, en déficit, no tanto por una paralización de las exportaciones sino por el gran crecimiento de las importaciones, la exportación de capital por las compañías americanas aumentaba cada vez más. Los límites de este artículo no permiten entrar en las causas de esta tendencia, pero ciertamente que éstas se desprenden del menor dinamismo de la economía americana en comparación con el de otros países capitalistas. Sea como fuere, el crecimiento de las importaciones de mercaderías en relación con el de las exportaciones

sólo podía dar como resultado aquello: un grave y crónico desequilibrio en la balanza de pagos de los Estados Unidos.

El mayor mercado del mundo, el americano, fué invadido por productos japoneses y europeos.

Este déficit es ya antiguo y fue cubierto durante mucho tiempo mediante emisión de dólares, o sea, un endeudamiento creciente de los EE.UU. con el resto del mundo. Este endeudamiento fue llevado hasta el punto en que el crédito se agotó. Varias naciones, Francia al frente, pasaron a cobrar la deuda, esto es, a cambiar sus dólares por oro. El oro pasó así a fluir, en cantidades cada vez mayores, de los EE.UU. a los países del MCE, hasta que las reservas americanas descendieron a un nivel tan bajo que ya no podían sostener la convertibilidad del dólar. En estas condiciones el dólar fue devaluado, en relación al oro, en 1971 y nuevamente este año. Cada devaluación del dólar significa que los acreedores de los EE.UU. —es decir, los gobiernos y particulares que poseen dólares— pierden una parte del valor real de sus créditos. El Brasil, por ejemplo, que posee el equivalente a más de 4 billones de dólares de reservas cambiarias, buena parte de ellas en dólares, perdería 10 o/o de este total si deseara usar estas reservas para adquirir bienes o servicios en los demás países (Japón, MCE, etc), que no acompañaran la devaluación del dólar. La pérdida sería de apenas 3 o/o en relación al cruzeiro, lo que en verdad es sólo hipotético, ya que nunca se usan reservas cambiarias para adquirir mercaderías en el mercado interno.

El fondo de la crisis del sistema monetario internacional se encuentra por lo tanto, en la falla del aparato liberal creado en Bretton Woods e implementado vigorosamente por el GATT y por el FMI. Este aparato de reglas de procedimiento, que debería llevar a la corrección automática de los desequilibrios en los pagos internacionales, en la práctica lleva a su perpetuación. Los primeros en sentirlo fueron los países subdesarrollados, que se vieron obligados a cubrir el déficit de sus balanzas de pago con una importación masiva de capital extranjero. Cuando la capacidad de endeudamiento de estos países se agotó, su desarrollo se estancó por el llamado "estrangulamiento externo", o sea, por la incapacidad de continuar importando bienes de capital esenciales a la economía, puesto que sus cuotas de divisas estaban excesivamente comprometidas con los servicios de la deuda externa, con las remesas de ganancias y de "royalties" con importaciones supérfluas contra las cuales estaba prohibido discriminar, etc. La reacción de algunos de estos países, cuyos gobiernos acabaron por intervenir enérgicamente en las transacciones con el exterior, fue la de imponer controles cambiarios o sistemas de tasas múltiples de cambio (como lo hizo Brasil entre 1953 y 1961), lo que llevó a graves choques políticos con el FMI, donde predominaba la llamada "ortodoxia" financiera —que expresaba en el fondo, la ideología de las grandes compañías privadas. La ironía de esta situación es que ahora los propios Estados Unidos no consiguen atenerse a los compromisos asumidos con el GATT y el FMI. En 1971, cuando Nixon impuso la sobretasa del 10 o/o a las importaciones americanas violó frontalmente las reglas de Bretton Woods al levantar de modo unilateral la barrera tarifaria al comercio.

LA LUCHA POR EL MERCADO

Los EE.UU. sólo pueden rescatar su deuda con el resto del mundo, mediante la venta de mercancías. Del mismo modo, para impedir que esta deuda crezca, es preciso que exporten menos capital y sobre todo, que importen menos mercancías. Pero sucede que sus principales acreedores quieren continuar vendiendo a los EE.UU. más de lo que ellos compran. Es en esta contradicción que se encuentra el meollo de la crisis. Se trata de la lucha por el dominio del mercado mundial. Los EE.UU. exigen la revaluación de las monedas de los países que tienen superávit en la balanza de pagos —básicamente el marco y el yen— lo que mejoraría las condiciones competitivas de las mercancías americanas frente a las alemanas y japonesas. Pero esta mejora no se restringiría a las mercancías americanas, beneficiando también a todos los demás competidores cuya moneda no fuese revaluada, pues solamente sería elevado el precio de las mercancías alemanas y japonesas, en la proporción en que hubiera sido fijada la revaluación de sus monedas. El efecto de la revaluación del marco y del yen sería así, reducir las exportaciones de Alemania Occidental y de Japón, cuyas importaciones aumentarían ya que los precios de los productos importados bajarían en aquella misma proporción. En suma, los Estados Unidos reequilibrarían su balanza de pagos, es decir, comenzarían a rescatar su deuda vendiendo más y comprando menos, a Alemania y al Japón, Inglaterra, Francia, Italia, etc. tendrían posibilidades de hacer lo mismo.

Es claro que esta solución no conviene a Alemania Occidental ni al Japón, que prefieren que los EE.UU. devalúen el dólar. Esto bajaría apenas el precio de las mercancías americanas, suponiendo que las monedas de los demás países no acompañaran al dólar, o que dejara inalterada la posición de Alemania y de Japón frente a los demás competidores. Esta solución no interesa a los EE.UU. porque tendrían que arreglar la situación de su balanza de pagos aumentando sus ventas a todos los otros países y disminuyendo sus importaciones de ellos, en lugar de descargar el peso del arreglo sólo sobre sus principales competidores. Políticamente, la devaluación del dólar granjearía más enemigos para los EE.UU., que tendrían que dejar de atender a numerosos países-clientes, cuando, a su modo de ver, el origen del desequilibrio está en el superávit de las balanzas alemana y japonesa.

Los cambios en las tasas cambiarias son decisiones eminentemente políticas, y no hay, en las instituciones internacionales, como el FMI, ningún mecanismo que permita reconciliar tales contradicciones.

De acuerdo con la teoría ortodoxa, ahora errónea, correspondería a los EE.UU. valorizar internamente el dólar, provocando una deflación en su economía, lo que automáticamente reduciría las importaciones, que resultarían más caras que las mercancías americanas, y elevaría las exportaciones. Sin embargo, después de la depresión económica provocada por la política antiinflacionaria de Nixon en 1970-71, quedó

claro que este camino representa un suicidio político. De ahí la adopción de las medidas heterodoxas en agosto de 1971: tasa adicional sobre las importaciones, congelamiento de precios y salarios, etc.

Una situación irónica para los EE.UU.: actualmente son ellos los consiguen seguir las reglas liberales que antes defendían.

Dado el impase, la crisis en la balanza de pagos americana prosigue, lo que significa que el volumen de dólares poseídos por acreedores extranjeros continúa aumentando. En intervalos cada vez menores, estos acreedores, que son muchas veces grandes compañías, especulan contra el dólar aprovechando de la virtual insolvencia de los EE.UU.

Esta especulación está dirigida a "favor" del marco y del yen, cuya revalorización procuran evitar sus respectivos gobiernos, adquiriendo billones de dólares. Pero la resistencia de estos gobiernos tiene límites ya que están obligados a expandir la masa circulante de marcos y de yens; los cuales, si fueran gastos, representan grave amenaza inflacionaria. Consecuentemente, los especuladores acaban siempre ganando. En 1971, el marco y el yen fueron revaluados y el dólar devaluado. Este año, hasta el momento, el dólar volvió a ser devaluado. Además de eso, el Japón está tratando de abrir más su mercado interno a las exportaciones americanas, para apaciguar a los EE.UU., y también dejar flotar el yen, es decir, permitir su revaluación de hecho, al dejar el gobierno de adquirir dólares.

lución de hecho, al dejar el gobierno de adquirir dólares.

Pero ésto no es el fin de la crisis. Las alteraciones cambiarias ocurridas, no eliminan el desequilibrio de los pagos internacionales, aun cuando puedan evitar que éste se agrave. Y es que los otros factores del desequilibrio, no monetarios sino reales, continúan actuando.

La economía americana continúa sobrecargada por gastos improductivos, sobre todo de carácter militar. Por otro lado, su comercio con los países no capitalistas, continúa limitado por una serie de restricciones políticas, lo que debilita su posición en el mercado mundial. En la conquista del mercado chino, el Japón les tomó la delantera, lo mismo que hizo Alemania en cuanto al mercado de la Unión Soviética. Finalmente, las grandes compañías americanas no pueden dejar de exportar capital, en la medida en que ven amenazada su posición hegemónica en otros países —como por ejemplo Brasil— por el avance de las compañías europeas y japonesas. Los ambiciosos planes de inversión de la Mitsubishi y de la Fiat, en el Brasil, revelados hace unas semanas, ilustran este avance.

De este modo, la crisis que sólo tendría solución en el plano político, deberá continuar, pues es constantemente alimentada por la rivalidad entre las grandes compañías que se mueven en el marco de la política monetaria y cambiaria de los Estados Unidos a que pertenecen. En este sentido, llamarlas multinacionales es más falso que nunca.

ARBITRARIA DEPORTACION DE UN DIRIGENTE OBRERO

En prensa este número, los trabajadores peruanos han sido golpeados por la arbitraria deportación del c. Hernán Cuentas Anct, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Mineros de Cuajone, en las precisas circunstancias en que trataba de obtener atención de las autoridades de Trabajo para las reivindicaciones de los trabajadores de construcción civil de cuajone, cuyos problemas son similares al de los cc. trabajadores de construcción civil de Marcona. Esta deportación del c. Cuentas de la cual el país no ha sido oficialmente informado ni explicado, se suma a otros actos del régimen militar en contra de las reivindicaciones de los trabajadores peruanos, a las reiteradas amenazas de limitar el derecho de huelga, a la suspensión de garantías en la ciudad de Moquegua donde una de las exigencias era el regreso de Cuentas, y a las declaraciones de varios Ministros sobre la intención del régimen de ligar los salarios de los trabajadores al aumento de los beneficios del capital.

Frente a esta escalada represiva contra los trabajadores y contra sus más combativos dirigentes, es indispensable fortalecer la cohesión organizada del movimiento obrero y del movimiento popular en general, exigiendo movilizadamente el regreso de los dirigentes obreros y políticos revolucionarios deportados, la cesación de todos los actos represivos contra los trabajadores y las organizaciones de la izquierda socialista revolucionaria, así como de todo intento de recortar las conquistas democráticas de los trabajadores como el derecho de huelga. No son las actitudes burocráticas y conciliadoras, sino la capacidad de organización y de movilización de los trabajadores peruanos en defensa de sus reivindicaciones propias y de los demás sectores populares, y en defensa de sus dirigentes, lo único que puede parar la embestida del corporativismo represivo.

Sociedad y Política se solidariza con las protestas de toda la clase trabajadora contra estos actos represivos, y con el reclamo del inmediato regreso del c. Cuentas.

LA POLÍTICA Y EL COMENTARIO

¿QUE SIGNIFICA LA CTRP?

a

menos de dos meses de hacer su primera aparición pública y a menos de 15 días de su Congreso Constituyente ("Túpac Amaru"), la Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Trabajo.

Creada a imagen y semejanza del Gobierno, la organización de la CTRP empalma perfectamente con la organización burocrática del actual Estado burgués mediante sus Ministerios así como las regiones de SINAMOS, las cuales a su vez coinciden con las regiones militares.

Precedida su reconocimiento oficial por una millonaria campaña publicitaria, este instrumento de manipulación de la clase obrera proclama todos y cada uno de los temas ideológicos fundamentales de este gobierno, cuyo común denominador es el "participacionismo" como alternativa explícita a la acción clasista autónoma y revolucionaria.

¿Qué papel viene a jugar la CTRP dentro del panorama actual de la lucha de clases? Habiéndose demostrado plenamente la ineptitud del SINAMOS para penetrar al interior del movimiento sindical el Gobierno no podía dejar de esforzarse al máximo por cortar su autonomía de clase. Por ello crea a esta Central, sobre la base de la Federación de Pescadores del Perú (FPP) más un conjunto heterogéneo y disperso de pequeños sindicatos sin mayor existencia organizativa propia.

Gran parte de estos sindicatos están entre el sector comercio, minoristas, ambulantes, vendedores de periódicos; y no se encuentran más que contados sindicatos pertenecientes a ramas o empresas industriales importantes. Es decir que la CTRP está reclutando sus bases de la parte menos políticamente desarrollada de la clase obrera, y de algunos sectores de la pequeña burguesía empobrecida. Su fuerza laboral está centrada en la FPP, pero su fuerza política es la que le trasmite el Gobierno. Muchos de sus sindicatos han sido legalizados a través de la CTRP luego de más de 10 años y hasta 25 años de fundados, lo cual es una clara expresión de su inoperancia. Otros han sido creados ad-hoc o en todo caso muy recientemente y su ingreso a la central gobiernista indica su inexperiencia política.

Al respecto, la actitud de los dirigentes, expresada en diversas publicaciones, coincide con el Gobierno: los sindicatos de la CTRP no intervendrán en política, rechazan determinadas acciones sindicales por su carácter "político" y en contraposición se declaran nacionalistas y participacionistas en un proceso en cuya marcha no "participan". Un rasgo más: los dirigentes de la CTRP no podrán formar parte de partidos políticos.

Es obvio entonces que la tarea que esta Central debería cumplir sería la de "despolitizar" al movimiento sindical para que haga la política del Gobierno.

Estando completamente burocratizada y no poseyendo ninguna autonomía el papel de la CTRP no es otro que el de servir de instrumento de chantaje a la CGTP en una eventual mesa de negociaciones para la formación de una Central Unica. Pero en esta mesa la CTRP no será otra cosa que el Gobierno mismo disfrazado de clase obrera. No es, pues, un organismo que compita con la CGTP, sino antes bien un freno al desarrollo y a la articulación de una línea de lucha clasista y autónoma.

Pero es necesario remarcar que no es el primer intento del Gobierno en este aspecto, ni tampoco será el último. ¿Cuándo saldrá la ley sindical?

LA FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS Y METALURGICOS DEL PERU Y LA CGTP

La desafiación de la Federación Nacional de Mineros y Metalúrgicos del Perú (FNTMMP) de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), adoptada en el Plenario Nacional de Emergencia, realizado en Lima, los días 17 y 18 de febrero, expresa la crisis por la que atraviesa la dirección del movimiento sindical.

Según Víctor Cuadros y Manuel Orrego, secretario general y de Organización, respectivamente, de la FNTMMP, dicho acuerdo se tomó por la línea "conciliadora y entreguista" que la actual dirección ha impuesto a la CGTP.

La FNTMMP agrupa alrededor de 45,000 trabajadores mineros fundamentalmente del sur (Toquepala y Marcona). La participación de los mineros y metalúrgicos del Centro es limitada. Esta Federación ha sido el principal soporte de la CGTP. En este sentido, la desafiación de la FNTMMP constituye un duro golpe a la CGTP y a la clase obrera. En primer lugar acentúa la división del movimiento obrero organizado. Esta fragmentación se expresa en la debilidad de los sindicatos para luchar por mejores salarios y por condiciones de trabajo adecuadas. En segundo lugar genera el aislamiento de los sectores más avanzados del proletariado del resto de las clases explotadas.

Por esta razón los periódicos y revistas de la derecha han dado tanta publicidad a los acuerdos del último Plenario Nacional de la FNTMMP. Dichos periódicos que sólo dedican la página policial para comentar los asuntos sindicales, no han regateado espacio para difundir las acusaciones de los divisionistas.

Se contribuye así a entregar al movimiento obrero a la derecha. Divididos y aislados serán fácil presa de los dirigentes oportunistas, impidiéndose de esta manera el desarrollo de un sindicalismo con una auténtica orientación clasista, que no sea ni apéndice del gobierno ni de la burguesía.

Frente a la CTP —que sigue en proceso de descomposición— a la CNT —que se mantiene sin crecimiento— y a la CTRP —que reúne a todo tipo de oportunistas aventureros—, la CGTP aglutina a lo más sano y avanzado del proletariado. Sin embargo, la dirección burocrática y entreguista, impide su crecimiento.

to y fortalecimiento. Por lo tanto, no se trata de que los sectores más conscientes de la CGTP (como es el caso del proletariado minero) se desafilie de la central, aislándose del movimiento obrero, sino de luchar por una central sindical que sea capaz de asumir una orientación clasista, que no esté al servicio del gobierno ni de la burguesía. Asimismo, se tiene que combatir por una central en donde exista la más amplia democracia interna.

Una dirección del movimiento obrero que no esté ligada a las masas, sólo puede conducir al fraccionamiento y al aislamiento de la clase trabajadora. La actual coyuntura económica y política exige un movimiento obrero organizado, capaz de defender sus intereses de clase. Esto sólo se puede conseguir centralizando las luchas populares alrededor de la CGTP, siempre que los sectores más avanzados (afiliados y no afiliados a dicha central) sean capaces de desplazar a la actual dirigencia revisionista; eliminando el burocratismo y el sectarismo, ligándose a las masas y ofreciendo una línea clasista a las luchas de los trabajadores. Tareas que son inseparables de la lucha por la democratización de la conducción interna de la Central.

La desafilación de la FNTMMP constituye un retroceso en la lucha de los trabajadores por constituir una central clasista. La división y el aislamiento sólo pueden servir a los enemigos de los trabajadores.

RECORTES AL DERECHO DE HUELGA.

Desde principios de año los trabajadores particulares y estatales han exigido a través de las reivindicaciones salariales y de la realización de huelgas el aumento de sus remuneraciones y el logro de mejores condiciones de trabajo. En el caso de los trabajadores del Estado estas exigencias se han agudizado por el hecho de que sus remuneraciones permanecían prácticamente congeladas desde 1966, habiendo disminuido notoriamente su poder de compra, con la consiguiente degradación de sus condiciones de vida.

Asimismo, la subida de los precios y la carestía de los artículos de primera necesidad han afectado adversamente a los trabajadores de la ciudad y el campo, acentuando sus reivindi-

caciones salariales que buscan defender sus niveles de consumo. Los estragos originados por la inflación son claramente percibidos por los obreros, los empleados, y los campesinos aunque el Gobierno intente demostrar, al consumidor, mediante el índice de precios, que éstos han mantenido una relativa estabilidad, y que por lo tanto, no deben presentarse reivindicaciones excesivas. Esto se basa en la consideración de los precios oficiales, que subestiman fuertemente el alza de los productos de primera necesidad. Es así que según la Oficina Nacional de Estadística y Censos el precio de la carne de res habría disminuido de S/. 50.31 en enero de 1972 a S/. 35.16 en octubre del mismo año (cf. ONEC "Índices de Precios al Consumidor, Lima Metropolitana-Callao", Oct. 1972, p. 12).

Ante el endurecimiento de las reivindicaciones de los trabajadores, el Estado trata de contener y disminuir las presiones salariales, ya que una redistribución del ingreso en beneficio de los sectores populares entra en conflicto con la realización de sus planes de inversión, con la capitalización del sector estatal y con las necesidades de lograr un acuerdo orgánico con la burguesía imperialista, que implican el mantenimiento de altas tasas de ganancia para el capital imperialista.

Es así cómo a nombre de los objetivos de la "revolución peruana" el Gobierno intenta contener las presiones salariales, deformando ante la opinión pública las legítimas demandas de los trabajadores y fomentando la división entre sus filas a través de la intervención corporativista del SINAMOS y de la CTRP.

Ante la resistencia de los trabajadores, el Gobierno toma una actitud más represiva declarando ilegales a las huelgas (Construcción Civil, trabajadores de J.J. Camet de Marcona) y procediendo inclusive a la militarización de las empresas en conflicto (CPV), ordenándose la reanudación forzosa del trabajo bajo pena de ser juzgado por el fuero militar.

La difícil situación económica del Gobierno determinará la acentuación de esta escalada represiva, que busca recortar el derecho a la huelga de los trabajadores y controlar sus organizaciones sindicales, propiciando la formación de un sindicalismo "participacionista" (CTRP), que controle y contenga las reivindicaciones populares.

Esta política merece el unánime repudio de los trabajadores y torna cada día más urgente la tarea de defender y desarrollar la autonomía de sus organizaciones sindicales y políticas, al mismo tiempo que exige la defensa militante del derecho a la huelga, como una de las conquistas legítimas e irrenunciables de los trabajadores.

LA REGLAMENTACION DEL DERECHO DE HUELGA

Las recientes declaraciones del Ministro de Trabajo Pedro Sala Orozco a los socios de ADV y del Ministro Francisco Morales Bermúdez señalando que el derecho de huelga será reglamentado y que los aumentos de salarios deben ceñirse al incremento de la productividad, constituye un paso más en la escalada antilaboral del régimen militar que trata de someter a los trabajadores a los intereses de aumento de ganancias de los capitalistas.

El Ministro de Trabajo expresó que la reglamentación contemplaría las obligaciones de los trabajadores y, principalmente, de los dirigentes sindicales. "Es indispensable que se determinen las responsabilidades de los dirigentes cuando empujan a los trabajadores a huelgas que carecen de justificación alguna", dijo Sala Orozco definiendo en estos términos la política laboral del régimen.

Según el Ministro las huelgas tendrían como causa la "agitación" de los dirigentes y no el interés de los trabajadores por conseguir las condiciones materiales mínimas para poder sobrevivir.

En realidad, lo que se busca es garantizar y aumentar las ganancias de los capitales, impidiendo o limitando las mejoras salariales de los trabajadores. Al buscar recortar el derecho de huelga se persigue someterlos a una mayor explotación, para que la burguesía pueda ganar más.

La reglamentación de la huelga, para impedir el aumento de los salarios ha sido exigida insistentemente por los representantes de la burguesía. Es por eso que sus voceros "El Comercio" y "La Prensa" han batido palmas ante las declaraciones del Ministro de Trabajo.

Por otro lado, sin embargo, los trabajadores han expresado -por ejemplo el Sindicato de Obreros Cerveceros Backus y Johnston- su repudio a cualquier intento de recortar el derecho de huelga.

El Gobierno y la burguesía convergen plenamente en una política contraria a los intereses del proletariado. Por eso, frente a este intento de limitar el derecho de huelga -derecho ganado con multitud de luchas y sacrificios por el proletariado- los trabajadores deben movilizarse para defenderlo a través del reforzamiento de la autonomía de sus organizaciones sindicales y políticas. El derecho de huelga libre de toda reglamentación e intromisión, constituye una de las conquistas fundamentales del Movimiento Obrero, cuya intransigente defensa es el deber de todos los trabajadores de la ciudad y el campo

Las nuevas Perspectivas de la clase obrera

ANIBAL QUIJANO

E

El proletariado peruano presenta hoy día una situación contradictoria. Algunos de sus sectores más importantes y mejor organizados, desarrollan luchas cada vez más profundas, y avanzan hacia una politización socialista revolucionaria. Sin embargo, los esfuerzos por ampliar y consolidar este proceso de autonomización política del proletariado frente a la burguesía, frente al Estado burgués y a la pequeña burguesía reformista, no han tenido hasta ahora un desarrollo suficiente.

La centralización sindical y política de la clase bajo una dirección socialista revolucionaria no ha cristalizado todavía, a pesar del avance de la influencia de estas corrientes en el seno de la clase. La CGTP, que nació de prolongadas luchas de las bases obreras, recayó bajo el control del reformismo obrero.

Las condiciones objetivas para la conquista de esta autonomía sindical y política de la clase obrera, han ido madurando en el curso de las últimas décadas, por la expansión y diversificación de la base capitalista de la economía, la homogeneización relativa de la burguesía y de sus relaciones con el proletariado, la consolidación del carácter burgués del Estado y el cambio de sus funciones. Todo lo cual aparejó la expansión numérica del proletariado, su diversificación interna, el desplazamiento de sus centros hegemónicos desde sus núcleos tradicionales hacia los nuevos, la emergencia del proletariado como la clase central dentro del conjunto de los explotados del país, y la quiebra del predominio de las corrientes reformistas populistas, pequeño burguesas, como el APRA, en el seno del movimiento obrero.

No obstante, es justamente en el momento en que estos nuevos condicionamientos comienzan a manifestarse claramente, que surge un régimen militar que reformando las bases del capitalismo imperialista y reajustando la estructura de poder en el país, conduce a éste hacia una nueva forma de integración en el orden capitalista internacional.

Emergiendo de la bancarrota política de la burguesía y aprovechando de la derrota coyuntural de las movilizaciones populares, por las sangrientas represiones de toda una década, este régimen confunde a los

trabajadores con una ideología de conciliación de clases, mientras va estableciendo las bases de un sistema de control político corporativista del Estado burgués sobre las masas.

Frente a esta situación, las características ambivalencias y vacilaciones de la dirección obrera reformista de la CGTP, frente al actual régimen, han permitido que se produzca un creciente distanciamiento entre la dirección y las bases más importantes de esta central, llegando hasta la desafiliación de la más importante de estas bases, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos.

Así se llega a una situación que amenaza con una aún mayor desarticulación sindical y política de la clase, lo que puede permitir al régimen la consolidación de sus intentos corporativistas, y pasar a la ofensiva abierta contra el nivel de vida y las conquistas democráticas de los trabajadores.

Esto ocurre en el momento mismo en que para enfrentar las crecientes dificultades económicas del país, los trabajadores requieren justamente una mayor cohesión organizativa y una mayor claridad política, para defender su nivel de vida, sus conquistas democráticas, y para desarrollar sus luchas revolucionarias por el socialismo. Y, por eso mismo, el régimen requiere a su vez acentuar su control sobre los trabajadores, para hacer cargar a éstos los costos de estas dificultades económicas.

Frente a esta situación, los núcleos revolucionarios más esclarecidos del proletariado tienen la tarea de hacer tomar conciencia a sectores amplios de su clase, de las posibilidades y de las amenazas políticas que se presentan a ella, planteando bases programáticas y organizativas para el desarrollo de un movimiento sindical y político autónomo y revolucionario, capaz de plantear una alternativa socialista al país.

Q

FIN DEL PREDOMINIO
PEQUEÑO BURGUES EN EL
MOVIMIENTO OBRERO

Quiénes hayan asistido a los últimos mítines del APRA, habrán podido observar un hecho decisivo: el proletariado no está más presente. Este hecho tiene para los trabajadores peruanos una significación histórica, la del fin del predominio del reformismo pequeño burgués en el liderazgo del movimiento obrero.

COYUNTURA

COYUNTURA

COYUNTURA

COYUNTURA

A pesar de que la ideología pequeño burguesa está presente en numerosos sectores del proletariado, es también notorio que la capacidad orgánica del APRA y de los movimientos equivalentes, pero menores, de controlar al grueso del movimiento obrero, se ha reducido hoy día a la existencia de una camarilla burocrática. Sólo puede ejercer algún control en reducidos sectores atrasados del proletariado-urbano en algunos sectores tradicionales de actividad económica (como algunas fábricas textiles y de alimentos), en ciertos sectores del proletariado rural ahora cooperativizado, y en algunos sectores de capas medias asalariadas.

Es indispensable para el desarrollo de la conciencia política del proletariado, esclarecer las condiciones históricas que hicieron posible la subordinación ideológica, política y sindical del proletariado al liderazgo de la pequeña burguesía reformista populista, así como las condiciones que llevaron a la crisis y terminación de esta dependencia política de la clase obrera.

LAS CONDICIONES HISTÓRICAS DE LA FORMACIÓN DE LA CLASE OBRERA

Las relaciones de producción capitalistas sólo se establecen de manera estable y significativa, con la introducción de las inversiones imperialistas en los sectores agro-mineros, principalmente, a principios del siglo. El modelo de acumulación del capitalismo imperialista en este período, requería una articulación orgánica entre la producción de plus-valía en los enclaves extractivos y la extracción de excedentes en el sector pre-capitalista de la economía.

Se produce de esta manera una coalición de intereses entre la burguesía imperialista, los incipientes núcleos de burguesía capitalista peruana, la burguesía mercantilista y los terratenientes señoriales. El orden de dominación política que emerge de esta alianza de intereses, es de carácter oligárquico. Dentro de este orden, el control del Estado se hace de manera monopólica por los sectores nativos dominantes.

El Estado en esas condiciones cumple una función básica: la de garantizar el mantenimiento de ese modelo de acumulación capitalista imperialista y la extracción de excedentes en la economía agrario-mercantil precapitalista. Esto es, la explotación del

proletariado que se va formando en los enclaves agro-extractivos, en los incipientes núcleos industriales, y la explotación de la abrumadoramente mayoritaria masa campesina.

De esa manera, el control que los sectores dominantes nativos ejercían sobre el Estado, supone necesariamente no sólo el carácter oligárquico de ese Estado, sino también su carácter dependiente de los intereses de la dominación imperialista. Pero, en la medida en que los núcleos de burguesía capitalista peruana eran todavía muy incipientes, sobre todo porque los principales recursos de producción que son incorporados al área capitalista están desde el comienzo bajo el control del capital imperialista, la distribución de poder dentro del Estado se hace en favor del dominio de los sectores burgueses que ejercen la representación de los intereses de las empresas imperialistas y de los sectores de burguesía mercantilista y de terratenientes señoriales, que de ese modo ejercen un poder político regional y local, al mismo tiempo autonomizado y articulado al poder central del Estado-Nación.

Este proceso se establece y se consolida en el curso de las tres primeras décadas de este siglo. El proletariado que se va formando en este proceso, se ubica en los enclaves de relaciones de producción capitalista imperialista, en la agricultura y la minería, ante todo, y sólo de manera muy secundaria e incipiente en las actividades industrial-urbanas, también bajo control del capital imperialista en su parte sustantiva.

En tales condiciones, el proletariado se va formando como clase, con un conjunto de características que corresponden a esas formas de explotación y de dominación. En primer término, es un proletariado básicamente agrícola y minero y sólo en muy segundo lugar, industrial-urbano. Esto, es, se trata en la práctica de un proletariado de tipo más bien preindustrial. Además como las relaciones capitalistas de producción se establecen en forma de enclaves, y en ramas de producción que no están entre sí orgánicamente articuladas, el proletariado respectivo aparece también en sectores sin articulación entre sí. Finalmente, como en ese momento la presencia de las relaciones de producción de tipo precapitalista abarca a la mayor parte de los trabajadores, el proletariado queda colocado en una situación muy claramente minoritaria respecto del campesinado y de otras capas dominadas, como el artesanado y la pequeña burguesía comercial del campo y de la ciudad.

Aparte de estas características estructurales económicas del proletariado en el período de su formación la situación de esta nueva clase se define también por

las características del modelo de dominación oligárquica que se establece. Mientras que en el terreno económico, el proletariado está sujeto a la explotación de la burguesía imperialista, ante todo, y de la burguesía capitalista peruana secundariamente, en cambio en el terreno político aparece sujeto a la dominación de una coalición de poder en que tienen presencia dominante sectores de burguesía capitalista peruana no-industrial, junto con la burguesía mercantil y los terratenientes señoriales: es decir una coalición no depuradamente capitalista.

Esta incongruencia entre la dimensión económica y la dimensión política en la situación estructural de clase del naciente proletariado, junto con sus propias, características internas ya señaladas, hará no viable una lucha política exclusivamente antiburguesa, anticapitalista.

Paralelamente, emergían capas medias que procedían de la desintegración de importantes sectores de terratenientes señoriales, como consecuencia tanto de los efectos de la guerra con Chile, como de la invasión imperialista sobre sus recursos productivos. Estos sectores medios estarán así incapacitados para integrarse en la coalición oligárquica, y por consecuencia tenderán a elaborar una ideología de modernización política y económica del país sobre bases capitalistas nacionales, enfrentándose de este modo a la coalición oligárquica que dominaba el Estado y al imperialismo entendido como dominación de extranjeros.

Sectores artesanales provenientes del mercantilismo son arrastrados hacia la proletarianización y por eso tenderán a asimilar la influencia ideológica de las corrientes anarquistas y anarco-sindicalistas, ejerciendo durante un breve pero intenso momento, un liderazgo decisivo en las primeras luchas del proletariado urbano.

La penetración del capitalismo imperialista y su articulación de intereses con los terratenientes señoriales producirá un proceso de masiva reconcentración de la propiedad de la tierra, que significó sobre todo, el despojo de las tierras de las comunidades indígenas y de los pequeños propietarios individuales. Esta situación empujará a estos sectores campesinos a continuas luchas con los terratenientes, y de este modo también contra la dominación oligárquica, siendo sangrientamente reprimidos a lo largo de todo este período.

La amplitud de la invasión imperialista sobre todos los recursos importantes de producción del país determinará que la burguesía peruana no pueda desarrollarse. Existirá de hecho reducida al control de lo que el imperialismo le ha dejado, en la tierra, en las minas y en la industria, y por entero subordinada a los mecanismos comerciales y financieros del capital imperialista. Esta precariedad de las bases de su poder le impedirá constituirse como una clase efectivamente nacional, y por lo tanto incapaz de regatear con la burguesía imperialista el dominio nacional. Es decir no podrá ser nacionalista y todavía menos anti-imperialista.

Estas tendencias se afirman en el curso de la tercera década. En el marco de estas condiciones, el proletariado peruano enfrenta una disyuntiva política precisa. De un lado, la posibilidad de constituirse en una clase políticamente autónoma y acaudillar un frente de clase antioligárquico y antiimperialista, en un pro-

ceso que conduzca a una perspectiva socialista. Implícita en esta opción estaba la orientación de las luchas del campesinado enmarcadas dentro de esta perspectiva hacia el socialismo. De otro lado, la posibilidad de formar parte de un frente de clases antioligárquico y nacionalista, subordinado al liderazgo de los sectores medios emergentes, en cuyo caso la perspectiva socialista era diluida en el populismo reformista.

Estas dos alternativas fueron planteadas en el curso de esta década por José Carlos Mariátegui y Haya de la Torre, respectivamente. Durante un primer momento el proletariado opta por la alternativa señalada por José Carlos Mariátegui, bajo cuya inspiración se realiza el primer esfuerzo de centralización sindical nacional del proletariado con una orientación revolucionaria. Sin embargo, la temprana muerte de Mariátegui frustró la posibilidad de que eso fuera respaldado por una centralización política autónoma de la clase, con una ideología socialista revolucionaria.

En cambio, el movimiento reformista populista encabezado por el APRA logró, por la energía de sus luchas a partir de la crisis del treinta, atraer y subordinar al proletariado a su liderazgo. A eso contribuyó el hecho de que la dirección del Partido Comunista, bajo la hegemonía de la Tercera Internacional, abandonará las tesis centrales de Mariátegui sobre el carácter de la dominación imperialista y de la burguesía peruana, adoptando finalmente en la práctica las mismas bases teóricas del APRA de estos años.

De esta manera, el Partido Comunista pasa a representar una tendencia de reformismo obrero que compete con el reformismo pequeño burgués representado por el APRA, que lleva en la práctica a una alternativa política no sustantivamente diferente. En estas condiciones era natural que el Partido Comunista no pudiera ofrecer una alternativa propia para el desarrollo político autónomo de la clase obrera y que ésta se orientara mayoritariamente a las filas del APRA, quedando el Partido Comunista en una situación totalmente minoritaria.

Además, en lugar de profundizar las luchas antioligárquicas y nacionalistas del APRA de estos años, el Partido Comunista rivalizó permanentemente con él incluyendo alianzas con regímenes oligárquicos. De este modo el APRA estuvo en mejores condiciones de reforzar su liderazgo sobre el grueso del proletariado.



LA CONDUCCION POPULISTA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Como consecuencia de la crisis del treinta y de la fuerza del movimiento popular antioligárquico, la coalición oligárquica se ve obligada a mantenerse en el poder por medio de regímenes militares y civiles ultrarepresivos. Ello va a determinar la disolución en 1932 de la central revolucionaria creada por Mariátegui tres años antes. Al mismo tiempo, la represión sobre el movimiento popular encabezado principalmente por el APRA, permitirá a este partido mantener su liderazgo en las masas de trabajadores, porque la situación ponía en primer plano la lucha contra la

represión antioligáquica y dejaba en la sombra el problema de las limitaciones y contradicciones políticas del populismo reformista respecto de los intereses de la clase obrera.

Esa situación se mantendrá hasta el fin de la segunda guerra mundial. Durante este período y bajo los gobiernos de Benavides y de Prado, el Estado se va fortaleciendo y asume frente al proletariado una conducta a la vez represiva y paternalista. Así, se establece un conjunto de leyes sobre los beneficios sociales de los trabajadores y mecanismos legales de arbitraje estatal en los conflictos entre la burguesía y los trabajadores. De este modo, el movimiento obrero queda colocado en cierta forma en un tipo de relación clientelística con el Estado burgués oligárquico.

La conducción aprista sobre el movimiento obrero durante este período, consistió en una combinación de la lucha por las reivindicaciones gremiales y de la lucha populista anti-oligárquica. De esa manera, el grueso del movimiento obrero fue participante activo en las luchas políticas del país y no se restringió a sus luchas reivindicativas gremiales.

No obstante, sobre todo a partir de 1939, el APRA había comenzado un franco viraje político en relación al problema del imperialismo, bajo los impactos de la apertura rooseveltiana del New Deal. Y de la misma manera había ya agudizado su pendiente anti-comunista, aprovechando de los errores de la Tercera Internacional y de la línea del Partido Comunista Peruano durante la guerra, por su identificación con el browderismo y su política de unidad nacional con las burguesías frente al fascismo

El movimiento obrero peruano, a pesar de carecer de una central sindical nacional, pudo mantenerse activo tanto sindical como políticamente: en el plano sindical, alrededor de la Federación textil y en los frentes de lucha azucareros y mineros; y en el plano político bajo las banderas populistas. Es decir el APRA proporcionaba en la práctica las bases de la centralización tanto sindical como política de las luchas del movimiento obrero.

En los últimos años de la guerra, el movimiento obrero está en pleno desarrollo y movilización, y reaparece en las calles en combativas manifestaciones. En 1944, se organiza la Confederación de Trabajadores del Perú, bajo dominio aprista y con la participación de dirigentes sindicales comunistas.

Al terminar la guerra, esta reorganización del movimiento obrero, eje del ascenso de masas es la base del éxito aprista en la formación del Frente Democrático Nacional, cuyo triunfo electoral permitirá la vuelta del APRA a la legalidad. Desde su nueva posición influyente en el Gobierno, el APRA pudo fortalecer la CTP y extender la sindicalización en el país, con lo que el predominio aprista sobre el movimiento sindical quedó fortalecido.

Sin embargo, el abandono por la dirección aprista de las posiciones más radicales de su nacionalismo inicial, así como su ahora fortalecido anti-comunismo, han afectado también a fondo su inicial vocación anti-oligárquica radical. Por estas razones pronto se pondrán en claro, en la política aprista 45-48, estas limitaciones básicas, en beneficio de una postura reformista cada vez más contradictoria y limitada, así como dentro de una vertiente cada vez más pro-imperialista.

Como consecuencia, en estos años ya una parte del proletariado comienza a mostrar sus primeros signos de descontento y sospecha frente a la dirección aprista, mientras simultáneamente los núcleos más radicales del partido se distancian de la dirección central. Ese proceso culmina en el intento revolucionario del 3 de octubre de 1948 cuya derrota facilitó el golpe militar de Odría, que canceló este período.

DESARROLLO DEL PROLETARIADO Y LA QUIEBRA DEL PREDOMINIO POPULISTA EN EL MOVIMIENTO OBRERO.

Las incipientes tendencias de tecnificación del capitalismo imperialista de base semicolonial y los primeros signos de crisis de los sectores precapitalistas en la economía peruana, han ido generando el comienzo de una progresiva liberación de mano de obra que migra desde el campo hacia las ciudades, formando un mercado de trabajo y de consumo urbanos, cada vez más importante. Estas tendencias se intensificarán y acelerarán a partir de 1950, por la ampliación de la penetración imperialista y la correspondiente ampliación de la base exportadora del país, a favor del auge de las exportaciones minerales durante la guerra de Corea, y con la implantación de la industria de harina de pescado inmediatamente después. Los mayores recursos de que disponen así la burguesía y el Estado, permitirán la iniciación de rápidos cambios en el carácter de la dominación imperialista, por el establecimiento bajo su control principal, de un aparato industrial urbano destinado básicamente a la producción industrial de sustitución de importaciones.

Las consecuencias de este proceso de diversificación profunda del capitalismo imperialista, en la aceleración de la crisis de los sectores precapitalistas de nuestra economía, se expresarán también en la modificación de la estructura de clases y de las luchas de clases, en la modificación de las bases sociales de Estado, así como en el cambio de las funciones de este Estado.

1. — Los cambios en el proletariado

Por lo que toca al proletariado, este proceso llevará tanto a su expansión numérica, al cambio de sus características internas, como al cambio de sus relaciones de clase frente a las demás clases y al Estado.

Así, en primer término, el establecimiento de nuevas empresas industriales, con organización y tecnología modernas, en el cemento, papel, siderurgia, metalurgia, ensamblaje, químico-farmacéutica, y la modernización y expansión de la textilera y de las industrias de alimentos y calzado dan lugar al surgimiento de un proletariado industrial numéricamente expandido y en el cual participan núcleos obreros enteramente nuevos.

La ampliación de la actividad minera, significa también la relativa expansión y modernización del proletariado minero. Paralelamente, el auge de la actividad pesquera y de fabricación de harina de pescado a lo largo de todo el litoral peruano, determina el surgi-

miento de un fuerte núcleo de proletariado en este sector.

La expansión de estas actividades industriales, mineras y pesqueras, implicará la rápida ampliación de otras actividades económicas urbanas y la extensión de la propia red de centros urbanos en el país. Como consecuencia, las actividades de construcción, de transporte, de energía, de comercio y de servicios de toda clase, se ampliarán diversificando la base capitalista de la economía, y en torno de cada una de estas actividades surgirá un vasto proletariado cuyo mercado de trabajo será inestable, pero que a pesar de eso se constituye como uno de los sectores más importantes de la clase.

Paralelamente, esta expansión, diversificación y fortalecimiento de la base capitalista de la economía del país, determinará la aceleración de la crisis y la desintegración de los sectores agrarios precapitalistas. Como consecuencia no solamente se producirá una masiva liberación de mano de obra que migra desde el campo a los principales centros urbanos y a las zonas rurales capitalistas, corriendo hacia su proletarianización, sea en su nivel activo, de reserva, o marginal. También, la expansión de relaciones capitalistas de producción en el campo, aunque errática y desigual entre diferentes zonas geográficas, irá engendrando dispersos núcleos de un nuevo proletariado rural, diferente del viejo proletariado rural en la agricultura de exportación.

De este modo, las características internas del proletariado van cambiando rápidamente. En lugar de ser como antes, —básicamente agrario— minero y sólo reducidamente industrial-urbano, el nuevo proletariado es ahora ante todo urbano-industrial y minero. Sus centros hegemónicos internos se desplazan por eso mismo, desde los núcleos textiles y azucareros, hacia los nuevos núcleos metalúrgicos y mineros.

Como por otro lado el establecimiento del nuevo polo urbano-industrial, va constituyéndose en un eje interno de articulación entre los diversos sectores económicos, el proletariado ya no aparece como antes desarticulado en enclaves semicoloniales, sino crecientemente vinculado entre sus diversos núcleos, siguiendo las mismas líneas en que se reordena la estructura económica del país. Esta nueva situación es además favorecida, por el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte que se van expandiendo, precisamente para responder a las necesidades de esta nueva estructura económica.

Todo este proceso ha convertido la base capitalista imperialista en el centro hegemónico de la economía peruana, ya no solamente a nivel tendencial, sino también a nivel de hecho constituido, para la descripción inmediata. Por eso, el proletariado como clase, con su base urbano-industrial y minera, se ha convertido en la clase hegemónica dentro del conjunto de los explotados y dominados del país.

2.- Los cambios en la burguesía.

La expansión y diversificación de la economía peruana, se realizó básicamente bajo el control del capitalismo imperialista. Por esta razón, los núcleos de burguesía peruana no solamente no han podido desarrollarse como una clase nacional, sino que por el contrario han ido quedando identificados con los intereses de la

burguesía imperialista, porque tienen una posición de socio menor en las mismas empresas que el imperialismo controla, y porque los que tienen empresas independientes, están sometidos a los mecanismos financieros, comerciales y tecnológicos de la burguesía imperialista.

Por lo tanto, cuando se habla de burguesía en el Perú hoy, hay que hablar de esta combinación de burguesía imperialista dominante y de burguesía peruana asociada y subordinada.

Esta burguesía así constituida, se ha diversificado también en sus intereses y, al mismo tiempo, las bases de poder de los grupos de burguesía agraria así como las bases de los grupos terratenientes señoriales, han ido reduciéndose y deteriorándose, al paso en que las bases del capitalismo imperialista han comenzado a combinar el modelo semi-colonial de acumulación con las formas de acumulación urbano-industrial.

La coalición dominante, en consecuencia, es cada vez más burguesa. Pero la persistencia de las bases semicoloniales, hace que no pueda llevar a cabo bajo su propio control, la erradicación final de las fracciones oligárquicas de esta coalición.

3.- Las capas medias

Este mismo proceso de cambio en la estructura económica, ha estimulado la expansión y la modificación de las capas medias. De un lado, el proceso de ampliación de las actividades estatales abrió un amplio canal para la emergencia de capas medias burocratizadas, cuyo reclutamiento fue además requiriendo mayores exigencias técnicas y profesionales. De la misma manera, el establecimiento de numerosas empresas capitalistas, en todas las actividades urbano-industriales, requirió el reclutamiento de una capa creciente de técnicos, profesionales, cuadros directivos, y personal administrativo, que formaron nuevas capas medias asalariadas.

Así mismo, técnicos y profesionales independientes, se multiplicaron en razón de las crecientes demandas de sus servicios. Finalmente, la expansión de actividades muy diversas de comercio y de servicio, dieron cabida al crecimiento de una pequeña burguesía muy extensa, cuyas capas más bajas tienen una base precaria y son permanentemente arrastradas hacia la proletarianización o hacia ocupaciones de pequeña burguesía marginal.

Estas condiciones implicaron no solamente un desplazamiento de los sectores medios, hacia ocupaciones de tipo burocrático profesional o técnico, cada vez más ligadas a las necesidades de los cambios de la estructura económica, sino también una redefinición sustantiva de sus funciones y orientación políticas.

En efecto, mientras que en el período anterior no tenían cabida estable en las actividades económicas principales, ni podían integrarse sino como clientela en la coalición de poder, en cambio en la nueva situación pasaban a cumplir funciones de mediación burocrática y técnica entre la burguesía y los trabajadores. Así mismo su área de influencia política en el Estado, fue ensanchándose no solamente por su participación creciente en la burocracia pública, sino también a través de su participación política en los nuevos partidos que se fueron formando a partir de 1956, permitiéndoles el acceso al Parlamento, a funciones de dirección en la administración central del Estado, asocia-



COYUNTURA

COYUNTURA

COYUNTURA

dos a proyectos reformistas, junto con algunos de los núcleos modernizantes de la burguesía.

De esta manera, estas capas medias, principalmente sus sectores más burocratizados, fueron perdiendo interés en la alianza con el proletariado, buscando más bien fortalecer su función de intermediación política, en el orden de dominación cuya modernización procuraban. Así perdieron toda capacidad de atraer y de mantener bajo su liderazgo al nuevo proletariado.

Estos cambios en la posición económico-social y en la orientación política de las capas medias, fortalecieron las tendencias ya iniciadas en el APRA, hacia el final del período precedente, de franco abandono de sus posturas nacionalistas y populistas radicales, muy particularmente en lo que se refiere a su conducción del movimiento sindical. El APRA entrará en una política de convivencia con la coalición oligárquica que se manifestará con toda claridad a partir de 1956.

En consonancia con esta nueva actitud, el APRA se esfuerza por la total despolitización del movimiento obrero, tratando de restringirlo a un sindicalismo puramente gremialista, confinado a las negociaciones dentro de las empresas, buscando establecer relaciones de "armonía" entre obreros y patrones.

Para el cumplimiento de tales propósitos, el APRA desplegó grandes esfuerzos para promover el llamado "sindicalismo libre", propició la formación de la ORIT, como mecanismo de integración sindical entre las organizaciones sindicales pro patronales norteamericanas y las del Perú y de América Latina. La CTP fue integrada dentro de esta nueva organización sindical regional; algunos de sus más importantes dirigentes lo fueron también de la ORIT. Creó centros especiales de entrenamiento de dirigentes sindicales dentro de esta corriente, cuya principal orientación era y es de tendencia netamente anticomunista y pro yanqui.

Debido a sus alianzas con los sectores oligárquicos de poder, el APRA trató de utilizar su influencia tradicional en el movimiento obrero, su aparato sindical legalmente reconocido, y el monopolio de esta legalidad, para contener el surgimiento de un movimiento obrero de carácter clasista, anticapitalista y antiimperialista. En este sentido utilizó todos los medios a su alcance: la provocación a los sectores obreros más radicales, manipulaciones burocráticas, el amarillaje, la bufalería, el divisionismo sindical. La acción del APRA en las huelgas bancaria y metalúrgica en 1964 ilustran estas prácticas.

Esta línea política, implementada desde 1956, significó el debilitamiento de las posiciones apristas al

interior del movimiento obrero, así como la paulatina pérdida de su atracción sobre los sectores populares en general.

Más aún, también fue mermando su influencia sobre los propios sectores medios nuevos, en especial sobre nuevas capas reformistas de carácter modernizante, que si bien tampoco eran antiimperialistas, sí eran netamente antioligárquicas, y en consecuencia no podían aceptar la convivencia del APRA con la coalición oligárquica. Es así que especialmente a partir de 1956, los nuevos sectores medios alimentaron partidos políticos que como Acción Popular y la Democracia Cristiana elaboran banderas modernizantes, pero ni desean ni son capaces de ligarse con el proletariado, ni tampoco de influirle o controlarlo orgánicamente, como pudo hacerlo el APRA en los años 30. Incluso los intentos socialcristianos de establecer una organización en el movimiento obrero mediante el MOSICP fueron muy poco significativos. Finalmente, el Social Progresismo, también reformista modernizante, pero con rasgos radicales y antiimperialistas, no tuvo capacidad orgánica de movilizar a los sectores obreros.

El estudiantado universitario, que entretanto se había ido ampliando rápidamente como consecuencia de la expansión de los sectores medios, aunque provenientes mayormente de sus capas más bajas y de algunos núcleos obreros se mantuvo en una línea de radicalización política bajo el impacto ideológico de la Revolución Cubana y con el estímulo de las movilizaciones campesinas y las nuevas luchas del proletariado urbano.

La agudización de la crisis de los sectores agrarios precapitalistas, la influencia urbana creciente sobre el mundo rural y el deterioro del poder local de los terratenientes, lanzaron a vastas masas campesinas —principalmente a comunidades indígenas y a colonos— a la lucha por la recuperación directa de la tierra, desencadenando así un proceso de movilización campesina que sería sangrientamente reprimido.

Dentro de este contexto, se puede observar que no solamente se había producido una transformación de las características internas del proletariado, así como de sus relaciones con los demás sectores explotados, sino también de sus relaciones con la burguesía y los sectores medios. Esta nueva situación consistía en que el proletariado empezaba a estar objetivamente en condiciones de rescatar su autonomía de clase, independizándose del liderazgo de los sectores medios populistas, mientras a su vez emergía con la posibilidad de ejercer el liderazgo del conjunto de sectores explo-

tados, articulándolos en una lucha antiimperialista, entendida como lucha anticapitalista.

Para que estas posibilidades estructurales pudieran efectivizarse, habría sido necesario que existiera algún canal importante de educación política del proletariado, que ayudara a éste a ganar conciencia de sus nuevas perspectivas y alternativas de organización y de movilización sindical y política. Sin embargo, las circunstancias se dieron de otro modo.

El Partido Comunista Peruano que había adoptado una línea de reformismo obrero, no había logrado antes de 1960 extender su área de influencia en el movimiento obrero, ni siquiera dentro de su línea reformista, y su capacidad orgánica precaria en esos años, por los efectos de sucesivas crisis internas, no le permitió ejercer un liderazgo significativo en los esfuerzos de constitución de un nuevo movimiento obrero clasista.

Las corrientes trotskistas que comenzaron a organizarse políticamente desde 1945, adoptando un lenguaje socialista radical, pero abstracto, no tenían la capacidad de incorporar las complejas y contradictorias combinaciones de la sociedad peruana en este proceso de cambio, y no podían ofrecer al proletariado ningún programa concreto de desarrollo político, que no fuera sino una prédica abstracta por una orientación socialista ultradepurada, que por eso mismo no podía atraer a sectores importantes del proletariado. Su influencia, quedó así reducida a núcleos restringidos.

Esta debilidad de la izquierda ponía de manifiesto la inexistencia de investigaciones marxistas del proceso histórico peruano, después de la muerte de Mariátegui. Esto se debió, por una parte al oscurantismo intelectual al que fueron sometidas las Universidades por la represión oligárquica; y por otra parte a la infección burocrática en el pensamiento marxista durante casi cuarenta años. Todo eso produjo un uso puramente libresco y talmúdico del pensamiento marxista, o a lo sumo, intentos de aplicación mecánica de sus hipótesis específicas, elaboradas para circunstancias históricas diferentes, y una reificación de sus conceptos fundamentales.

Es también importante señalar que no sólo no había investigación marxista de nuestra realidad, sino en el fondo simplemente no había investigación de ninguna orientación. En este sentido, los efectos de la represión oligárquica y militar, especialmente de la dictadura odrísta, requieren aún ser evaluados en toda su amplitud.

Los nuevos grupos políticos con orientación revolucionaria que se constituyen en el país, bajo los efectos de la revolución cubana, de las grandes movilizaciones campesinas, y de las primeras movilizaciones obreras independientes, grupos políticos resultantes de desprendimientos de núcleos radicales del APRA y del Partido Comunista, así como de la división del movimiento trotskista internacional, buscarán en unos casos la vía de la insurrección guerrillera o la movilización del campesinado, poniendo muy poco empeño en la organización y centralización del nuevo movimiento obrero, en una línea de clase autónoma y revolucionaria.

A pesar de todas estas carencias y dificultades, y enfrentados a una represión permanente, en los nuevos sectores proletarios, especialmente en los metalúr-

gicos y mineros aparecerán núcleos revolucionarios activos, que se empeñan en la conquista de la autonomía sindical y política del proletariado, frente al populismo pequeño-burgués y frente al paternalismo del Estado burgués, tratando de agrupar a los sectores obreros más combativos para establecer las bases de una nueva línea sindical, frente a la influencia aprista.

h

LAS LUCHAS POR LA CONQUISTA DE LA AUTONOMIA

acia el fin de la década, del 50, la economía del país ingresa a una fase de crecimiento, por el desarrollo de las tendencias antes señaladas. Y esta fase se prolonga hasta comienzos de 1966.

Es en el curso de este proceso que se revitaliza el movimiento obrero, especialmente en sus sectores nuevos, así como en algunos núcleos de capas medias asalariadas, en especial magisterio y bancarios.

Esta nueva movilización de los trabajadores, se orienta a la construcción de una línea sindical de autonomía clasista que intenta contrarrestar la actitud crecientemente reaccionaria de la dirección sindical aprista. En un primer momento, esta nueva línea sindical y política confronta el problema de optar entre transformar desde dentro a la CTP y asumir su dirección, o formar una nueva organización sindical independiente.

Las corrientes sindicales conducidas por Acción Popular, Democracia Cristiana y el Partido Comunista, que tenían influencia importante en bancarios y en el magisterio principalmente, apoyaron en ese momento la primera opción. Sin embargo, varios núcleos sindicales obreros, bajo liderazgos de izquierda —sobre todo trotskista— abandonaron la CTP, como fue el caso de los metalúrgicos. Paralelamente entre los mineros, a pesar de la permanencia del liderazgo aprista, la influencia de grupos obreros de izquierda sobre las bases, llevó a la adopción de programas clasistas.

Como simultáneamente estaban en pleno desarrollo las movilizaciones campesinas por la recuperación de las tierras, el APRA, vinculado por pactos políticos explícitos con los sectores más oligárquicos de la coalición de poder, asumió en toda su amplitud la defensa de esos intereses. Esta conducta trajo como consecuencia que la dirección sindical aprista, no solamente se empeñara en la despolitización del movimiento obrero, sino también en la contención de sus demandas gremiales.

Debido a esa situación, las corrientes sindicales nuevas optaron finalmente por la construcción de una nueva central sindical independiente.

El surgimiento de este nuevo movimiento obrero, al mismo tiempo que el movimiento campesino, fue objeto de una represión violenta. Esta se dio a comienzos de 1963 y en 1964, sobre todo en contra de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos y de la Federación de Empleados Bancarios. La primera de estas Federaciones encabezó una masiva huelga de toda la rama, con ocupación de fábricas, toma de rehenes, mítines callejeros. Su represión culminó con la expulsión de casi un centenar de trabajadores dirigentes de sus centros de trabajo y con la creación por el

APRA de una nueva federación. La segunda sostuvo una prolongada huelga con apoyo masivo de sus bases, que fue quebrada incluyendo la expulsión de 600 trabajadores, permitiendo al APRA retomar el control burocrático de esa Federación.

Poco después, culminando una movilización iniciada en los años anteriores, los trabajadores pesqueros se declararon en huelga en 1966, consiguieron un relativo éxito en sus reivindicaciones y arrasaron a la dirección aprista coludida con los empresarios pesqueros, afirmando una nueva dirección más combativa.

Paralelamente, el movimiento de sindicalización campesina y de recuperación de las tierras, iniciado desde 1957, y que había logrado movilizar a vastos sectores campesinos, fue también sangrientamente reprimido a partir de 1962, con el encarcelamiento de sus principales dirigentes y la masacre de numerosos grupos, así como también fueron aplastados los intentos guerrilleros que pretendieron dar un nuevo impulso a esas luchas.

A pesar de la represión y del sabotaje aprista, las luchas proletarias continuaron bajo el régimen belaudista, intensificándose conforme iba agotándose la fase de crecimiento económico hasta encallar en la devaluación de 1967. Esas luchas hicieron posible que en 1966 se estableciera el Comité de Defensa y Unificación Sindical, matriz de donde surgió en 1968, pocos meses antes del golpe militar, la Confederación General de Trabajadores del Perú.

El hecho de que los núcleos más combativos del nuevo movimiento obrero hubieran sido eliminados bajo la represión, permitió a las corrientes obreras reformistas que el PC expresaba, tomar la dirección y el control de la nueva central sindical.

Esta intensa movilización del proletariado, del campesinado y de los núcleos más radicales de las capas medias asalariadas y estudiantiles, no obstante la represión, puso en crisis al sistema político. Como manifestación de esa crisis, se dividieron los principales partidos que integraban la coalición de poder, se reajustaron en el último momento nuevos intentos de alianzas políticas que pretendían articular a las fracciones modernizantes de la burguesía financiero-industrial con el populismo anquilosado del APRA.

Todo este proceso fue estableciendo las bases para una autonomización política relativa de las capas medias burocratizadas, que se habían ido impregnando de la influencia ideológica del reformismo desarrollista y nacionalista. El rol de autoridad política intermediaria que estos sectores tenían, les permitió, en el marco de la bancarrota política del régimen burgués, y de la derrota coyuntural de los movimientos campesinos, asumir la dirección del Estado burgués e inaugurar con el golpe de octubre de 1968 el régimen actual.

LOS EFECTOS DE LA POLITICA DE LA JUNTA MILITAR SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO

Las reformas emprendidas por el régimen militar conducen a modificaciones importantes tanto en las características internas, como en las relaciones de clase del proletariado, afectando por eso mismo la situa-

ción sindical y política del movimiento obrero.

La cooperativización de los grandes latifundios capitalistas conlleva la posibilidad de la conversión del proletariado rural incorporado en este sector, en una nueva fracción de las capas medias, tanto por el régimen de propiedad impuesto, como por el sistema de participación en los excedentes, puesto que en la economía nacional en su conjunto se refuerza la dominación capitalista.

En el mismo sentido, el establecimiento del régimen de Comunidades Laborales en los sectores básicos capitalistas, introduce en el seno del proletariado tendencias que estimulan los aspectos pequeño-burgueses del comportamiento de los trabajadores más estables, a través de una participación subordinada de los trabajadores en la propiedad de la empresa capitalista, así como en la distribución de excedentes.

De esta manera se introducen elementos que perturban el proceso de articulación de clase y de cohesión ideológica y política que venía desarrollándose en el proletariado, y se establecen las bases de un nuevo tipo de influencia burguesa y pequeño burguesa, dentro de esta clase. Así se está dando pie en la conducción del movimiento obrero, a la aparición de tensiones y conflictos entre sectores específicos del proletariado con las divisiones ideológico-políticas que éstos implican.

En cuanto a las relaciones de clase del proletariado con la clase dominante, los cambios se procesan en dos sentidos. En primer lugar, al terminarse definitivamente la ya declinante incongruencia entre los aspectos económicos y políticos del sistema de dominación, La Reforma Agraria erradica las bases de poder de las fracciones oligárquicas de la coalición dominante, homogeneizando de esta manera el carácter burgués de la dominación política y del Estado. El proletariado, así, ya no tiene que ser antioligárquico, sino anti-burgués. Esto marca también el fin de las ya precarias posibilidades de todo movimiento populista.

En segundo lugar, el Estado cambia sus funciones, al asumir directamente no sólo la gestión capitalista de algunas áreas sustantivas de la economía, sino también la gestión de la asociación con la burguesía imperialista. De este modo, además de su rol de garante político del sistema y de su apariencia arbitral en los conflictos entre las clases, ahora cumple las funciones y responsabilidades económicas del capital, y se convierte en patrón de los trabajadores. Por esa razón el Estado, tras los infructuosos intentos populistas anteriores, tiende a convertirse en un estado corporativista, aunque sirviéndose todavía de los restos del instrumental ideológico y de las técnicas de manipulación populistas. El Estado va cobrando ya no solamente la gestión directa de importantes sectores de la economía, sino también la capacidad de fiscalización del conjunto de ella, así como de todo el aparato de información y de elaboración y difusión ideológicas. La consolidación de estas tendencias va requiriendo un nuevo sistema de dominación política, es decir de articulación política entre las clases, que consiste en una segmentación de las clases por áreas funcionales en organizaciones gremiales comunes, o sea de tipo corporativo, sobre las cuales se ejerce el control burocrático y autoritario del Estado, y se subordina a los trabajadores al dominio político orgánico de los intereses del capital monopolista. Este es el preciso sen-

tido de la prédica ideológica sobre "la democracia social de participación plena" y de la necesidad de eliminar intermediaciones políticas entre las masas y el Estado, para que la relación entre ambos pueda hacerse a través de instituciones corporativas.

Es en esta dirección que se constituyen las Asociaciones Gremiales Industriales, las Comunidades Laborales, las Ligas Agrarias, y el aparato central del SINAMOS como eje del control estatal sobre las masas encuadradas en aquellos organismos corporativos. En idéntico sentido se ubica la creación burocrática de la CTRP, destinada a acentuar en un primer momento la división sindical del proletariado y a pasar, en un segundo momento a ser el eje de un aparato sindical total, integralmente controlado por el Estado, como su instrumento de manipulación de los trabajadores, para clientelizarlos y contener sus demandas gremiales y políticas en límites compatibles con las necesidades de acumulación capitalistas.

El agente político de todos estos cambios es el conjunto de núcleos burocráticos de las capas medias, que, como las Fuerzas Armadas y la tecnocracia, están cumpliendo un papel de autoridad política intermediadora en el reajuste del orden de dominación. Por su posición de clase y su pretensión arbitral, estos agentes políticos segregan y difunden una característica ideológica, de conciliación de clases, que desorientando a los trabajadores, sirve de base al establecimiento de un sistema corporativista en el cual, precisamente, se trata de agrupar a explotadores y explotados en organizaciones comunes como si tuvieran intereses comunes, y que se apoya en la mitología de un interés nacional común a todas las clases sociales.

Esa ideología es también un terreno común de encuentro entre los restos del viejo populismo, que el Apra encarna a pesar de su debilitamiento orgánico, del reformismo obrero que el Partido Comunista representa, y del corporativismo. Eso explica el hecho de que el Apra, no obstante todas sus reticencias con el régimen actual, no ha cesado en su insistencia de buscar un entendimiento explícito con el gobierno, dada la básica coincidencia de sus respectivos programas. A través de la CTP ha declarado una tregua sindical en el frente de las empresas privadas, sin dejar de presionar en los grupos de capas medias asalariadas por el Estado. Eso también explica el hecho del público y cada vez menos crítico apoyo del PC al régimen militar, la manera conciliatoria de la conducta sindical de la dirección actual de la CGTP, la moderación de sus quejas por la creación burocrática de la CTRP y la conducta antiobrero del SINAMOS, y la coincidencia de esa dirección del reformismo obrero con la burocracia corporativista de la CTRP en los recientes actos públicos.

Así, las reformas en curso y el papel que en este proceso cumplen los núcleos burocráticos de las capas medias en la conducción del gobierno, marcan la culminación del proceso de cambios que venía ocurriendo en las relaciones de clase del proletariado con la burguesía, con las capas medias dotadas de funciones de autoridad política, y con el Estado.

Del mismo modo, también, en este proceso se pone de manifiesto el surgimiento y expansión de una capa de burocracia sindical en el seno del proletariado, burocracia cuya dirección y control es ahora el campo

de disputa al mismo tiempo que de conciliación y de entendimientos, entre los restos del populismo, y las corrientes de reformismo obrero y de corporativismo.

La expansión y las transformaciones del capitalismo imperialista en la economía del país, colocan al proletariado como clase, en una posición hegemónica dentro del conjunto de los explotados y los dominados y pueden estimular una mayor articulación orgánica entre las varias fracciones del proletariado de los diversos sectores y ramas de la actividad económica. del mismo modo, la homogeneización de la burguesía y las nuevas funciones del Estado sitúan a la clase obrera en condiciones de definirse políticamente, ya no solamente contra las modalidades oligárquicas de dominación política, sino ya decididamente contra la dominación capitalista imperialista en la economía y en el Estado.

Sin embargo, es en este preciso momento que la política del régimen militar introduce en el seno del proletariado todos los elementos de diferenciación y de conflicto que acabamos de señalar, impidiendo la cohesión organizativa y política de esta clase; estimula todas las formas de divisionismo sindical y político, confunde a los trabajadores por medio de la difusión de una ideología de conciliación de clases, y sobre esas bases se empeña en el encuadramiento de las masas trabajadoras en el sistema de control político y corporativista, al servicio de los intereses de un nuevo modelo de acumulación capitalista imperialista, en el que el capital monopolista internacional y el capital estatal aparecen asociados y hegemónicos en la economía del país. En esta política, el régimen militar está recibiendo la colaboración de los restos del populismo aprista y la del reformismo obrero.



LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS ACTUALES EN EL MOVIMIENTO OBRERO

Como expresión de esa compleja y contradictoria historia del desarrollo del proletariado y de sus movimientos sindicales y políticos, y de la actual política del régimen militar, el movimiento obrero actual aparece dividido en varias corrientes ideológico-políticas que se manifiestan como direcciones sindicales y políticas. Estas pueden dividirse en dos campos principales: a) de filiación burguesa; b) de filiación obrera. En el primer campo, se ubican las corrientes en que se canaliza la influencia de la burguesía, a través de sus agentes pequeño-burgueses. A ese campo pertenece actualmente, la CTP de dirección aprista, donde perviven los restos del viejo populismo inicialmente antioligárquico y nacionalista y hoy abiertamente pro imperialista. Es evidente que la capacidad real de la CTP para controlar al movimiento obrero se ha reducido a fondo, y actualmente no pasa de ser una camarilla burocrática enquistada en pocos núcleos de trabajadores que pertenecen a ramas tradicionales de la economía y en ciertos grupos de capas medias profesionales vinculadas al salario estatal. Sin embargo, en la medida en que la educación socialista revolucionaria del proletariado está recientemente en desarrollo, sería peligroso creer que la reducción de la presencia populista como aparato orgánico significa igualmente una

reducción pareja de la presencia de una mentalidad de corte populista en muchos sectores de trabajadores que, sin embargo, ya no responden a la dirección sindical o política aprista.

En el mismo campo, se sitúa la recientemente aparecida Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), nacida de la iniciativa de organismos político-militares del actual régimen, y no de las bases trabajadoras. En lo cual se demuestra la esencia burocrática de esta nueva Central, su condición evidente de instrumento destinado a la manipulación de los trabajadores, y de vehículo de la política corporativista del régimen actual. Por eso, abandonando el terreno de las reivindicaciones de la clase obrera, la CTRP proclama su calidad "no reivindicacionista sino participante", y se da un tipo de organización que corresponde estrechamente a la organización del aparato actual de administración pública del Estado.

Para su implementación, la CTRP tuvo que movilizar a los elementos más oportunistas de la clase. Y ello está en el hecho de que su base principal sea la Federación de Pescadores, encabezada por una dirigencia que, habiendo apartado su Federación de la GCTP, reforzó las tendencias gremialistas del sector pesquero, desmovilizó a sus bases y mantuvo el poder sobre ellas mediante mecanismos burocráticos y autoritarios. Esta situación permitió que los esfuerzos muy pronunciados, por parte del gobierno y especialmente del Ministerio de Pesquería, para acercarse a los dirigentes, dieran sus frutos y que ambos coordinaran sus acciones para formar la CTRP. A esta dirigencia pesquera se sumaron además una serie de dirigentes o ex dirigentes en otros gremios, descalificados por sus propias bases. Dada la nueva estructura capitalista que las reformas actuales van estableciendo y dentro de ella, particularmente, el desarrollo de las nuevas funciones del Estado, así como por la homogenización de la burguesía por el desplazamiento forzado de las fracciones más atrasadas y declinantes de ella, desde los sectores agropecuarios hacia los urbano-industriales, el populismo aprista, belaundista, etc. ya es en lo esencial una corriente política que carece de base real de existencia. Con otras modalidades y otros agentes políticos, lo que quedaba del proyecto aprista se agota en el actual proceso, y está incorporado a él.

Los intereses del desarrollo moderno del capitalismo en el país, que expresaron las capas medias bajo el liderazgo del Apra, hoy día se expresan mejor a través de la política corporativista del régimen actual. Por eso, la CTP y la CTRP existen ahora separadas y diferenciadas; pero los intereses básicos que defienden son los mismos. No es en consecuencia, por casualidad, que los dirigentes apristas reclaman al régimen la necesidad de un diálogo que los lleve a acuerdos. Los tres puntos programáticos enunciados en el reciente mitin del Apra por su Jefe —Estado empresario, inversión extranjera fiscalizada por el Estado y democracia funcional— son, en efecto, puntos de clara convergencia entre el Apra y el régimen militar. Su "democracia funcional" es exactamente el corporativismo que el régimen está construyendo.

Pero más allá de esos reclamos, la convergencia se produce en la práctica, en la ideología de conciliación de clases, en la insistencia sobre la búsqueda de relaciones armónicas y constructivas entre los capitalistas



y los trabajadores, en la importancia que se atribuye a las cooperativas y al régimen de comunidades laborales, como medios para amortiguar la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores, así como en la permanencia de la inversión imperialista en el país.

Resultado de esas evidentes convergencias, entre el Apra y el régimen ha sido el entendimiento real con los dirigentes sindicales apristas de las cooperativas cañeras, —una vez que se les permitió ser dirigentes de la administración de esas cooperativas—; la tregua sindical mantenida por la CTP en los sectores industriales; y la alianza entre los dirigentes de comunidades industriales, de empresas donde el Apra tiene influencia visible, y los representantes del Sinamos, en el reciente Congreso de las Comunidades Industriales.

Los enemigos de clase del proletariado peruano, la burguesía imperialista nativa asociada y el Estado burgués, están ahora representados por la CTP y la CTRP en la capa burocrática del movimiento obrero. Un populismo desfalleciente y un corporativismo agresivo y en plena escalada, se dan la mano en los hechos a pesar de sus diferencias que son hoy día, sólo una prolongación de las de épocas en que el Apra rivalizaba con los militares y con los populismos del belaundismo, de la democracia cristiana y del social progresismo, todos ellos ahora integrados en el régimen actual.

Sobre la CNT, representante del populismo social cristiano, bastará aquí señalar que cumple las mismas funciones que las anteriores corrientes sindicales, sin que haya podido obtener ninguna fuerza significativa.

En el otro campo, en el de las corrientes de filiación proletaria, se sitúan el reformismo obrero y las dispersas corrientes socialistas revolucionarias.

La corriente obrera reformista, representada actualmente por el PC y la dirección de la CGTP es un fenómeno de doble cara. De un lado, es el resultado de las propias luchas del proletariado peruano por independizarse de la dominación del reformismo pequeño-burgués aprista, pero cuyas luchas

no fueron llevadas a cabo por una dirección política socialista, consecuentemente revolucionaria, es decir anticapitalista en el lenguaje y en la práctica. Así, es la expresión de la debilidad de la educación ideológica y política socialista revolucionaria del proletariado peruano. De otro lado, el reformismo obrero es también una expresión de toda una línea política internacional en el movimiento obrero, la cual se caracteriza por sostener que es más conveniente para los trabajadores no tratar de destruir por la violencia la explotación y la dominación del capitalismo, sino en cambio tratar de ampliar por medio de sucesivas reformas legales y pacíficas la presencia de los trabajadores en el poder económico y político en la sociedad. Por esta razón, trata permanentemente de establecer alianzas con los sectores modernizantes, progresistas y reformistas, de la burguesía y de la pequeña burguesía, colocando como furgón de cola de esos reformismos al movimiento obrero.

El reformismo obrero, de esa manera, tiende a utilizar métodos burocráticos en la dirección del movimiento obrero. Eso quiere decir, que lejos de buscar la profundización de los conflictos de clase, de clarificar en la conciencia de la clase explotada la necesidad de organizarse para la destrucción violenta del sistema, ya que las reformas tienden normalmente al reajuste de éste, el reformismo obrero intenta todo el tiempo conciliar las reivindicaciones de los trabajadores con el marco político y legal impuesto por la dictadura de la burguesía. No puede dejar de hacerse cargo de las presiones y de las reivindicaciones de las masas trabajadoras, ya que si no lo hiciera perdería su influencia y el control de sus organizaciones sindicales; pero de otro lado, trata sin cesar de acomodar la lucha por los intereses de los trabajadores a lo que le permita el sistema. Por eso es un fenómeno de doble cara, ambivalente, y por eso converge, aunque contradictoria y conflictivamente, con los reformistas burgueses y pequeño burgueses. Por eso, también produce un alejamiento entre la dirección y las bases de las organizaciones sindicales del proletariado, consolidando una capa de burocracia obrera cuyos intereses son justamente los de hacer ese juego de intermediación entre los capitalistas y los trabajadores.

Es necesario recalcar, sin embargo, que no obstante todas esas características, el reformismo obrero es una corriente que nace en el seno mismo del proletariado, como una etapa o como una forma no avanzada de las luchas de la clase por independizarse de la predominancia de corrientes pequeño-burguesas, y como resultado del hecho de que las corrientes socialistas revolucionarias dentro de la clase, no han alcanzado aún la fuerza necesaria para llevar al movimiento obrero a un nivel más avanzado de educación y de organización sindical y política.

No es, por eso, inútil repetir aquí lo que ya se dejó indicado antes: que durante el período en que fue expandiéndose y diversificándose el proletariado, al compás de la ampliación y la diversificación de las bases del capitalismo imperialista en el país, las agrupaciones revolucionarias que se formaban fuera del PC, se dedicaron ante todo a imitar el ejemplo cubano de la lucha guerrillera en el campo y se desentendieron de la educación y la organización revolucionarias del proletariado y los pequeños grupos socialistas que lo intentaron fueron objeto de represiones violentas y

sus dirigentes más combativos fueron expulsados de los centros de trabajo, por el gobierno y los patrones.

En esas condiciones, era sin duda normal que fueran los dirigentes obreros de tendencias clasistas-moderadas y reformistas, que asumieran el comando y el control de las organizaciones de clase del proletariado, en su lucha contra la presencia de la influencia burguesa que el populismo reformista difundía.

La CGTP, que fue el resultado de prolongadas luchas de los núcleos más combativos y clasistas del movimiento obrero, en contra del Apra, emergió de ese modo bajo el control de una dirección obrera reformista. Pero, por eso mismo, las direcciones sindicales y políticas obreras reformistas no pueden ser consideradas ni tratadas de la misma manera que el populismo aprista o el corporativismo actual. Estos son agentes del enemigo de clase. El reformismo obrero es una parte de la clase obrera, de orientación no consecuentemente revolucionaria, aunque puede servir como aliado de los sectores reformistas del enemigo de clase.

Además del reformismo obrero, existen hoy día corrientes socialistas revolucionarias en el seno del movimiento obrero. Pero esas corrientes están todavía dispersas, todavía en una etapa de clarificación y de construcción, todavía en búsqueda de alternativas políticas eficaces en la lucha contra el enemigo de clase. Sin embargo, a pesar de su condición relativamente reciente, actualmente están fortaleciéndose en diversos sectores del proletariado, luchando contra los restos del populismo aprista y contra la penetración del corporativismo, y buscando clarificar y hacer avanzar la conciencia de los propios sectores influidos por el reformismo obrero.

Estas nuevas corrientes socialistas revolucionarias del proletariado, actúan todavía en su mayor parte desde dentro de las organizaciones sindicales de base que se agrupan en la CGTP; pero, también están activas en todas las bases obreras no afiliadas a ninguna central. De la maduración de sus luchas, del desarrollo de la educación socialista revolucionaria del proletariado, depende también que las bases de la conciliación del reformismo obrero con el reformismo burgués y pequeño burgués no puedan ser ni fuertes ni estables.

EL LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO DURANTE EL ACTUAL REGIMEN

El desconcierto político resultante de la instauración del régimen reformista y de sus primeras acciones, así como la rápida disposición conciliatoria del reformismo obrero, aprovechando la rivalidad entre el Apra y el nuevo régimen, han impedido ciertamente un mayor avance en las luchas del proletariado, en una dirección socialista revolucionaria.

No obstante, empujados por el deterioro objetivo de su situación económica desde 1967, por el desempleo, y más adelante para defenderse de la manipulación corporativista, los trabajadores no han cesado de enfrentarse a sus enemigos de clase, en cada



uno de los sectores y ramas de la economía, y en el frente ideológico y político general del país.

La reseña íntegra y minuciosa de esas luchas en este período, no cabe en los límites de este artículo. Subrayaremos aquí las más importantes y significativas de ellas para el desarrollo político del proletariado.

Es importante, en primer término, referirse a las luchas del proletariado agrario, cabeza hoy día de las luchas de todos los trabajadores campesinos. La entrega a los trabajadores de las tierras de los grandes latifundios capitalistas expropiados en la reforma agraria, ha significado ciertamente el comienzo del fin del poder oligárquico y en ese sentido es importante para todos los trabajadores del país.

Sin embargo, sólo el 24 o/o de los trabajadores agrarios ha sido beneficiado directamente por esta reforma; la transferencia forzada del capital agrario al capital urbano-industrial, la deben financiar los trabajadores agrarios; la constante presencia del control burocrático del Estado burgués sobre ese sector de trabajadores, la imposición corporativista de las Ligas Agrarias y del Sinamos, el mantenimiento de relaciones de explotación en la producción, en las propias Cooperativas y SAIS, la diferenciación de poder y de ingresos entre los burócratas y los trabajadores, y el sometimiento de toda la economía agraria reformada a las necesidades del nuevo modelo de acumulación capitalista imperialista, muestran con claridad que esta reforma sirve para el reajuste de las formas de explotación y de dominación.

Por todo eso, aún bajo los efectos de la amortiguación de las tensiones con la burguesía, y bajo la aún importante influencia del populismo aprista, el proletariado cañero principalmente ha sido capaz de sostener intensas movilizaciones, primero contra la imposición policiaco-burocrático del régimen sobre las cooperativas en el momento anterior a mayo de 1972, y más tarde han comenzado las presiones acerca del problema de la deuda agraria y de la autonomía organizativa de los trabajadores frente a la burocracia administrativa, así como frente al problema de la diferenciación de salarios y del mantenimiento del mismo régimen de distribución del trabajo del latifundio capitalista privado.

Asimismo, los trabajadores "eventuales" que no

han sido incorporados a las cooperativas, están aumentando sus movilizaciones por el derecho a la tierra y al trabajo estable. Los trabajadores estables de las SAIS han iniciado una tendencia a la sindicalización para defenderse de la imposición de sus administraciones actuales, y para establecer relaciones solidarias con las reivindicaciones de los trabajadores de las comunidades campesinas, frente al problema de la deuda agraria.

El campesinado asalariado y colono que no ha sido incorporado a la reforma agraria, está levantando su organización y movilización por su derecho a la tierra y al trabajo, en todas partes. Pero, paralelamente, una nueva reivindicación está ingresando al programa agrario de los trabajadores: la conquista del poder popular local, frente al poder de los mecanismos burocráticos del Estado burgués, como resultado de las necesidades de defensa frente a la imposición corporativista de las Ligas Agrarias y del Sinamos.

Por su parte, los trabajadores mineros de las empresas imperialistas que tienen el control de toda la actual producción minera del país, han realizado notables movilizaciones y han sostenido grandes huelgas, ya no solamente reivindicando mejores salarios y condiciones de trabajo, sino también la nacionalización sin pago de las grandes empresas imperialistas de esta rama. El más importante centro de esas luchas han sido los trabajadores de la Cerro de Pasco, cuyas luchas fueron reprimidas sangrientamente, de lo cual la masacre de Cobriza es un testimonio que el proletariado peruano entero no ha olvidado ni olvidará.

Desde el comienzo mismo del régimen militar actual, la paralización de la economía en los dos primeros años lanzó sobre los hombros de los trabajadores industrial-urbanos, el peso mayor de esa coyuntura. Esto llevó a los trabajadores a numerosas huelgas en defensa sobre todo de la estabilidad en el trabajo, frente a la quiebra de numerosas empresas y de la reducción de turnos y de personal en las empresas que se mantuvieron. Pero, recuperado el ritmo de expansión de la economía en 1970, los trabajadores se lanzaron a la lucha por la mejora de su nivel de vida, contra la baja de sus salarios reales desde 1967, incorporando cada vez más clara y firmemente demandas antimperialistas en sus pliegos reivindicatorios y en

sus comunicados públicos. Particularmente en el sector metalúrgico, en el de ensambladoras automotrices, en el del calzado, estas luchas han conducido a una clara intensificación de la conciencia socialista revolucionaria entre los trabajadores, y al fortalecimiento de la influencia de las corrientes sindicales y políticas de este carácter.

Al establecerse el régimen de la comunidad laboral en la industria, como el más definido resultado de la política de conciliación de clases, el régimen militar pudo esperar que las concesiones hechas a los trabajadores para la materialización de los propósitos conciliadores (distribución de utilidades, participación progresiva en la propiedad de las acciones y en los directorios de las empresas), serían suficientes para conseguir esos propósitos.

El hecho es, sin embargo, que la utopía de la conciliación de clases se vio precisada a esas concesiones que, por su carácter y por las condiciones específicas del capitalismo imperialista en el país, no pueden servir realmente, sobre todo de manera estable, para afirmar la amortiguación de las luchas de clase en este sector. Lejos de eso, los empresarios capitalistas han buscado y encontrado numerosas maneras de burlar los derechos que la legislación concede formalmente a los trabajadores, tanto en lo que se refiere al reparto de utilidades, como sobre todo a la participación en la gestión empresarial. Eso no se debe solamente a la novedad de este régimen en el Perú, ni a la "mala voluntad" de los empresarios. Es que las bases mismas del capitalismo imperialista en el Perú, impiden la materialización y la estabilización a la larga de este sueño reaccionario de la conciliación de intereses de clases.

Por eso los trabajadores de tales "comunidades", aunque aceptaran por confusión y por debilidad de su educación política de clase, construir "relaciones armoniosas" entre ellos y los capitalistas, no pueden sino verse empujados a la lucha contra éstos. ¿Qué puede significar para los obreros de las empresas imperialistas o para los de las empresas de capital nativo sometidas a la dominación de las reglas financieras y tecnológicas del capital imperialista, eso de "relaciones armoniosas" entre capital y trabajo, sino conciliar con los intereses del imperialismo? ¿Y qué puede significar para el propio régimen que proclama su nacionalismo, el tratar de forzar a los trabajadores a la conciliación con los intereses del capital imperialista, sino la manifestación de su esencia de agente político del reajuste y reforma de las bases de la dominación capitalista imperialista sobre los trabajadores peruanos? ¿O no es verdad que las empresas mineras actuales pertenecen al capital imperialista, y que más del 80 o/o del capital industrial invertido es igualmente imperialista, así como más del 60 o/o en las empresas pesqueras? .

Por ello, no debe ser una sorpresa para nadie que en el reciente Congreso de Comunidades Industriales, —controlado y manipulado encuentro de trabajadores, ejecutivos, funcionarios de empresas y funcionarios estatales—, los trabajadores se hayan pronunciado por una mayor intervención de los obreros sobre los recursos de producción de las empresas, por la socialización total de esos recursos, por la defensa cerrada de los sindicatos como los principales organismos de clase. Todo ello, a pesar de los esfuerzos de la alianza entre el Apra y el Sinamos, representado allí por decenas de funcionarios con derecho a participar

en las discusiones y en la elaboración de las ponencias y de la actitud conciliatoria de los representantes del reformismo obrero. Y tampoco debe sorprender, por eso, que los órganos de prensa del régimen hayan comentado con amargura esos resultados.

Debe también incluirse aquí que junto a las luchas de los trabajadores proletarios, los de las capas medias asalariadas, principalmente los del magisterio, los bancarios, los de correos y telégrafos, los de la marina mercante, han realizado numerosas huelgas y paros, a pesar del divisionismo impuesto por el reformismo obrero entre el magisterio, y de la conducta represiva del régimen.

Es evidente, en consecuencia, que durante este proceso ha avanzado la conciencia antiimperialista (por lo tanto, anticapitalista) de los trabajadores, ha avanzado la influencia y la fuerza de las corrientes socialistas revolucionarias en el proletariado, a pesar de su dispersión y de sus dificultades, ha avanzado la conciencia obrera sobre la necesidad de conquistar la autonomía sindical y política frente a la burguesía, a la pequeña burguesía y al Estado burgués, y se ha profundizado la lucha contra el carácter conciliatorio y ambivalente del reformismo obrero, reduciendo las bases de sus esfuerzos conciliatorios.

En el curso de estas luchas, por todos esos nuevos elementos en la lucha de los trabajadores, se ha deteriorado definitivamente la presencia del APRA en el control del movimiento obrero, se han sentado las bases para la resistencia contra el corporativismo de la CTRP, y finalmente se ha puesto en crisis la capacidad del reformismo obrero de la dirección actual de la CGTP, para llevar al proletariado como furgón de cola del reformismo del régimen militar. La clase obrera peruana puede estar orgullosa de que sus miembros ya no participen en los mítines del populismo ahora reaccionario del APRA, de tener núcleos con el coraje y la lucidez de quienes fueron capaces de atravesar la espesa malla manipuladora en el congreso de las comunidades industriales, sosteniendo las banderas de la revolución socialista, y de que sólo quienes confunden a la burocracia sindical reformista con toda la clase, puedan sostener que en el mayor acto de masas del reformismo corporativista haya estado presente el proletariado.

LA SITUACION COYUNTURAL DEL MOVIMIENTO OBRERO Y SUS ALTERNATIVAS

C

omo puede observarse a esta altura del análisis, el movimiento obrero presenta una situación bastante contradictoria dándose al interior de él: a) una división sindical y política, ahora acentuada por la crisis del control del reformismo obrero en la CGTP y la desafiliación de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de esa central; b) la amenaza del control corporativista de la CTRP sobre el movimiento sindical, ayudado por la acentuación de la corriente conciliadora del reformismo obrero con el régimen reformista, abandonando así en la práctica,

su línea inicial de apoyo crítico; c) el avance ideológico y organizativo de los núcleos de trabajadores socialistas revolucionarios, y de su influencia sobre el resto de la clase, especialmente sobre las bases vinculadas al reformismo obrero.

La intensificación de las luchas de los trabajadores, y el avance de las corrientes ideológicas socialistas revolucionarias en la clase, no solamente han puesto en crisis la dirección obrera reformista en la CGTP, sino que sobre todo, han llevado al régimen militar a endurecer su conducta represiva sobre los sectores más combativos del proletariado y de las capas medias asalariadas. Esto aparece con rotunda claridad, en el hecho de la ilegalización de todas las huelgas obreras y las de capas medias en el transcurso de este año, en el desconocimiento administrativo de la representatividad de la Federación Minera, la prisión de algunos de los dirigentes obreros de construcción civil de Marcona, y las reiteradas amenazas gubernamentales de ir más lejos aún en esta política.

En otros términos, en el momento mismo en que las dificultades económicas del régimen lo obligan a tratar por todos los medios de debilitar la capacidad reivindicativa del proletariado, para mantener las bases de la acumulación capitalista imperialista, la crisis de la CGTP profundiza la desarticulación sindical y política de los trabajadores, abriendo las puertas para la ofensiva manipuladora del régimen militar a través del Sinamos y de la CTRP, y para su ofensiva represiva por medios administrativos como la ilegalización de las huelgas y el desconocimiento de los sindicatos rebeldes, y por medios policiales.

Y esta situación se presenta, precisamente, en el momento en que el proletariado necesita más de toda su cohesión y de toda su firmeza de clase, para defenderse de los efectos de las dificultades económicas que la política del régimen militar acarrea al país, de la pérdida del poder adquisitivo del salario y el deterioro de su nivel de vida, así como para resistir a la presión corporativista, y a la represión administrativa y policial.

La ilegalización de todas las huelgas recientes, la militarización de los trabajadores de la marina mercante, el desconocimiento de la representatividad de la Federación Minera, son señales demasiado claras de una escalada represiva que pone en peligro la permanencia de las conquistas democráticas de los trabajadores: el derecho a la huelga y a la organización sindical independiente de la burguesía y del Estado burgués.

En estas condiciones, todo debilitamiento de la única organización centralizadora del movimiento obrero, que como la CGTP es el primer resultado de las luchas de las bases proletarias por conquistar su independencia política y sindical frente a la pequeña burguesía y a la burguesía, es un golpe para los intereses no sólo de largo plazo, sino de los intereses inmediatos de los trabajadores.

La responsabilidad principal por la crisis actual de la CGTP corresponde a la dirección obrera reformista que actualmente controla esta central. Es su política de apoyo cada vez menos crítico al régimen militar corporativista, y a los intentos de conciliación de clases, lo que ha producido un creciente distanciamiento entre esa dirección y las bases más importantes de la central, puesto que esas bases no podían ni pueden

cejar en su empeño de desarrollar la educación socialista revolucionaria y la lucha por las reivindicaciones inmediatas de la clase obrera.

Sin embargo, las corrientes más combativas que influyen en las bases más importantes de la CGTP, no pueden tampoco eludir su responsabilidad en esta situación. En lugar de aglutinar a las bases de la CGTP para llevar a cabo una lucha a fondo por la modificación de la actual dirección, por la eliminación o la reducción del control del reformismo obrero en esa dirección, de organizar un debate político fundamental sobre los problemas de la clase obrera y de los demás explotados del país, de discutir un programa de clase para la reorientación de todo el movimiento obrero agrupado en esta central, los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, decidieron la desafiliación de la más importante base de la CGTP, sin programa alternativo explícito y discutido en las bases de la central.

De ese modo, no sólo se contribuye al debilitamiento del movimiento obrero clasista, profundizando la actual división sindical entre cuatro centrales, y al distanciamiento entre las bases y la dirección de la CGTP, sino también se deja al reformismo obrero mayor margen de maniobra para controlar al resto de las bases y conciliar todavía más con el régimen corporativista, incluyendo la posibilidad de que se constituya una central única bajo el control completo del Estado burgués corporativo.

Frente a esta situación, es obligación de los trabajadores clasistas y de todos los revolucionarios socialistas, iniciar una lucha frontal contra este proceso de desarticulación sindical y política de los trabajadores, desde dentro y desde fuera de la CGTP, una vez producida la desafiliación de la Federación Minera, en busca de conquistar para la clase toda su capacidad de organización y de movilización y de educación política socialista revolucionaria, para defender y desarrollar su autonomía de clase, sus conquistas democráticas, su nivel de vida, su derecho al trabajo, y las bases de su poder político.

Estas tareas no pueden ser cumplidas simplemente como defensa de la actual CGTP, ni en el plano puramente sindical. Es indispensable ahora, que los trabajadores puedan encontrar y desarrollar desde su propio seno y desde sus propias luchas, una alternativa programática capaz de articular y de movilizar a las bases.

1.- En primer término hay que clarificar dentro del movimiento obrero la conciencia de todas las posibilidades y perspectivas que surgen de su nueva situación de clase, de sus nuevas características internas y de sus nuevas relaciones de clase. Esta nueva situación supone para el proletariado, su ubicación como la clase hegemónica dentro del conjunto de los explotados y dominados del país, y en consecuencia con la capacidad para articular y acaudillar en una perspectiva socialista las reivindicaciones y las luchas de todos los otros sectores de explotados.

La historia de las luchas populares en el Perú, muestra que a partir de 1920 hasta 1968, se desarrolló un movimiento popular democrático y nacionalista sobre la base del proletariado, pero bajo el liderazgo de las capas medias, ante todo. El actual proceso agota lo que quedaba de esos proyectos populistas y los sobrepasa en una dirección corporativista, más

apta para servir a los fines de la nueva estructura capitalista imperialista y a las nuevas funciones del Estado dentro de ella.

A partir de aquí, se trata de construir un nuevo movimiento popular antiimperialista, esto es contra la dominación de las relaciones capitalistas de producción de carácter imperialista, en una perspectiva socialista revolucionaria capaz de conducir en esa dirección las luchas de todos los explotados del Perú.

Para que esto sea posible, el nuevo movimiento popular debe estar centrado en la hegemonía del proletariado, que ahora emerge con esa posibilidad ya no sólo en la lógica de una tendencia de largo plazo como antes, sino en la situación estructural concreta de la economía y de la sociedad peruana.

El proletariado no puede asumir con plenitud y con organicidad esa capacidad, si no eleva a su conciencia todas las implicaciones de su nueva situación en nuestra sociedad, y todas las trabas y todos los peligros que frente a esas posibilidades nacen de la política del régimen corporativista y de la conducta conciliatoria del reformismo obrero o pequeño burgués. Es decir, si no asume políticamente todas las consecuencias e implicaciones de su actual situación y de la situación general del país.

Otro trabajo será destinado pronto a tratar específicamente este problema. Aquí lo que se intenta es, principalmente, señalar algunas de las más urgentes tareas del movimiento sindical clasista.

2.- El avance de la lucha por la autonomización sindical y política del proletariado, exige la centralización del movimiento sindical bajo la conducción de los núcleos socialistas revolucionarios de trabajadores y de los grupos más combativos de la clase que se orientan hacia esa dirección todavía espontáneamente.

3.- Eso significa la necesidad de luchar contra la influencia y el predominio del reformismo obrero de la actual dirección de la CGTP, y por la erradicación de los restos del reformismo populista y la guerra sin cuartel contra la imposición corporativista de la CTRP, del SINAMOS y de las Ligas Agrarias.

4.- La lucha contra el burocratismo de las direcciones sindicales, que supone la lucha por elevar la educación política socialista revolucionaria, y la organización de las bases de trabajadores, ensanchar y consolidar los canales que permitan a esas bases recibir y elaborar y discutir informaciones, e ideas sobre la situación general de la clase, del resto de los explotados y del país en general. De ese modo, las bases de trabajadores podrán establecer su presencia y su influencia dominante sobre sus direcciones sindicales, defendiendo a sus dirigentes de los riesgos de corrupción y de burocratismo.

5.- La lucha por la ampliación de las bases del movimiento sindical clasista. Actualmente sólo está sindicalizado alrededor del 20 o/o de los trabajadores, lo que significa que la mayor parte de la clase está dispersa, desorganizada y fuera de la influencia de los núcleos más esclarecidos y combativos del proletariado. Eso es, entre otras cosas, lo que permite el burocratismo sindical, la persistencia del populismo en la ideología popular, y puede permitir ahora que la CTRP base su existencia no sólo en el poder del Estado, sino también en los sectores más atrasados de la clase, de menor experiencia sindical y política. En ese

sentido, es urgente pasar a la acción organizadora del resto de trabajadores no sindicalizados, a la lucha por la derogatoria de la legislación burguesa que impide la sindicalización de la masa mayor de trabajadores dispersos en empresas con menos de 20 obreros.

6.- La necesidad de modificar la actual estructura de la organización sindical heredada del predominio populista, aprista, para enfrentar las modificaciones en la organización empresarial y gremial de los capitalistas.

En efecto, muchos de los sindicatos llamados de empresa, lo son en realidad de una razón social. El régimen de propiedad del capital se ha modificado profundamente, de modo que un mismo grupo de capitalistas (la empresa) tiene la propiedad de numerosas razones sociales en ramas diversas de producción. Así, por ejemplo, Cerro de Pasco no es solamente propietaria de la empresa minera, sino también controla alrededor del 80 o/o del capital invertido en la industria metalúrgica.

Eso quiere decir, que es indispensable combinar la organización sindical en federaciones por rama y por provincias o regiones, con las líneas de propiedad del capital. Eso fortalecerá la articulación orgánica del proletariado y permitirá una mayor capacidad de lucha contra el capital.

7.- La necesidad de conquistar los pactos colectivos por rama y no solamente por empresas o razones sociales, como ocurre hasta ahora, debilitando la capacidad de acción colectiva y solidaria de los trabajadores, y recortando las posibilidades reivindicativas de los obreros de las empresas medias y pequeñas.

8.- La necesidad de utilizar para los fines del proletariado, para el desarrollo de su educación socialista revolucionaria, las contradicciones que la utopía de la conciliación de clases estableció a través de las Comunidades Laborales. Básicamente, se trata aquí de usar a fondo el derecho legal de intervenir en el uso de los recursos de producción, para desarrollar en el seno de la clase la discusión y la elaboración de un programa socialista de uso de los recursos de producción, como alternativa concreta al programa del capitalismo imperialista, la necesidad de proletarizar la dirección de las Comunidades Laborales, y de apoyar desde allí la lucha por las reivindicaciones concretas de la clase.

9.- La necesidad de ligar, de articular, las reivindicaciones obreras con las reivindicaciones del campesinado colono y minifunditario, con las reivindicaciones de las capas medias asalariadas, y de las capas bajas de la pequeña burguesía, así como con las reivindicaciones de los grupos estudiantiles, contra el enemigo común: el capitalismo imperialista y sus socios peruanos, en el campo y en la ciudad.

10.- La lucha por la defensa de las conquistas democráticas de los trabajadores, el derecho a la huelga y a la organización sindical clasista, amenazadas hoy día por un régimen de orientación corporativista, cuya naturaleza lo lleva a la destrucción de esas conquistas. Esa lucha tiene que vincularse a la defensa de las libertades democráticas precariamente conquistadas en este país por la permanente lucha de los trabajadores: la libertad de información, de opinión, de prensa, de organización política.

11.- La organización de comités populares, encabezados por los sindicatos, para el control popular de los precios de las subsistencias y para hacerse cargo de su distribución.

12.- La organización de una movilización nacional del proletariado y los asalariados de capas medias, para obligar a la burguesía y a su gobierno a aumentar los salarios y los sueldos y mejorar las condiciones de trabajo.

13.- La organización de comités de obreros y de campesinos, para apoyar la lucha de los campesinos por su derecho a la tierra, a la organización colectiva del trabajo, la autonomía de sus organismos sindicales y comunales contra el Sinamos y las Ligas Agrarias, y el rechazo al pago de la deuda agraria a los terratenientes.

Asimismo, el apoyo a la lucha campesina por la consolidación de sus conquistas bajo formas de poder popular local autónomo frente a los poderes de terratenientes gamonales y capitalistas.

14.- La organización de movilización nacional del proletariado para la defensa del derecho de huelga, ahora amenazado por la práctica de ilegalización de todas las huelgas y por el art. 46 del D.S. 006 que obliga a la bianualidad de los pliegos de reclamos. Aunque actualmente en suspenso, esa disposición es una amenaza que debe ser derogada.

15.- La lucha por la estatización sin pago de las empresas controladas por los monopolios imperialistas y la reorganización de esas empresas bajo la dirección de los trabajadores.

16.- La lucha por la libertad de los presos campesinos y obreros por razones sindicales o políticas, así como por la libertad de todos los presos políticos y la repatriación de los dirigentes revolucionarios desterrados por el régimen militar.

17.- La organización de un sistema nacional de educación proletaria, de investigaciones revolucionarias.

bajo el control de los sindicatos, para que la clase obrera y el resto del pueblo puedan darse a sí mismos una educación de clase y desarrollar su conciencia revolucionaria.

Todas estas tareas, exigen el fortalecimiento de las organizaciones sindicales de los trabajadores de la ciudad y del campo, tanto obreros como asalariados de capas medias (magisterio, bancarios, empleados, etc.), el fortalecimiento de una central nacional bajo conducción socialista revolucionaria, la defensa masiva y energética de la autonomía de esas organizaciones frente a sus enemigos de clase y sus organismos corporativistas y represivos.

En las actuales circunstancias, frente a la escalada represiva, ningún núcleo de trabajadores revolucionarios socialistas, cualesquiera que sea la corriente concreta a la que corresponda, puede llevar a cabo la lucha por todas estas tareas solamente con sus propias fuerzas. En esta batalla larga, no caben dogmatismos ni sectarismos inútiles como nocivos: De lo que se trata, por lo tanto, es contribuir en común a la construcción de una plataforma común de lucha, capaz de movilizar a todas las fuerzas combativas de los trabajadores y de organizar la lucha de las masas, y que puede canalizarse como una tendencia socialista revolucionaria en un Frente Clasista de Trabajadores, a donde confluyan todos los que se dispongan a la defensa de las conquistas obreras y populares y al desarrollo de la educación y organización revolucionarias de la clase. En torno de la plataforma de ese Frente, puede orientarse la lucha por el fortalecimiento de las organizaciones del proletariado, como base para el desarrollo de un movimiento popular revolucionario.

SEIS MESES EN HUELGA

Los trabajadores y todo el pueblo peruano deben saber que después de más de seis meses de huelga, los obreros de construcción civil de Marcona no han recibido hasta este momento ninguna atención de parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Esos obreros han venido a Lima marchando a pié a través de 600 kms durante 32 días, han estado en huelga de hambre durante 13 días, y durante todos estos sacrificios han recibido el apoyo solidario de numerosos sindicatos, organizaciones estudiantiles y de parte algunos sacerdotes que apoyan las luchas de los trabajadores.

A pesar de todo ello y a pesar también de algunas promesas inválidas hechas por ciertos prominentes personeros del Gobierno los intereses de la J.J. Camet, a cuya explotación directa están sometidos los obreros en huelga, y de la Marcona Mining Co., la empresa imperialista a cuyo servicio opera la J.J. Camet, han prevalecido en las decisiones oficiales. En esta conducta, perfectamente normal en un régimen capitalista, la actitud conciliadora de los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, miembro de la CGTP, ha contribuido a infligir una derrota a los sacrificados compañeros de construcción civil de Marcona.

Esos cc. trabajadores no gozan de seguro social, no tienen estabilidad laboral, no tienen beneficios sociales como vacaciones, etc., a pesar de estar trabajando ininterrumpidamente desde hace diez años en la misma empresa y en los mismos trabajos de la empresa imperialista Marcona Mining, y sufren ahora las represalias de Camet y Marcona Mining Co., que ha despedido a numerosos trabajadores por ejercer el derecho de organizar su sindicato. ¿Alguien puede dudar de la rigurosa justicia de sus reclamos y de la evidente identificación de la política laboral del régimen y de los intereses de esas empresas?

Hay algo más en esta historia, que los trabajadores del país deben tener en cuenta. Los seis meses que dura esta situación de los trabajadores de construcción civil de Marcona, a los que ahora se suman en las mismas condiciones los de Cuajone, han sido también los meses en que se ha profundizado la división sindical del movimiento obrero, debido a la imposición de un organismo sindical corporativista como la CTRP, y la conducta cada vez más conciliadora de los dirigentes de la CGTP, que corresponden a una tendencia de reformismo obrero, cuyos intereses convergen con los del reformismo corporativista en curso. Es esa situación del movimiento obrero, lo que permite a los empresarios capitalistas y al régimen militar enfrentarse juntos a las reclamaciones de los trabajadores del país, y en especial a aquellos cuya situación es más desamparada por la debilidad de sus organizaciones nacionales, como es el caso de construcción civil.

Los trabajadores del Perú no pueden soportar sobre sus sufridos hombros las dificultades económicas del régimen, las necesidades de ganancia mayor de los capitalistas imperialistas y de sus socios privados y públicos en el país. Requieren, por eso, cohesionar sus organizaciones, fortalecer su temple de combate, clarificar su conciencia sobre las características opresivas de la actual situación, cerrar filas en torno de direcciones clasistas no-conciliadoras, defender a sus dirigentes de la represión y de la arbitrariedad.

los Trabajadores callados

FRANCISCO C. WEFFORT

Este artículo que pone en evidencia los peligros que para el proletariado significa cualquier debilitamiento de la capacidad reivindicativa de sus sindicatos, ha sido tomado de "Opiniao", No. 12, 22-29 de enero de 1973. Su autor Francisco C. Weffort es un conocido científico social brasileño.

E

n una comparación entre Brasil y Japón, el señor Roberto Campos presenta la utilización de "reservas abundantes de mano de obra barata" como una de las condiciones de los "milagros económicos" en curso, en los dos países. Hasta allí nada nuevo. El bajo precio de la fuerza de trabajo en el Brasil es hecho conocido mucho antes de las entusiastas comparaciones con el Japón. Cuando estaba de moda la comparación de Brasil con Egipto o con la India en el espíritu del modelo de desarrollo capitalista nacional, los tecnócratas populistas de la época ya sabían de este hecho, y no eran pocos los que apoyaban en él algunas de sus esperanzas, en relación con el crecimiento económico del país (¿alguien recuerda aún, cómo se soñaba utilizar las técnicas de "labour intensive" para promover el desarrollo?).

Pero lo interesante en el artículo del señor Campos es que él va más allá de la observación general del hecho, y especifica las causas de la abundancia de mano de obra barata. Y la primera que menciona, es precisamente la "debilidad de los sindicatos obreros". En este tipo de explicación, si el señor Campos no dice toda la verdad, se aproxima bastante a ella y, de cualquier modo, va mucho más lejos de lo que nunca fue capaz el romanticismo económico de la tecnocracia populista.

Sobre el mismo punto, el ministro Delfim Netto fue aún más extenso en las declaraciones que prestó al Financial Times: "Nunca tuvimos sindicatos fuertes en el pasado. (...) Aun si los trabajadores pudieran exigir salarios más altos, es claro que a largo plazo no es posible permitir aumentos mayores del 4 o/o. Es obvio que en los últimos seis años, los salarios reales no podrían haber subido más que 4 ó 5 por ciento al año sin aumentar las presiones inflacionarias. Así que los trabajadores comprenden esta posición". Aun cuando sea difícil aceptar los porcentajes del ministro, sin discutir la adecuación del año tomado como base (por ejemplo, ¿por qué los últimos seis años y no los últimos ocho?), no hay cómo dejar de reconocer que, en medio del juego engañoso de las cifras, hay algo bastante preciso en estas declaraciones, que defi-

nen de manera aún más nítida el sentido de las alusiones del señor Campos a los sindicatos. En rigor, lo que el ministro hace, es señalar de manera cruda y directa un aspecto decisivo de este proceso de acumulación capitalista que se ha llamado "milagro brasileño": los sindicatos siempre fueron débiles y deben continuar siendo débiles para que el "milagro" continúe. No se puede pedir mayor claridad a quien está en las funciones de administrador de la economía y, por así decirlo, que parece considerarse en la obligación de ser milagroso. Quien quiera una formulación alternativa puede tomar ésta del señor Campos: el crecimiento de los salarios a un ritmo inferior al de la producción es ciertamente un "método socialmente injusto pero eficaz, de promover la acumulación del capital". Tal vez haya en todo esto un leve indicio de cinismo, pero no hay dudas de que los economistas del 'establishment' revelan una innegable claridad sobre su propio papel, tanto como sobre algunos aspectos básicos del proceso capitalista en el país.

De cualquier modo, hay un punto oscuro en las declaraciones del ministro. Después de hablar de los sindicatos y de hacer consideraciones sobre la relación entre salarios e inflación, dice que piensa que los trabajadores comprenden su posición. ¿Estaría el ministro confundiendo los trabajadores con los sindicatos? Creo que vale la pena examinar de cerca esta cuestión. Cuando se dice que los sindicatos son débiles, es necesario, antes de poder concluir cualquier cosa sobre las actitudes de los trabajadores, especificar de qué sindicatos se habla. Por lo menos, sería preciso definir en qué consiste su debilidad.

Todos saben que los sindicatos actuales fueron instituidos, menos para representar las reivindicaciones económicas de los trabajadores, que para fines de sustentación política del régimen populista. De ahí, la ambigüedad básica de la organización sindical brasileña, que como toda organización sindical de tipo fascista debería servir, tanto para movilizar como para reprimir los movimientos de los trabajadores, dependiendo de lo que interese a los gobiernos en determinados momentos. Así es como la estructura sindical creada en 1939 fue eminentemente represiva hasta comienzos de los años 50. En este largo período los sindicatos tuvieron libertad apenas en dos momentos, cuando el gobierno de Vargas enfrentaba graves crisis

(1) En un reciente artículo "La geisha y la queja", publicado en su columna habitual de 'El Estado de Sao Paulo'.

políticas que posteriormente deberían dar como resultado su quiebra. Desde el punto de vista de la representación de los intereses de los trabajadores, los sindicatos sólo tuvieron alguna eficacia durante los años 1956-1960, cuando una expansión económica propiciada por el gobierno de Kubitschek, les permitió actuar como un mecanismo de defensa del salario real. Pero este período no sigue la regla anterior: a pesar de las apariencias de estabilidad política, el país se encontraba ya en medio de la crisis del régimen populista. Es cuando se forma el esquema de alianza de clases para la sustentación del régimen, que debería reservar a los sindicatos un papel importante en el gobierno de Goulart. Papel de tipo político que no por esto puede garantizar a los trabajadores contra el proceso de deterioración de los salarios en el curso de aquellos años. La ambigüedad de los sindicatos es pues, de estructura, y consiste en el hecho de que, como ya lo dijéramos, su libertad nunca fue otra cosa que la libertad de apoyar a los gobiernos.

Lo más notable, por ello, es que esta estructura sindical se haya mantenido durante tanto tiempo, a pesar de las muchas críticas que siempre le han sido dirigidas. Lo peor es que, en rigor, no se puede mencionar ningún partido o tendencia política en el país, que no haya contribuido de alguna forma para preservarla. Comenzando por la izquierda del período populista, que con su habitual oportunismo, no sólo apoyó sino que acabó por transformar esta estructura sindical, copiada del fascismo, en el simulacro de poder que fueron los sindicatos en el fin de fiesta del gobierno de Goulart. Evidentemente, no se podría esperar que los gobiernos despreciasen el instrumento que tenían en las manos: y de hecho todos los gobiernos constituidos en el país desde 1945 utilizaron la estructura sindical, si no para la movilización, como lo hicieron después de 1954 los populistas, por lo menos para la represión, como ya lo había hecho Vargas durante la dictadura.

Los sindicatos, después de 1964, parecen estar llegando a su punto máximo de deterioración. A pesar de todas las críticas hechas antes de 1964 por los liberales, especialmente de la antigua UDN, a la utilización de los sindicatos como instrumento del Estado, el gobierno de Castello Branco no sólo preservó la estructura sindical sino que en cierto modo reforzó su carácter represivo. La ley de huelga y la eliminación de la estabilidad, sin hablar de las muchas intervenciones habidas en los sindicatos, son ciertamente las innovaciones más importantes hechas en aquellos años. Es curioso observar que este gobierno, que muchos consideran como el más liberal dentro de los que componen hasta aquí el régimen actual, se condujo con los trabajadores de manera más rígida que el gobierno español, cuando éste tuvo que considerar una situación semejante a comienzos de los años sesenta. En los dos casos, los gobiernos, preocupados con la elevación de la productividad y la modernización de la economía, decidieron eliminar la estabilidad de los trabajadores. La diferencia está en que el gobierno de Franco, con todo su conocido autoritarismo, compensó a los trabajadores con el establecimiento de un mecanismo efectivo para los contratos colectivos de trabajo, en tanto que el gobierno brasileño, con todo su pregonado liberalismo, retiró la estabilidad y no ofreció nada a cambio. De este modo, la disposición

de los contratos colectivos, que evidentemente consta en las leyes sociales brasileñas, continúa como siempre siendo letra muerta. ¿Cómo hacerla eficaz, con todos los impedimentos creados para el ejercicio legal y directo de las huelgas?

Nadie puede tener dudas, por lo tanto, sobre la debilidad de los sindicatos. Y la verdad es que nunca fueron tan débiles como después de 1964. Lo que es extraño es que, las personas olviden tan fácilmente, dos procesos históricos y políticos que produjeron su debilidad. ¿Sería necesario recordar que la eliminación de la estabilidad y la ley de huelgas vienen del mismo período cuya política económica aconsejaba el congelamiento de los salarios? Caso típico de la mentalidad dominante en las élites brasileñas, el señor Campos toma hoy como un dato para sus análisis aquello que él mismo ayudó a producir. En esta inversión hay un límite para su objetividad y, de cierto modo, para su política actual. Ciertamente, los trabajadores no pueden (por lo menos a través de los sindicatos) ofrecer muchos ejemplos de la 'queja' del consumidor brasileño, que a diferencia del trabajador japonés "geisha", paciente y tradicionalista, excitaría la demanda de crecimiento de la economía. Y la política seguida por el señor Campos en 1964-67 tiene mucho que vez con esto.

Pero volvamos a las palabras del ministro Delfim Netto sobre la comprensión de los trabajadores. Ciertamente habrá excepciones, pero el hecho es que la representatividad de los sindicatos brasileños nunca habrá alcanzado, desde los años 50, un nivel tan bajo. Siempre fueron insuficientes como mecanismo de representación de los trabajadores, pero de cualquier modo pudieron, por lo general, garantizar un mínimo de eficacia que precisamente los transformaba en un instrumento de alguna utilidad. De este modo, aun cuando fueran siempre muy limitados, servían por lo menos como un canal para las insatisfacciones económicas de los trabajadores. Y era esto precisamente lo que permitía su utilización para fines manipulativos. Después de 1964, sin embargo, este estado de cosas parece haber cambiado radicalmente: las dos únicas huelgas industriales importantes, ocurridas desde entonces, parecen evidenciar que la estructura sindical oficial ya se encuentra enteramente quebrada. Tal vez sea aún posible encontrar uno que otro sindicato relativamente representativo, pero las eventuales excepciones no significan ninguna garantía para el funcionamiento de la estructura sindical en el país, ni aun en el nivel precario en que siempre funcionó en el pasado.

En una situación como ésta, en que los trabajadores no cuentan con ningún medio efectivo de expresión, y están sometidos a una rigurosa política de control salarial, no es fácil encontrar motivos para considerarlos satisfechos. Casi me arriesgaría a decir que ocurre precisamente lo contrario, particularmente entre los trabajadores de los sectores más modernos de la economía, los mejores pagados, pero también los más próximos a la disposición para las 'quejas' de que hablaba el señor Campos. Ciertamente, los trabajadores comprenden la posición del ministro y del gobierno. Pero parece muy poco probable que la comprendan de la misma manera que el ministro, o que estén dispuestos a aceptar sus explicaciones y justificaciones.

el Fascismo hoy

RUI MAURO MARINI

a

nte el fracaso de sus aspiraciones electorales, las clases dominantes se han dedicado a revisar su estrategia para enfrentar al movimiento popular y promover el derrocamiento del Gobierno. El nuevo proyecto estratégico que empieza a perfilarse en el campo de la oposición es netamente fascista.

La tentación fascista no es nueva para la burguesía chilena. Ella empezó a abrirse paso desde 1971, al constituirse "Patria y Libertad" y al iniciarse la propaganda en favor de las ideas gremialistas. Su penetración en sectores de los partidos tradicionales, en particular sus alas juveniles, se evidenció cuando los primeros grupos de choque nacionales y demócratacristianos irrumpieron en las calles, durante la asonada de las ollas vacías. Tras un ascenso sostenido en los meses de agosto y setiembre de 1972, el movimiento fascista se planteó pasar al asalto del poder, a través del paro de octubre.

En relación con los objetivos que se proponía, el intento fascista de octubre se saldó con la humillante derrota. Aun más, engendró resultados opuestos a los que perseguía: fortaleció la unidad de la clase obrera y amplió su influencia sobre el pueblo; resquebrajó a la Democracia Cristiana, agudizando las contradicciones entre sus dirigentes y sus bases, y precipitó el acercamiento que se venía gestando entre las Fuerzas Armadas y la Unidad Popular. El error cometido fue tan grande, que la burguesía se vio forzada a pedir plazo para pagarlo; la Unidad Popular se lo concedió, mediante el cambio ministerial de noviembre, pero se le presentó la factura el 4 de marzo.

La realidad, sin embargo, tiene siempre dos colores. A pesar de su fracaso, el fascismo alcanzó en octubre una nueva etapa de su desarrollo, al dar públicamente a luz al movimiento gremialista. La relación estrecha entre los dirigentes de éste y las organizaciones fascistas no constituye ningún secreto; fue incluso proclamada por el entonces Secretario General de "Patria y Libertad", Roberto Thieme, quien, poco antes de su desaparición, declaró a un corresponsal extranjero que Benjamín Matte y otros dirigentes

gremialistas son miembros del consejo político de esa organización (Chile HOY 39). La declaración de Thieme no fue desmentida.

Las clases dominantes emprenden ahora la reelaboración de su estrategia. Esta comprende, en primer lugar, la unificación de mando de las huestes burguesas, más que nunca ame nazadas en virtud de la desmoralización que las afecta y la exacerbación de sus divergencias, provocadas por el resultado electoral. Además de consolidar el bloque parlamentario opositor, requisito indispensable para que la izquierda pueda ser combatida a nivel del Estado, mediante la contraposición del Parlamento al Gobierno, el proyecto estratégico de la burguesía incluye otro elemento: la integración de la representación gremialista al comando único, en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales, los cuales deben abandonar sus pretensiones de "primar ciegamente sobre los gremios" y llegar con éstos a un "consorcio explícito o implícito" ("El Mercurio", 10 de marzo). En sucesivas declaraciones, dirigentes nacionales, como Sergio Onofre Jarpa y Juan Luis Ossa, y gremiales, como Jorge Fontaine, han abogado por lo mismo.

Este punto de vista diverge del que había expresado Thieme sólo en el sentido de que, para "Patria y Libertad", el gremialismo debe primar sobre los partidos tradicionales. Menos hiperbólico que "El Mercurio", Thieme ponía esto como condición necesaria para llegar a "un paro o cualquier otra cosa" y poder "decirle al señor Allende: Señor, ¡afuera!" A su modo de ver, el paro o esa cualquier otra cosa no podría ser programado "desde arriba", sino que tendría que "nacer desde abajo, de la base". Así es como el fascismo podría contar con la adhesión de las Fuerzas Armadas (lo que juega también un papel destacado en el esquema levantado hoy por "El Mercurio"). Por otra parte, las organizaciones fascistas no se limitarían a trabajar en el sentido del paro, sino que lo apoyarían directamente, "sea defendiendo una radio democrática (sic), sea defendiendo el sistema de abastecimiento, sea defendiendo los centros vitales del país".

La diferencia señalada entre el esquema de "Patria y Libertad" y el de "El Mercurio" demuestra que la discusión entre los centros políticos de la burguesía en cuanto a los detalles de su estrategia aún no ha sido agotada. Hay otras diferencias. Aunque un nuevo paro, bajo condiciones políticas y orgánicas más favorables que el de octubre, siga polarizando su

Este artículo ha sido tomado de CHILE HOY No.42 del 23 al 29 de marzo

atención, no es seguro que los centros dirigentes de la burguesía compartan el apuro de Thieme, cuando señalaba, como estrategia "a largo plazo", la preparación del paro para "dentro de los próximos sesenta días de la elección". Es posible que los sectores burgueses más lúcidos no sólo se den más tiempo, sino que relativicen al paro como forma fundamental de lucha en esta etapa del proceso.

Si se trata de dar "una batalla junta por junta (de vecinos), centro por centro (comunal), manzana por manzana" ("Qué Pasa" No. 99, en comentario político basado en declaraciones de Guillermo Chadwick, jefe de la División de Organizaciones Comunitarias del Partido Nacional, y Mario Cisternas, Secretario General del Departamento de Poblaciones de la Democracia Cristiana), los plazos tendrán que ser más largos. Y si se considera, como sostiene esa misma revista, que será sobre la base de esa batalla que tendrá lugar "todo enfrentamiento futuro, sea éste ideológico o

físico", las formas de luchas serán más variadas, independientemente de que tengan al paro como objetivo.

Lo que importa retener de la discusión a que se asiste actualmente en el campo de la burguesía es que ella destaca, como rasgo sobresaliente, la afirmación del proyecto fascista. Es decir, la combinación de la lucha parlamentaria y extraparlamentaria, centrada en la constitución de un movimiento de masas reaccionario. La izquierda tiene que sacar de esto las debidas consecuencias, y la más importante es que la característica básica del período abierto el 4 de marzo reside en la agudización de la lucha entre la burguesía y la clase obrera por atraer a sus respectivos campos a las amplias masas del pueblo. En esa lucha, lo principal es la unidad revolucionaria, una agitación y propaganda redobladas y el desarrollo de las organizaciones populares bajo influencia proletaria.

LAS HUELGAS EN 1973

En los meses de enero a abril se produjeron alrededor de más de 200 huelgas en los diferentes sectores de la producción. Los motivos varios de estos conflictos evidencian el mantenimiento y reforzamiento de una estructura empresarial que no concilia con los intereses de los trabajadores, y que pone de manifiesto la falsa y tan repetida ideología-en-práctica de la conciliación de intereses entre el capital y el trabajo. Se producen así las huelgas por falta de pagos a los trabajadores —haber, viáticos, bonificaciones—, por negativas de las empresas ante la solicitud de aumentos salariales, por demandas de reposición de dirigentes y trabajadores suspendidos o despedidos arbitrariamente, por cambios de colocación y malos tratos. Y ante esta situación laboral cada vez más conflictiva: el gobierno anuncia una 'Reglamentación del derecho de huelga' que significa evidentemente una de las medidas más antipopulares y represivas contra los trabajadores. (Ver Nota página 35)

Consignamos aquí una relación de algunas de las huelgas ocurridas en este lapso.

EN EL SECTOR MINERO:

- FEDERACION DE TRABAJADORES MINERO-METALURGICOS.
Nacional. Del 7 al 9 de marzo.
- COMPAÑIA MINERA JESUS ARIAS DAVILA.
Huancavelica. Del 1 al 13 de marzo. 330 trabajadores en huelga.
- MINA DE COBRE RIO SECO
Ica. Del 10 al 12 de enero. 540 trabajadores.
- COMPAÑIA MINERA PATIVILCA S.A. BUJAMA
Lima. Del 12 al 19 de enero. 354 trabajadores.
- COMPAGNIES DES MINES DE HUARON.
Pasco. Del 19 de enero al 5 de febrero. 1635 trabajadores en huelga.
- COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE.
Lima, del 25 al 16 de febrero. 1288 trabajadores en huelga.
- COMPAÑIA MINERA COBRE PAMPA.
Ica. Del 23 al 28 de enero. 180 trabajadores en huelga.
- SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION
Tacna. Del 4 al 6 de enero. 738 trabajadores en huelga.
— Del 23 al 30 de enero. 1900 trabajadores en huelga.
— Del 12 al 17 de febrero. 275 trabajadores en huelga.
— Del 20 al 13 de febrero. 2047 trabajadores en huelga.
— Moquegua. Del 22 al 30 de enero. 184 trabajadores en huelga.
- COMPAÑIA DE COBRE RIO SECO.
Ica. Del 30 de enero al 8 de febrero. 300 trabajadores en huelga.
- MARCONA MINING COMPANY
Ica. Del 14 al 16 de febrero. 28 trabajadores en huelga.
Del 23 de febrero al 15 de marzo. 2,200 trabajadores en huelga.
- SOCIEDAD MINERA YAULI-MOROCOCHA.
Junín. Del 27 de febrero al 1 de marzo. 568 trabajadores en huelga.

- FRENTE SINDICAL OBRERO CUAJONE.
Moquegua; Del 8 al 12 de marzo.
- COMPAÑIA MINERA SAN EXPEDITO.
Pasco. Del 8 al 15 de marzo. 115 trabajadores en huelga.

- COMPAÑIA MINERA SANTO TOMAS.
Ancash. Del 9 al 15 de marzo. 400 trabajadores en huelga.
- COMPAÑIA MINERA CONDOR.
Huancavelica. Del 19 al 20 de marzo. 76 trabajadores en huelga.

EN EL SECTOR TEXTIL:

- TEXTIL SABAL PERU
Lima. 22 y 23 de febrero. 113 trabajadores en huelga.
- FABRICA DE TEJIDOS UNION LIMITADA
Lima. Del 9 al 12 de marzo. 80 trabajadores en huelga.

- FABRICA NACIONAL TEXTIL AMAZONAS.
Lima. Del 3 al 5 de enero. 200 trabajadores en huelga.
Del 15 al 19 de enero. 420 trabajadores en huelga.
- FABRICA TEXTIL LUCRE, GARMENIA HNOS.
Cuzco. A partir del 3 de enero 185 trabajadores en huelga.

EN OTROS SECTORES:

- SCALA S.A.
Lima. Sindicato de empleados, 600 afiliados. En huelga del 6 al 19 de enero.
Sindicato de obreros, 380 afiliados. Huelga de solidaridad del 9 al 19 de enero.
El 31 de marzo, 505 empleados y 234 obreros en huelga.
El 2 de abril 505 empleados y 234 obreros en huelga.
- LAVANDERIAS AMERICAN DRY CLEANERS.
Lima. Del 2 al 16 de enero. 170 trabajadores en huelga.
- EMPRESA EDITORA "EL COMERCIO".
Lima. Del 8 al 14 de enero. 440 trabajadores en huelga.
- SOCIEDAD ELECTRICA AREQUIPA LTDA.
Arequipa. Del 11 al 17 de enero. 250 trabajadores en huelga
- SOCIEDAD PARAMONGA LIMITADA.
Lima. 25 y 26 de enero. 400 trabajadores en huelga.
9 y 10 de marzo. 10 trabajadores en huelga (Empresa ADEPA)
12 y 13 de marzo. 51 trabajadores en huelga.
17 y 18 de marzo. 60 trabajadores en huelga.
- CONSORCIO MANUFACTURERO NACIONAL, CONACO.
Lima. Del 31 de enero al 8 de febrero. 80 trabajadores en huelga.
- MORAVECO S.A.
Lima. Del 18 al 26 de enero. 800 trabajadores en huelga.
- COMPAÑIA NACIONAL DE METALES S.A. FAMAME-TALSA.
Lima. Del 18 al 20 de enero. 500 trabajadores en huelga.
- MANUFACTURAS DE METALES Y ALUMINIOS RECORD.
Lima. 19 de marzo. 440 trabajadores en huelga.

- COMPAÑIA CONSTRUCTORA RODRIGUEZ LARRAIN
Lima. 9 y 10 de enero. 420 trabajadores en huelga.
- COMPAÑIA CONSTRUCTORA SAYVAY. FIGUEROA S.A.
Lima. 1 y 2 de febrero. 212 trabajadores en huelga.
- ARCO PUIRAY CIA. CONSTRUCTORA RODRIGUEZ.
Cuzco. 22 y 23 de febrero. 113 trabajadores en huelga.
- EMPRESA PESQUERA MEILAN.
Moquegua. 130 trabajadores en huelga del 22 de enero al 8 de febrero.
Arequipa. 60 trabajadores en huelga del 25 de enero al 8 de febrero.
- COMPAÑIA PESQUERA COISHCO.
Moquegua. El 26 de enero 94 trabajadores en huelga.
- PESQUERA MATARANI.
Moquegua. 26 y 27 de enero. 56 trabajadores en huelga.
- INDUSTRIAL PESQUERA HUASCAR S.A.
Moquegua. El 26 de enero 52 trabajadores en huelga.
- INDUSTRIAL VIDRIO NEUTRO S.A.
Lima. Del 2 al 4 de febrero. 518 trabajadores en huelga.
- EMPRESAS ELECTRICAS ASOCIADAS
Lima. 10 y 11 de febrero. 180 trabajadores en huelga.
- FABRICA NICOLINI HNOS. MOLINO UNION y ANEXOS.
Lima. Del 22 de febrero al 2 de marzo. 320 trabajadores.
- FABRICA DE CALZADO "DIAMANTE".
Lima. Del 28 de febrero al 23 de abril. 1,200 trabajadores en huelga.

A esta numerosa lista habría que agregar otras importantes huelgas producidas en el mes de febrero, en otros sectores como, el sector Médico (3-10 de febrero), el sector de Comunicaciones (Trabajadores de Teléfonos, 9-10 de febrero), el de la Marina Mercante (Oficiales, tripulantes y obreros de la CPV, 16-24 de feb.), el de los Trabajadores de las Universidades (Paro nacional FENTUP, 27-28 de febrero), el sector bancario (Paros decretados por la FEB).

Y recordar que el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Marcona, continúa en huelga desde hace más de 6 meses . . .